VIENTO SUR

● Derecho a la ciudad: poder de las plazas y municipalismo. Carlos Sevilla Alonso (editor). El espacio público como campo de batalla. Ana Méndez de Andés. Desde V de Vivienda a la PAH. Carlos Huerga. Poder, estrategia y elecciones ante el ciclo político en el

Estado español. Brais Fernández e Isa Serra. Municipalismo democrático. Guillermo Zapata.

• Grecia. A la cabeza de la lucha contra la austeridad en Europa. Norbert Holcblat.

• Francia. Asesinatos en Charlie Hebdo y en Porte de Vincennes: reflexionar y actuar para no sucumbir. Julien Salin-



Foto: A Feninos:

gue. Europa. Un decálogo a contracorriente sobre la islamofobia. Alberto López y Ángeles Ramírez. EE UU. Ha nacido un nuevo movimiento por los derechos civiles. Dan La Botz. Ladis, una vida solidaria. De la lógica social a la lógica ecológica, dos visiones en conflicto. Por un ecologismo de la razón. Ladislao Martínez. La criminalización de la pobreza al servicio del neoliberalismo. Isabel Torre. La Renta Básica Universal y la Seguridad Social. Mikel de la Fuente. Desmontando el TTIP. Lola Sánchez.



www.vientosur.info vientosur@vientosur.info

Consejo Asesor

Santiago Alba Rico Luis Alegre Zahonero Nacho Álvarez-Peralta Josep María Antentas Iñaki Bárcena Andreu Coll Íñigo Errejón Sandra Ezquerra Joseba Fernández José Galante Pepe Gutiérrez-Álvarez Pedro Ibarra Petxo Idoyaga Bibiana Medialdea Justa Montero Roberto Montoya Rebeca Moreno Daniel Pereyra Enric Prat Jorge Riechmann Clara Serrano Carlos Sevilla Miguel Urbán Crespo Esther Vivas Begoña Zabala

Redacción **Editor fundador**

Miguel Romero

Redacción

Jaime Pastor (editor)

Revista impresa

Secretariado de la Redacción

Marc Casanovas Brais Fernández Antonio García

Antonio Crespo (Voces) Manuel Garí (Subrayados) Carmen Ochoa (Miradas)

Web

Tino Brugos Martí Caussa Mikel de la Fuente Josu Egireun Manuel Girón Petxo Idoyaga Gloria Marín Alberto Nadal Sergio Pawlowsky

Diseño original

Jerôme Oudin & Susanna Shannon

Magueta

MEDIAactive comercial@tmediaactive.es

Redacción

C./ Limón, 20 Bajo ext-dcha. 28015 Madrid. Tel. y Fax: 91559 00 91

Administración y suscripciones

Josu Egireun. Tel.: 630 546 782 suscripciones@vientosur.info

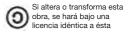
Producción

Oar Comunicación, SA C/Los Madrazo, 24 28014 Madrid DL: B-7852-92 ISSN: 1133-5637









Número 138 / Febrero 2015 / 8 €

el desorden

A la cabeza de la lucha contra la austeridad en Europa Norbert Holcblat 5

Francia

Asesinatos en Charlie Hebdo y en Porte de Vincennes: reflexionar y actuar para no sucumbir

Julien Salingue 13

Europa

Un decálogo a contracorriente sobre la islamofobia

Alberto López Bargados y Angeles Ramírez Fernández 19

Ha nacido un nuevo movimiento por los derechos civiles

Dan La Botz 27

miradas

Paisajes de silencio Alberto Espinosa Hernández

Carmen Ochoa Bravo 39

Espacio urbano, poder de las plazas y municipalismo

Presentación. Carlos Sevilla 45

El espacio público como campo de batalla

Ana Méndez de Andés 48

Desde V de Vivienda a la PAH, la lucha por el derecho a la vivienda

Carlos Huerga 57

Poder, estrategia y elecciones ante el ciclo político en el Estado español

Brais Fernández e Isa Serra 62

Municipalismo democrático: ¿Cómo se organiza una ciudad?

Guillermo Zapata 71

Ladis, una vida solidaria (1958-2014)

Jaime Pastor 79

De la lógica social a la lógica ecológica, dos visiones en conflicto

Ladislao Martínez. 81

Por un ecologismo de la razón

Ladislao Martínez 87

iora

La criminalización de la pobreza al servicio del neoliberalismo

Isabel Torre 93

La Renta Básica Universal y la Seguridad Social

Mikel de la Fuente 102

Desmontando el TTIP: riesgos y amenazas del Tratado Trasatlántico

Lola Sánchez Caldentey 110

voces iiradas

Nombres escritos en las cortezas de los árboles

Ángeles Rodríguez López Antonio Crespo Massieu 119

śubrayados subrayados

El POUM y el caso Nin. Una historia abierta. Pelai Pagès y Pepe Gutiérrez-Álvarez Jaime Pastor 125

La economía franquista y su evolución. Los análisis económicos del Partido Comunista de

España. Enrique González de Andrés

José Babiano 126

La lucha de clases. Una historia política y filosófica. Domenico Losurdo

Antonio García Vila 127

Panfleto para seguir viviendo. Fernando Díaz

Alberto García Teresa 128

En el número anterior apareció como autor de las fotos de contraportada T. García cuando en realidad el autor es G. Ribas

propuesta

Alberto Espinosa Hernández

Puntos de difusión de VIENTO SUR

Barcelona La Central del Raval Venir a cuento

Elisabets, 6 (08001). La Central

Mallorca, 237 (08008). Enclave de Libros Laie

Pau Claris, 85 (08010).

Bilbao Libreria Cámara

Euskalduna, 6 (48008).

Burgos Música y Deportes

Paseo del Espolón, 16 (09003).

Punto de Fuga

Café & Libros Plz. Alonso Martínez. 7A (09003).

Granada Librerías Picasso

Obispo Hurtado, 5 (18002).

Librería Reciclaje San Jerónimo, 13, bajo

(18001).

Granollers Anònims, menjars i pensars

Miquel Ricomà, 57 (08401).

Huesca Librería Anónima

Cabestany, 19 (22005).

Las Palmas de Gran Canaria Asociación Canaria Local Cambalache de Economía Alternativa

Café dEspacio Cebrián, 54 (35003). Madrid

Embajadores, 29 (28012).

Relatores, 16 (28012).

La Central **MNCARS**

Ronda de Atocha, 2 (28012).

Librería Antonio Machado

Fernando VI. 17 (28004). Librería Rafael

Alberti Tutor, 57 (28008).

La Fugitiva Librería Café

Santa Isabel 7 (28012). Librería Facultad de Ciencías Políticas y Sociología

Universidad Complutense Campus de Somosaguas (28040).

Sin Tarima Libros Príncipe, 12 (28012). Traficantes de

Sueños Duque de Alba, 13 (28012).

Murcia Itaca Cafetería Librería

Mariano Vergara, 6 (30003).

Oviedo-Uviéu Concevu Abiertu

La Gascona, 12 baxu A (33001).

Martínez Vigil, 30 bajo (33010).

Tienda de Comerciu Valladolid Xuetu

"L'Arcu la Vieya" El Postigu Altu 14, baxu (33009).

Pamplona-Iruñea ESK La Hormiga Atómika Liburuak

Curia 2, bajo (31001). Katakrak, Liburuak Vigo

Kale Nagusia 54 / Mayor 54 (31001).

Santander La Vorágine

Cisneros, 15, bajo (39001).

Sevilla Ateneo Tierra v Libertad

Miguel Cid, 45 (41003).

Torrelavega **DLibros**

Lasaga Larreta, 11 (39300).

València Llibrería Tres i Quatre

Centre de Cultura Contemporània Sant Ferrán, 12 (46001). Librería Sandoval

Plazuela del Salvador, 6 (47002).

Vitoria-Gasteiz

Beethoven, 10, bajo (01012).

Librería Versus

Venezuela, 80 (36204).

Xixón **Espaciu Cultural**

La Manzorga Carmen, 20 (33206).

Zaragoza Librería Antígona

Pedro Cerbuna, 25 (50009).

Kíosko Plaza San Francisco (50009).

La Pantera Rossa San Vicente de Paúl, 28 (50001).

al Vuelo

En medio de las turbulencias y de la aceleración de acontecimientos que sacuden al planeta, este año 2015 va a estar muy condicionado en el caso español por un calendario electoral especialmente intenso: las elecciones andaluzas del 22 de marzo marcarán el inicio, seguidas luego por las municipales y autonómicas en mayo, las catalanas de septiembre y las generales de noviembre. En ese proceso parece probable que llegue a su fin el sistema de alternancia bipartidista que ha contribuido a la estabilidad del régimen, pero está por ver hasta qué punto éste se ve afectado por el ascenso de una nueva fuerza política, Podemos, que puede llegar a canalizar, pese a los muchos ataques sufridos y a algunos errores cometidos, la aspiración de una mayoría social al cambio y a una ruptura constituyente basada en el derecho a decidir de los pueblos y las personas.

Con todo, es evidente también que en la evolución y las potencialidades de Podemos va a influir mucho lo que pueda suceder en **Grecia** en los próximos meses. En efecto, este país constituye hoy un campo de pruebas fundamental en el que está en juego el futuro de Europa y, en particular, el de los pueblos del sur de la eurozona. **Norbert Holcblat** nos describe en su artículo el "modelo" de federalismo autoritario que se ha ido imponiendo en la UE y, con él, la catástrofe social a la que han conducido las políticas austeritarias de la troika en ese país. La victoria electoral de Syriza y su programa de Salónica anuncian un pulso muy duro, como estamos viendo, con la "dictadura de los mercados": la extensión a otros países, como el Estado español, de esa prueba de fuerzas será clave para impedir su aislamiento y poder emprender un nuevo rumbo que facilite, también aquí, el aumento de la ilusión en el cambio que genera Podemos.

En este número el **Plural** lleva por título "**Derecho a la ciudad: poder de la plaza y municipalismo**", coordinado por **Carlos Sevilla**. Partiendo de cómo la actual crisis urbana y sus distintas formas de segregación han ido transformando el repertorio de la protesta, encontramos aportaciones sugerentes sobre el papel de la plaza como epicentro de la acción política, la evolución del movimiento por el derecho a la vivienda y la PAH, la importancia que van a tener los próximos procesos electorales y el protagonismo que en ellos pueden llegar a alcanzar muchas candidaturas de unidad popular.

Los atentados mortales ocurridos en **Francia** a comienzos de este año han provocado un amplio rechazo, pero han vuelto a suscitar nuevos debates y opiniones encontradas sobre los distintos factores a tener en cuenta en la evaluación de este tipo de acciones, evitando la instrumentalización de los sentimientos que generan en uno o en otro sentido. Además de diferentes puntos de vista que hemos ido publicando en www. vientosur.info, hemos optado aquí por ofrecer dos aportaciones que nos parecen relevantes: una reflexión de **Julien Salingue** desde el interior de la sociedad francesa, en la que nos recuerda que "los asesinos no son ni simples 'locos' ni simples 'víctimas'" e insiste en que "la religión no es un factor de radicalización de los jóvenes yihadistas sino el vector de su radicalización"; otra, **de Alberto López y Ángeles Ramírez**, en la que alertan sobre el riesgo de que "las campañas islamofóbicas constituyen un aliado

táctico de la nueva embestida neoliberal, puesto que la inseguridad que aquella provoca justifica la imposición de leyes tipo 'mordaza'" y, añadiríamos, nuevos pactos "antiterroristas" como el suscrito entre PP y PSOE.

El nuevo movimiento por los derechos civiles que está surgiendo en Estados Unidos ha sido, como subraya Dan La Botz, "en gran medida espontáneo, descentralizado, acelerado, creativo y audaz". Ha desvelado el sesgo racista de la policía y del poder judicial y, también, el carácter segregacionista de la mayor parte de las ciudades en ese país, aunque sus formas ya no sean tan violentas como en el pasado. Ahora, hay fundadas razones para pensar que este movimiento ha llegado para quedarse y, partiendo del lema "las vidas de los negros importan", sentar las bases de un nuevo comienzo.

En el número anterior expresábamos nuestra tristeza por la desaparición de **Ladis-**lao **Martínez**, amigo y compañero del Consejo Asesor de esta revista. El pasado 31 de enero se celebró en Madrid un acto multitudinario y muy emotivo de homenaje a su memoria. En este número queremos también recordarle reproduciendo dos artículos suyos que, pese al paso del tiempo, nos parece que reflejan su permanente esfuerzo por tender puentes entre **la lógica social y la lógica ecológica** y, sobre todo, "**por un ecologismo de la razón**", consciente como él era de la labor a contracorriente que esto significa frente al "sentido común" dominante, también en gran parte de la izquierda.

Isabel Torre nos presenta un análisis crítico de los discursos y las prácticas de **criminalización de la pobreza**, hoy en auge, destinados a reducirla a la responsabilidad individual y, por tanto, a estigmatizar a quienes la sufren. La autora denuncia, siguiendo a Wacquant, cómo su demonización sirve para dar nuevos pasos adelante en la disminución del Estado social y, a la vez, intensificar las políticas represivas a través del Estado penal.

La **Renta Básica Universal** es una reivindicación que ha entrado en el debate político con fuerza desde hace tiempo como una respuesta a la gravedad de la crisis social, el desempleo, la precarización y el empobrecimiento crecientes. Con todo, sigue siendo una cuestión controvertida que esperamos abordar ampliamente en un próximo número. En esta ocasión **Mikel de la Fuente** plantea algunos interrogantes que la RBU suscita en torno a los efectos que su puesta en pie tendría en el sistema de la Seguridad Social, una conquista histórica del movimiento obrero que no puede ser reducida a una mera función asistencial del Estado.

El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos ha sido definido por Hillary Clinton como "una OTAN económica" y "tendrá lugar bajo tutela americana". Es toda una declaración de intenciones, como critica la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez, quien denuncia ese proyecto como "toda una bomba de relojería preparada para estallar en el corazón de los estados del bienestar"... allí donde todavía sobreviven algunos de sus restos, como es el caso del Estado español. El secretismo, incluso para el Parlamento europeo, preside estas negociaciones, buscando así ocultar la gravedad de cláusulas como las de arbitraje, en las que los inversores pueden demandar a los Estados cuando su legislación les impida obtener los "beneficios esperados".

1 el desorden global

Grecia

A la cabeza de la lucha contra la austeridad en Europa

Norbert Holchlat

La victoria de Syriza va a permitir aflojar el tornillo de la austeridad que, si exceptuamos los períodos de guerra, ha provocado una reducción sin parangón del nivel de vida de la población griega. A nivel europeo, esta victoria constituye una derrota para quienes, a derecha e izquierda, no dejan de repetir que no hay alternativa a la austeridad y a la destrucción de las conquistas sociales. Ahora bien, las instituciones y los gobiernos europeos no han tardado en reaccionar.

Desde los años 1990, en un primer momento, para satisfacer las exigencias de la entrada en el euro y, después, para satisfacer las de Bruselas, el Pasok (Partido Socialista) empezó a aplicar una política de reducción del gasto público. Esta política le valió a Grecia los elogios de los organismos económicos internacionales (Delorme, 2013) y no tuvo ninguna incidencia en el crecimiento al que iban dirigidas las transferencias europeas. De ese modo, Grecia, cuya integración en el euro fue rechazada en 1998, recibe el beneplácito en junio de 2000 y participa en el lanzamiento del euro. En 2004, su déficit público sufrió un incremento considerable debido a los gastos relacionados con la organización de los Juegos Olímpicos. La derecha, que volvió al poder en 2004, puso en marcha una auditoría de las cuentas públicas que concluyó con una subestimación del monto de la deuda y del déficit, acentuó la austeridad, la presión sobre los salarios y la liberalización de la economía. Estas reformas neoliberales no sirvieron para mejorar la eficiencia del Estado griego (como quedó en evidencia durante los incendios que asolaron el país en el verano de 2007) y tampoco sirvieron para reducir la corrupción que acompañaba a todos los grandes contratos. Ahora bien, quien habla de corrupción habla de corruptores y estos se encuentran en las empresas de los países más importantes de "La deuda exterior griega no hacía sino aumentar: los sucesivos gobiernos griegos apenas se esforzaban por combatir el fraude y la evasión fiscal, privando a Grecia de importantes recursos financieros que se prefería pedir prestados al extranjer"

la Unión Europea; en empresas alemanas como Siemens que en una década llegó hasta desembolsar más de mil millones de euros en prebendas para obtener mercados, y también en empresas francesas, sobre todo del sector armamentístico, como Dessault, que "untó" a los encargados de tomar las decisiones en Grecia.

La bancarrota del Pasok

La adhesión al euro tuvo un doble impacto. Por una parte, la reducción del coste del crédito debido a la convergencia de los tipos de interés, que trajo consigo la explosión del endeudamiento de los hogares y que era lo que sostenía el nivel de consumo. Y, en lo que respecta a los intercambios

exteriores, el euro se transformó en una cortapisa en perjuicio de numerosas ramas económicas griegas; más aún cuando su valor se incrementaba con relación al dólar. Esto hizo que algunos capitalistas griegos deslocalizasen sus empresas hacia países vecinos con salarios más bajos. El déficit comercial es estructural (y, además, aumentó debido a significativas importaciones de material militar; entre 2000 y 2011, Grecia fue el 4.º importador mundial de armas).

La deuda exterior griega no hacía sino aumentar: los sucesivos gobiernos griegos apenas se esforzaban por combatir el fraude y la evasión fiscal, privando a Grecia de importantes recursos financieros que se prefería pedir prestados al extranjero. Esta situación parecía viable mientras las tasas de interés acordadas con Grecia eran bajas (Husson, 2013); pero esta situación cambia con la crisis financiera (aumento del tipo de interés para los préstamos que adquiere el Estado griego en los mercados financieros) y sus primeros efectos tienen un impacto particular en Grecia cuyo paro aumenta, sobre todo entre la juventud.

Las elecciones de 2009 supusieron el retorno al gobierno del Pasok, dirigido por Georges Papandreu, que prometió romper con la "dictadura de los mercados". Un farol que se desinfló rápidamente: ni los prestamistas de Grecia ni la UE estaban dispuestos a admitir ninguna excepción.

Las finanzas internacionales perdieron confianza en la deuda griega y sus títulos se vieron degradados por las agencias de calificación. Grecia no consiguió financiación exterior más que a tipos de interés prohibitivos. Papandreu cedió sin luchar. Grecia basculó hacia la austeridad y en mayo de 2010 negoció una "ayuda" con el FMI y la UE sin plantearse en ningún momento una alternativa para presionar a su "socios" (por ejemplo, una moratoria sobre el pago de la deuda en la que los bancos alemanes y franceses tenían mucho que perder).

Grecia bajo tutela

Esta "ayuda" tuvo como contrapartida un rigor económico reforzado: privatizaciones y exigencia de reducción de salarios, pensiones y subsidios de desempleo, así como la reforma del Código Laboral en detrimento de las y los asalariados. La reforma fiscal golpeó a las rentas medias y bajas al tiempo que reservaba lo fundamental de los privilegios a la Iglesia y a lo armadores. El gobierno griego no abrió ninguna investigación sobre los 2.500 titulares de cuentas en la Banca suiza que le fue remitida.

Para supervisar la ejecución de las medidas exigidas a Grecia, se puso en pie la Troika (FMI, BCE, UE). En noviembre de 2011, ante el aumento de las tensiones sociales (huelga general, revuelta popular durante la fiesta nacional...), Papandreu intentó maniobrar anunciando un referéndum, pero Merkel y Sarkozy le hicieron comprender que ni hablar de eso. Papandreu plegó velas y fue reemplazado por un hombre de Goldman Sachs. En junio de 2012, Nueva Democracia, el partido de derechas dirigido por Samaras, logró, por poco, situarse electoralmente por encima de Syriza, que había progresado enormemente. Samaras gobernó en coalición con un Pasok en franco retroceso y siempre bajo la supervisión de la Troika cuyas medidas entrañan una recesión tan fuerte que, a pesar de la reducción de la deuda en 2012, esta vuelve a aumentar de forma insostenible (actualmente supone el 175% del PIB).

El caso griego ilustra la evolución de la Unión Europea (UE) hacia un "federalismo autoritario" (La Chronique internationale de l'IRES, 2013). La UE entró en la era neoliberal en 1986, con el Acta Única que dio carta de naturaleza a la libre circulación de mercancías y capitales. A partir de entonces esta apisonadora avanza al hilo de los tratados y cumbres europeas en las que la creación del euro por el Tratado de Maastricht en 1992 no constituye más que una etapa. Con el estallido de la crisis se produce una evolución doble. Por una parte, la intervención cada vez mayor (por encima de las competencias que le son atribuidas en los tratados) en todos los aspectos de las políticas económicas y sociales (pensiones, salario mínimo, protección social, sistema de negociación colectiva...) por parte de la Comisión Europea, con el apoyo del Consejo Europeo en el que se reúnen los Estados miembros. En adelante, la Comisión se inmiscuye en todo, yendo mucho más lejos de las competencias de supervisión presupuestaria que le otorga el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) de 2012. Se pone en marcha un verdadero "arsenal de vigilancia".

La otra tiene que ver con la desigualdad creciente entre los Estados miembros. A partir de entonces a algunos (Grecia, Portugal, Estado español, Chipre, Irlanda) se les pone bajo tutela y, para ellos, está fuera de cuestión no plegarse a los dictados de la Comisión y de la Troika: en esos países no solo reina la austeridad sino una sistemática puesta en cuestión de la negociación colectiva, del contrato laboral... Todo está orientado a que la gente asalariada sea privada de

la protección colectiva. Hasta el punto que, en relación con Grecia, instancias internacionales como la OIT y el Consejo Económico y Social europeo estiman que existe una violación de derechos básicos recogidos en la convención de la OIT y en la carta social europea.

Las desigualdades entre los Estados miembros no conciernen solo al ámbito económico; también asistimos a una "agravación de las asimetrías políticas entre los países. A este respecto, el caso griego es paradigmático" (Durand y Keucheyan, 2013). Asimetría entre países, obligatoriedad de cumplir los mandatos... Como señala Wolfgang Streeck (2011):

La ciudadanía percibe cada vez más a sus gobernantes nacionales no como sus representantes, sino como representantes de otros Estados u organismos internacionales, como el FMI o la UE, que están infinitamente más alejados de la presión electoral que el Estado-nación tradicional?"/1.

Debido a que, como señala el mismo autor:

Los mercados y los organismos internacionales quieren que además de los gobiernos, los ciudadanos también se comprometan de forma creíble en la consolidación presupuestaria. Los partidos políticos que se oponen a la austeridad tienen que ser derrotados de forma clara en las elecciones y tanto el gobierno como la oposición se deben someter al poder financiero....

Syriza llega al gobierno

Grecia es el país en el que el tutelaje ha sido más rotundo. También es Grecia donde, por primera vez, un partido antiausteridad, Syriza, gana las elecciones. Esta victoria llega tras varios años marcados por movilizaciones y huelgas generales y una dinámica de autoorganización de determinados sectores populares a nivel local para paliar la destrucción de los servicios públicos (sobre todo en el sistema de salud) y la extensión de la miseria (Karakioulafis, 2014). Durante ese período, Syriza acumuló victorias electorales, superando a un Pasok desacreditado y a las otras dos formaciones de la izquierda radical griega: el partido comunista (KKE) —cuya dirección, totalmente sectaria, no para de denunciar a Syriza y desea que nada cambie para poder seguir conservando su corralito burocrático— y la coalición de extrema izquierda Antarsya (que no llega a capitalizar electoralmente una implantación real en los movimientos sociales). Por otra parte, hay que señalar que Antarsya hizo (a mi parecer de forma incorrecta) de la salida del euro un elemento central de la estrategia revolucionaria en Grecia, al que Syriza (incluso su ala izquierda) se negaba poniendo por delante el lema "Ningún sacrificio por el euro". Una forma de

^{1/} Esta cuestión es particularmente sensible en Grecia donde, desde el nacimiento del Estado moderno, las potencias extranjeras no han cesado de inmiscuirse en sus asuntos.

decir que sus decisiones en relación al euro dependerían del curso de los acontecimientos tras su llegada al poder.

Syriza es una coalición plural y variada: junto a componentes provenientes del comunismo griego en ruptura con el sectarismo del KKE (agrupados en Synaspismos), existen diversas organizaciones procedentes de la extrema izquierda. Estas últimas han evolucionado en el seno de Syriza: la más coherente es DEA (Izquierda Obrera Internacionalista). Esta organización forma parte también de la Plataforma de Izquierda de Syriza que incluye, asimismo, a gente proveniente de Synaspismos. Retomando el lenguaje de la extrema izquierda, el centro de gravedad de Syriza es el "reformismo", pero es preciso acabar con el hábito de utilizar este término para designar tanto al PS francés como al español, el portugués, etcétera, como para calificar a Syriza. El PS de Hollande o el PSOE en el Estado español vienen del reformismo, pero ya no se sitúan en ese terreno: sus reformas son de hecho, "contrarreformas" que desmantelan los derechos sociales. Estos partidos se han convertido en social-liberales. Syriza, por el contrario, tiene un programa orientado a satisfacer las aspiraciones populares inmediatas.

Durante la campaña electoral, el partido puso en primer término un "Plan para la reconstrucción nacional" con cuatro elementos básicos entre los que se encontraban la ruptura con las políticas de austeridad y la anulación de los recortes sociales. Es lo que se conoce como el "Programa de Salónica", anunciado por Tsipras en un encuentro en esta ciudad (Syriza, 2014) y que constituye el programa de referencia para el nuevo gobierno griego formado el 27 de enero (recuperación del salario mínimo al nivel previo a la crisis, anulación de los despidos en el sector público, detener algunas privatizaciones, etcétera). Su aplicación significará el fin de la sumisión a la Troika y un alivio al sufrimiento de las clases populares griegas. Ese documento también incluye modificaciones en relación a la posición anterior de Syriza en lo que respecta, sobre todo, a la socialización del sistema bancario y a la cuestión de la deuda. Según el programa de Salónica, la deuda debe ser renegociada. Así, en relación a la moratoria del servicio de la deuda, el objetivo es conseguirlo en una conferencia europea (inspirada en la que resolvió en 1953 la cuestión de la deuda alemana), no imponerla de forma inmediata. Este programa lo elaboró un equipo de asesores de Alexis Tsipras; un equipo que en el periodo preelectoral tendió a autonomizarse cada vez más de las instancias regulares (Comité Central, Comité ejecutivo) de Syriza.

Ahora bien, no está claro que un gobierno que ponga en marcha medidas que cuestionan los dictados de la troika se pueda beneficiar ni de la benevolencia del gran capital griego, ni de las finanzas internacionales, ni de la Unión Europea. A pesar de la manifiesta voluntad de Tsipras de no adoptar medidas unilaterales sobre la deuda, las dificultades no han tardado en llegar.

La retirada de fondos de los bancos ha adquirido una dimensión importante y, al mismo tiempo, la recaudación fiscal se ralentiza. Ya se han retirado "Este programa lo elaboró un equipo de asesores de Alexis Tsipras; un equipo que en el periodo preelectoral tendió a autonomizarse cada vez más de las instancias regulares (Comité Central, Comité ejecutivo) de Syriza"

11 mil millones de euros de los bancos griegos en enero. Y el 4 de febrero, antes de lo que se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto contra las cuerdas al gobierno griego. Un gobierno que pensó que podría prescindir de los créditos vinculados al acuerdo anterior con la Troika mediante la obtención de préstamos a corto plazo en la banca griega que, por su parte, los obtendría del BCE. Esta posibilidad no existe.

Queda la posibilidad excepcional de obtener financiación a través del BCE. Para ello, como condición previa a las negociaciones, las instancias de la UE exigen a Grecia que se sitúe en los

límites establecidos en los Memorándum y acordados con el gobierno de Samaras. El objetivo de Tsipras es poder acceder a una financiación-puente antes de concluir nuevos acuerdo con sus acreedores. Según el gobierno griego, esta financiación-puente le debería permitir "negociar sin presión y sin el recurso al chantaje". Grecia promete definir un programa a cuatro años, con un nuevo marco presupuestario y reformas destinadas, sobre todo, a luchar contra la evasión fiscal.

Es difícil saber cuál será el resultado concreto de este pulso, pero parece evidente que el objetivo de las instituciones europeas y de sus Estados miembros es obligar a Tsipras a capitular ante sus exigencias. Existe una tendencia en determinadas corrientes de la izquierda radical a responsabilizar de ello a Alemania, pero la realidad es que son el conjunto de los gobiernos europeos (entre ellos el francés François Hollande y el italiano Matteo Renzi), los que insisten en que "hay que cumplir los compromisos adquiridos".

En un contexto de crisis de un capitalismo globalizado y financiarizado, no es fácil llegar al gobierno en un país miembro de la Unión Europea. Para llevar a cabo las reformas favorables a las clases populares y para proteger a estas, es necesaria una radicalidad mayor de lo que hubiera sido necesario en el periodo anterior. La alianza con el partido soberanista de derechas Anel tampoco será gratis (aun cuando este sea muy minoritario en el gobierno)/2. En lo inmediato, toda mejora efectiva de la situación del pueblo griego es positiva y son comprensibles las precauciones tácticas adoptadas por el gobierno

^{2/} Como escribió Stathis Kouvelakis, del Comité Central de Syriza: "M. Kammenos y su partido de derecha soberanista ANEL, efectivamente, es un mal menor en comparación con formaciones como To Potami, cuyo objetivo declarado era forzar a Syriza a discurrir estrictamente por el sendero marcado por la UE y los memorándum. Sin embargo, es malo. Su participación en el gobierno, aunque sea con un solo ministerio, marca el fin simbólico de la idea de un 'gobierno de izquierda anti-austeridad'. Por otra parte, es un partido de derechas, preocupado en proteger el 'núcleo duro' del aparato de Estado" (Kouvelakis, 2014).

Tsipras en su discurso europeo. Ahora bien, más allá de la táctica, ¿cuál es la estrategia? ¿De qué medios se dotará para superar las resistencias a las que ya se está enfrentando? En relación al sistema bancario, es preocupante constatar que no se ha dado ningún paso respecto al control gubernamental de los tres principales bancos así como que el presidente del Banco de Grecia continúe en su puesto. Actuando así, el gobierno de Syriza se priva de los medios necesarios para poner fin al sistema de relaciones incestuosas entre los centros de poder burgueses y los bancos para luchar contra la huida de los ahorros y también para poner en pie uno de los instrumentos para una nueva política económica (Tsagari, 2015).

En lo que respecta a la deuda, el estudio de otras reestructuraciones en la historia muestra la importancia que adquiere la suspensión de pagos de cara a la relación de fuerzas con los acreedores (Toussaint, 2015). Son decisiones que no se pueden eludir y, en cualquier caso, eludirlas es una forma de decidir.

Una de las variables esenciales es la posibilidad de romper el aislamiento de la experiencia griega. Tsipras trata de romper este aislamiento por "arriba", intentando apoyarse en determinados gobiernos de la UE contra otros (el principal, Alemania). Es verdad que esos intentos son legítimos para ganar tiempo, pero el futuro dependerá fundamentalmente de la movilización popular. La experiencia de la Unión de Izquierdas francesa en 1981-1982 muestra lo fácil que es dar marcha atrás en medidas radicales (fueron nacionalizados algunos bancos y grandes empresas) si "los de abajo" no se movilizan. En Grecia, la movilización popular constituye todo un reto, por razones complejas: los límites del sindicalismo griego, falta de arraigo militante de amplios sectores de Syriza, sectarismo del KKE... y también debido al peso de la crisis y la miseria, que lleva a que amplias capas populares dirijan sus esperanzas hacia la sola actuación de un partido o un hombre providencial.

Por otra parte, la movilización en Grecia no será suficiente si no se ve acompañada de un movimiento de solidaridad continuo en el resto de Europa; de la lucha para poner fin a la austeridad en varios países europeos. Desde este punto de vista, el Estado español parece más avanzado que otros Estados europeos. Como dice Antonis Ntavanellos, del Comité Ejecutivo de Syriza y animador de DEA:

Necesitamos la solidaridad de nuestros camaradas europeos que deben impedir que las grandes potencias estrangulen al gobierno de izquierdas y al movimiento obrero en Grecia. [Nuestra victoria] no puede ser sino el principio de un enfrentamiento global contra la austeridad bárbara en todo el continente, y la historia nos ha enseñado que esta guerra puede comenzar en un pequeño país, pero que ganará definitivamente en las calles de Roma, Madrid y París. Hay que movilizarse [a nivel europeo]: es lo mejor que le puede pasar a Syriza y a la izquierda griega (Davanellos, 2015).

Norbert Holcblat es economista, forma parte del Grupo de trabajo económico del NPA.

Bibliografía citada

- Davanellos, A. (2015) Entrevista de Tassos Anastassiadis y Andreas Sartzekis: "Necesitamos la solidaridad de nuestros compañeros europeos". *VIENTO* SUR. 7/1/2015. Disponible en: http://www.vientosur.info/spip.php?article9715.
- Delorme, O. (2013) "La Grèce de l'euphorie à la grande dépression". En *La Grèce et les Balkans*, Tomo III. París: Gallimard.
- Durand, C. y Keucheyan, R. (2013) "Un césarisme bureaucratique". En Cédric Durand (dir.) En finir avec l'Europe, París: La fabrique.
- Husson, M. (2013) "Economía política del sistema euro". *VIENTO* SUR n.º 125. Febrero. Disponible en: http://www.vientosur.info/spip.php?article7668.
- Karakioulafis, C. (2014) "Grèce: santé et éducation, victimes des politiques d'austérité". *La Chronique internationale de l'IRES*. Diciembre. Disponible en: www.ires-fr.org/publications/la-chronique-internationale.
- Kouvelakis, S. (2014) "Tras la victoria". *VIENTO* SUR. 26/1/2015. Disponible en: http://www.vientosur.info/spip.php?article9769.
- La Chronique internationale de l'IRES (2013) "Les syndicats face à la nouvelle gouvernance européenne", n.º 143-144. Noviembre. Disponible en: www.ires-fr.org/publications/la-chronique-internationale.
- Streeck, W. (2011) "The Crisis in Context. Democratic Capitalism and Its Contradictions". MPIfG Discussion Paper n.º 11/15, octubre. Colonia: Max Planck Institute for the Study of Societies.
- Syriza (2014) Programa mínimo de Salónica. Disponible en: http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/salonica.pdf.
- Toussaint, E. (2015) Entrevista de Maud Bailly: "Reestructuración, auditoría, suspension y anulación de la deuda". CADTM. 19/1/2015. Disponible en: http://cadtm.org/Reestructuracion-auditoria.
- Tsagari, P. (2015) "Grèce. Mandat populaire pour concrétiser les engagements de Thessalonique". Al'encontre. 9/02/2015. Disponible en: http://alencontre.org/europe/grece-mandat-populaire-pour-concretiser-les-engagements-de-thessalonique.html.

Asesinatos en *Charlie Hebdo* y en Porte de Vincennes: reflexionar y actuar para no sucumbir

Julien Salingue

Los asesinatos en la redacción de *Charlie Hebdo* y en Porte de Vincennes no nos deben impedir reflexionar. Por el contrario, estos hechos han dado paso a interrogantes y dudas entre los millones de personas a las que es preciso aportar respuestas, aun cuando no vayan a favor del viento y no hagan consenso, para evitar que otros impongan sus respuestas guerreristas, represivas y racistas. Lo que sigue a continuación es un intento, incompleto, de respuesta a algunas de estas cuestiones pero, también, la formulación de pistas de trabajo y de acción; de ahí quizá un tono que algunos pueden encontrar a veces un poco a modo de receta, pero que refleja, ante todo, una preocupación: es necesario actuar para no sucumbir.

Los asesinos no son gente irresponsable

En lo que respecta a los asesinatos propiamente dichos, dos discursos aparentemente contradictorios tienen un punto en común: desresponsabilizar a los asesinos. El primero de estos discursos es el dominante entre las elites político-mediáticas: los asesinos son "locos", "monstruos", "bárbaros", y sus actos no tienen ninguna explicación racional. El segundo proviene de alguna gente antirracista y/o antiimperialista: los asesinos son el producto de las políticas, interiores y exteriores, de Francia y los asesinatos se pueden comprender (sin justificarlo) como una consecuencia de estas políticas.

El primero de estos discursos se aprovecha de la legítima emoción suscitada por la violencia de los asesinatos con el objetivo de censurar cualquier reflexión e intento de explicación. El segundo discurso, del que me siento más próximo, presenta el mismo defecto que el primero: "olvida" que los asesinos son sujetos que han reflexionado y actuado y que no son simples productos pasivos del racismo y del imperialismo. En cierto sentido, aquí nos acercamos peligrosamente a las tesis conspirativas, que ven a los asesinos como simples marionetas de las grandes potencias. Sin embargo, los asesinos tienen un discurso (ver las entrevistas y vídeos en los que hablan de Siria, de Iraq, de las ofensas vertidas contra los musulmanes en Francia y en el mundo, etcétera), un corpus teórico (ver sobre todo el artículo publicado en *Mediapart* [Puchot, 2015]) y referencias organizativas (Estado Islámico y Al-Qaeda en la península arábiga).

"El segundo discurso, del que me siento más próximo, presenta el mismo defecto que el primero: 'olvida' que los asesinos son sujetos que han reflexionado y actuado" ¿Por qué insistir en esto? Evidentemente, no se trata de considerar a los asesinos independientemente del contexto político, económico y social (nacional e internacional) en el que evolucionan y, por consiguiente, de desresponsabilizar a Francia y sus políticas. Por el contrario, a la luz del discurso y de la toma de posición de los hermanos Kouachi y Amedi Coulibaly, se trata de comprender que ellos consideran, *de forma racional*, estar en guerra contra una determinada Francia, y que se consideran, *racionalmente*, en situación de legítima defensa. Una prueba de esto está en

la declaración de Coulibaly en su vídeo póstumo: "Vosotros atacáis el Califato, vosotros atacáis el Estado islámico; por lo tanto, nosotros os atacamos. No podéis atacarnos impunemente, sin pensar que habrá respuesta".

¿(Re)descubre Francia que está en guerra?

Una de las causas de la conmoción que ha alcanzado a amplios sectores de la población, e incluso a los medios militantes, es el (re)descubrimiento de esta verdad. Sí, Francia está en guerra. Una guerra que no se menciona en el día a día, una guerra de la que se discute poco en las asambleas, en los medios de comunicación y, en general, en el espacio público; una guerra contra enemigos no siempre bien identificados, una guerra asimétrica pero, en cualquier caso, una guerra. Los recientes asesinatos lo han recordado de forma brutal a quien lo ignorase. Francia está en guerra y la guerra produce muertes; y los muertos no se cuentan siempre solo en el campo del adversario.

¿Contra quién está en guerra Francia? Según el discurso y el momento, contra el "terrorismo internacional", contra el "yihadismo", contra la "barbarie integrista", etcétera. Este escrito no tiene la intención de discutir el carácter impreciso de estas denominaciones, de la generalización abusiva que conllevan y las paradojas que subyacen en ellas (alianzas de geometría variable, apoyo a regímenes cuyas políticas favorecen el desarrollo de corrientes yihadistas, participación en intervenciones militares que refuerzan estas corrientes, etcétera). Fundamentalmente se trata de subrayar que, en realidad, Francia ha seguido el camino marcado por George W. Bush en EE UU a partir de 2001 (guerra en Afganistán, legislación "antiterrorista") y ha hecho suya, sin decirlo siempre, la retórica y la política del "choque de civilizaciones".

Así pues, hace casi 14 años que Francia esta en guerra sin asumirlo. Si los asesinos de *Charlie Hebdo* y de la Porte de Vincennes han provocado tal conmoción y semejante malestar, es también porque son numerosos quienes, al cabo de unas horas o al cabo de unos días, han digerido brutalmente estos

14 años de historia reciente: "Nosotros también estamos [en guerra] y, al fin y al cabo, es lógico que no nos libremos de ella". Tras EE UU (11 de septiembre), el Estado español (atentado en Madrid, 2004), Gran Bretaña (atentado en Londres, 2005), etcétera, es Francia la que se ve atrapada por su historia, reciente y actual, y la que, por la fuerza de los acontecimientos, está obligada a mirarse en el espejo y a plantearse "¿por qué a 'nosotros'?".

Unión nacional y unión republicana

Algunos comunicados, textos y artículos han puesto el acento en la hipocresía de la "unión nacional" y todo lo que le acompaña. Otros han hecho hincapié en los peligros de semejante "unión" y la instrumentalización que se podía hacer de ella o que ya se ha hecho. Así pues, a mí me gustaría insistir sobre otro aspecto: la gente que ha respondido al llamamiento a la unión no lo ha hecho necesariamente por patriotismo o chovinismo exacerbado. Para mucha gente, en realidad se trata de afirmar su adhesión a determinados principios y valores (libertad, igualdad) que deberían estar garantizados por el "modelo republicano".

Efectivamente, la unión nacional es, desde muchos puntos de vista, una unión republicana con la que no se confunde. No se trata necesariamente de defender Francia porque es Francia. A menudo se trata de defender un modelo de sociedad en nombre de valores y de principios emancipadores, que no tienen nada que ver con el chovinismo. Tras la unión, existen posiciones y discursos divergentes, incluso contradictorios: para algunos (los partidos institucionales, los editorialistas o los intelectuales *del sistema*) los asesinatos son la muestra de que "nuestro modelo" está amenazado y es preciso defenderlo; para otros (desde Plenel a Mélenchon y pasando por esos profesores y universitarios que han publicado tribunas y blogs), los asesinatos son la muestra de que "nuestro modelo" no funciona y que es preciso ponerlo en cuestión.

Soy de los que piensan que no existe modelo republicano "a la francesa" que pueda garantizar realmente la libertad y la igualdad para todo el mundo y librarnos de semejante violencia. Sin embargo, esto no significa denigrar o rechazar en bloque las aspiraciones "republicanas" de unos y otros. No, los millones de personas que salieron a la calle no son, ni objetiva ni subjetivamente, reaccionarios empedernidos. Al contrario, a menudo plantean cuestiones pertinentes y legítimas que se podrían resumir de esta manera: "¿Cómo hemos podido generar este monstruo?".

Dar una respuesta radical

La situación actual, aunque favorezca al poder y a los discursos reaccionarios, no es una situación en la que las y los antiimperialistas y antirracistas estén desarmados. Los millones de personas que se han visto aturdidas y se hacen

preguntas y rechazan caer en la retórica de la "defensa" de "nuestro modelo" y de "nuestros valores", no están condenadas al silencio. Y se pueden aportar respuestas radicales. Respuestas radicales en el sentido que las entendía Marx cuando escribía "[que ser radical] es ir a la raíz de las cosas". Respuestas radicales también en la medida en que lo que se necesita hoy en día son cambios profundos, y por ello, la puesta en cuestión de un sistema que genera desigualdades estructurales, explotación y violencia.

Los debates que se anuncian sobre la escuela, la prisión, la laicidad, la legislación antiterrorista, etcétera, no van a girar en torno a los problemas de fondo; es decir, las condiciones materiales (sean económicas, sociales o políticas) que han permitido que el discurso reaccionario y violento de Al-Qaeda y del Estado Islámico haya tenido eco entre los jóvenes que nacieron, crecieron y estaban socialmente integrados en Francia hasta el punto de convencerles de pasar a la acción. Son estas condiciones materiales (miseria, relegación social, guetización, racismo estructural, opresión identitaria, estigmatización y humilación individual y colectiva, etcétera) las que hay que poner en cuestión, así como todos los discursos que les acompañan, legitiman o instrumentalizan.

Esto significa, ante todo, combatir lo que en el discurso socialmente dominante aparece, a pesar de todo, como una evidencia: la religión no es un *factor* de radicalización de los jóvenes yihadistas, sino el *vector* de su radicalización. Los estudios empíricos (Aly, 2015) realizados lo confirman:

la rabia contra la injusticia, la superioridad moral, la sensación de tener una identidad y un objetivo, la promesa de la aventura, y la voluntad de convertirse en héroes, todo esto ha sido constatado en los estudios realizados. La religión y la ideología sirven de vehículos para una mentalidad de "nosotros contra ellos" y para justificar la violencia contra quienes representan el "enemigo", pero no constituyen el carburante de la radicalización.

Unirse sin dejar de lado los temas molestos

Así pues, se trata de abordar la situación real en su complejidad y dinamismo, rechazando todo atajo simplificador: los asesinos no son ni simples "locos" ni simples "víctimas". Son militantes políticos hechos y derechos que reivindican una guerra y una visión del mundo que es la que propugnan tanto el Estado Islámico como muchos de nuestros gobernantes: civilización contra civilización, identidad contra identidad, violencia contra violencia. Decir esto no significa trazar una línea de igualdad entre los dos "campos": son las políticas racistas, coloniales y guerreras de los países occidentales las que crean las condiciones para que se desarrolle el adversario yihadista, no al contrario.

Abordar la situación en su complejidad significa igualmente comprender, y afirmar, que los recientes asesinatos no son la primera expresión de esta guerra en territorio francés. La guerra, contra los pobres, contra los musulmanes, contra los jóvenes de los barrios populares, comenzó hace tiempo.

Los factores de la radicalización de los hermanos Kouachiy, de Amedi Coulibaly, no hay que buscarlos solo en la política exterior de Francia sino también (y sobre todo) en la política interior. Basta echar una ojeada a "la infancia miserable de los hermanos Kouachi" (Lebourg, 2015) o darse cuenta, porque tiene su miga, de que el mejor amigo de Coulibaly fue asesinado por un agente del orden durante un atraco el año 2000, y que el mismo Coulibaly se hizo remarcar el año 2010 al denunciar las condiciones de vida en la prisión de Fleury-Mérogis. En otros términos, y sin que sirva de excusa, se puede decir que este atentado es un atentado *francés* y expresa (de manera horriblemente deformada) un resentimiento violento contra un "modelo" que no es más que una máquina para estigmatizar y dedicada a fabricar desigualdades.

Por eso hay que decirlo a viva voz: cada control sobre las personas en función del color de su piel, cada episodio de violencia policial, cada discriminación, cada acto o palabra islamófoba, cada expedición militar en nombre de una civilización superior... alimenta ese resentimiento y ofrece nuevos candidatos potenciales a las corrientes vihadistas. Efectivamente, no todos los que sienten este resentimiento pasan a la acción: pero es entre ellos que se recluta a la mayoría de los que pasan a la acción. Así, la necesaria unidad para responder a la ofensiva racista y represiva no debe hacerse sacrificando dos elementos esenciales aunque (es lo menos que se puede decir) no hagan consenso: la lucha contra la islamofobia bajo todas sus formas (integrando en esta lucha la idea de que el otro racismo, el antisemitismo, no es una "respuesta" sino un veneno igual de odioso); y el combate implacable contra las expediciones militares francesas (teniendo en mente los eslóganes de las manifestaciones que siguieron a los atentados de Madrid "Vuestras guerras, nuestros muertos", "Las bombas de Iraq estallan en Madrid", etcétera).

Los antirracistas y los antiimperialistas no están condenados a sucumbir ante la ofensiva actual. Pero para hacer frente a la tempestad, es necesario mantener el tipo y no ceder ante las presiones de la emoción o la conmoción. Toda respuesta represiva, estigmatizante o ciega ante la realidad económica, política o social de la Francia de 2015, no solo está condenada al fracaso sino que constituye, además, un paso suplementario hacia futuros asesinatos. 14 años de "guerra contra el terrorismo" no han aportado, en todo el mundo, más que más guerras, más opresión, más discriminaciones y más violencia. Es tiempo de pasar, *radicalmente*, a otra cosa.

Julien Salingue forma parte de *Acrimed* (www.acrimed.org), Observatorio de los media, y es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad París VIII.

Bibliografía citada

- Aly, A. (2015) "The role of Islam in radicalisation is grossly overestimated". *The Guardian*. 14/1/2015. Disponible en: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/14/the-role-of-islam-in-radicalisation-is-grossly-overestimated?CMP=share btn fb.
- Lebourg, E. (2015) "L'enfance misérable des frères Kouachi". *Reporterre*. 15/1/2015. Disponible en: http://reporterre.net/L-enfance-miserable-des-freres.
- Puchot, P. (2015) "Plongée dans les lectures des djihadistes des attentats de Paris". *Mediapart*. 17/1/2015. Disponible en: http://www.mediapart.fr/journal/international/170115/plongee-dans-les-lectures-des-djihadistes-des-attentats-de-paris.

Un decálogo a contracorriente sobre la islamofobia

Alberto López Bargados y Ángeles Ramírez Fernández

Los actos de hostilidad contra personas musulmanas que se han producido en toda Europa en siniestra coordinación con el atentado contra Charlie Hebdo y las tomas de rehenes consiguientes muestran con claridad la campaña de pánico moral que se anuncia entre las opiniones públicas europeas. Cunde la sensación de que nos hallamos ante un punto de inflexión histórico, en que la crisis económica provocada por el capitalismo financiero, la continuidad mortífera de la política exterior occidental y la insensatez de los asesinos yihadistas se conjugan para generar lo que parece ser una tormenta perfecta, que esta vez se va a cebar, como muchas tememos, en las musulmanas y musulmanes europeos. Por referirnos al caso español, y desde el miércoles 7 de enero, se contabilizan ataques contra centros del culto musulmán en el madrileño barrio de Tetuán (Lardiés, 2015), en San Juan de los Lagos (Burgos) (Elices, 2015), en Cádiz (Cañas, 2015), en Jaén (Heras, 2015), en un suma y sigue preocupante en extremo. Además, la sucursal del movimiento Pegida en España convocó hace varias semanas una concentración de protesta - finalmente abortada, aunque se hiciera un llamamiento a los "patriotas" para desafiar la prohibición — por la "islamización de Occidente" (sic) ante la mezquita de la M30 en Madrid. Por si la situación fuera poco alarmante, en las últimas jornadas algunos líderes y representantes de la comunidad musulmana española han sido objeto de amenazas a través de las redes sociales. Quizás el presidente Rajoy no tema una oleada islamofóbica en España, pero los musulmanes sí. En un sondeo a nivel europeo que el Pew Research Center hizo público hace unos meses, un 46% de los españoles reconocían compartir una percepción negativa de la presencia de musulmanes en el Estado. No hace falta mucha imaginación para aventurar que esas suspicacias habrán aumentado desde el 7 de enero.

Es igualmente cierto que estos días han adquirido cierta visibilidad las voces que advierten y denuncian el ambiguo remolino en el que nos arriesgamos a caer por causa del nuevo espíritu securitario que a todas se nos viene encima, y no únicamente a las personas musulmanas. Se diría que la islamofobia ha dejado de ser una simple extravagancia folclórica denunciada por la izquierda buenista y por los miembros esclarecidos de las propias comunidades musulmanas para recibir un cierto crédito, al menos a tenor del buen número de intervenciones que nos conminan a evitar refugiarnos bajo su "Cuando los observadores se refieren a la diferencia entre un 'islam tolerante' y otro 'intolerante', en realidad están distinguiendo entre un 'islam tolerable' y otro 'intolerable'"

sombra. Sin embargo, como quiera que una parte de esas advertencias contra la tentación islamofóbica expresan un punto de vista que puede ser considerado, a su vez, islamofóbico, hemos creído útil reunir una serie de consideraciones sobre ese fenómeno para contribuir a su clarificación y al mismo tiempo desenmascarar a quienes, estos días, simplemente la invocan como una retórica políticamente correcta, pero vacía de todo contenido.

1. "Islamofobia" es una categoría ambigua. Su uso en las ciencias sociales es reciente; se remonta a mediados de la década de 1990, y conserva su carácter controvertido, en la medida en que su campo de aplicación tiende a solaparse y confundirse con el de otras, en particular con el "racismo" y la "xenofobia". En muchos de los casos en que el término podría aplicarse, no está claro si la acción que se quiere denunciar es fruto de la adscripción confesional del individuo, de su condición de extranjero o, por ejemplo, de su pertenencia a una "raza" investida por el agresor con características estigmatizantes. O de la acción combinada de todas esas circunstancias. Carece, por el momento, de una tipificación jurídica que pudiera contribuir a delimitar su potencial descriptivo, y otras tentativas de objetivización parecen condenadas al fracaso. Su empleo es, por ello, fruto de una decisión subjetiva que, como siempre en el caso de las ciencias sociales, da inevitablemente cuerpo a aquello que designa. En este caso, el riesgo es que el uso de ese término contribuya, no solo a crear un objeto llamado "islam" (la construcción de esa categoría a lo largo de los siglos merecería un capítulo aparte), sino sobre todo a ofrecer una imagen cerrada y compacta de esa religión, lo que contradice la enorme diversidad de prácticas y creencias que se reúnen bajo la categoría "islámicas".

En cualquier caso, lo que nos autoriza en primera instancia al empleo de esa noción como instrumento para interpretar una determinada realidad es la convicción, que comparten la gran mayoría de sus practicantes, de que existe una base común a ese conjunto variado de creencias y prácticas, y que ese denominador común se denomina "islam". Ahora bien, en la medida en que el término "islam" está lleno de matices y sugiere significados que pueden llegar a ser opuestos, esa misma ambigüedad afecta a su derivada, al odio u hostilidad ante el "islam", es decir, a la islamofobia. Lo que es, y no, islámico, y en particular lo que es correcto o no desde el punto de vista islámico, es una materia controvertida, y esa cuestión no puede soslayarse cuando nos referimos a actos calificables de islamofóbicos, que suscitan igualmente discrepancias. Las caricaturas sobre Mahoma publicadas por *Charlie Hebdo* constituyen un buen ejemplo de esas discrepancias. Sabemos que la reacción mayoritaria

en el mundo musulmán ha sido negativa, y que de modo general han sido consideradas como un acto blasfemo, pero en cambio pasamos por alto que esas mismas caricaturas difícilmente habrían tenido cabida en publicaciones estadounidenses, donde la sensibilidad ante contenidos injuriosos u hostiles contra las creencias religiosas es mucho más alta que en Francia. No podemos soslayar que la islamofobia presenta registros variables.

- **2.** La islamofobia no se reduce únicamente a los ataques físicos o verbales a personas o instituciones musulmanas. Eso es solo la punta del iceberg, del mismo modo que la violencia de género no se reduce al maltrato físico o psíquico. La islamofobia es una construcción del mundo —un conjunto coherente de representaciones— susceptible de traducirse en cualquier momento en violencia contra su objeto. Centrar la definición de islamofobia en los ataques —físicos o verbales— aislados la despoja de su fuerza epistemológica, reduciendo a esta a un recuento de simples reacciones viscerales, por lo demás fácilmente controlables. En este sentido, los recientes atentados contra *Charlie Hebdo* no han aumentado las reacciones islamofóbicas; simplemente las han canalizado en forma de agresiones contra mezquitas o personas. Asociar el registro islamofóbico al terrible episodio vivido en Francia a principios de enero, convertir esas agresiones en una simple reacción irreflexiva ante un acto execrable, nos desvía de la auténtica naturaleza de ese registro y, al menos implícitamente, legitima esas expresiones públicas de rabia incontenible.
- 3. Un ejemplo central del registro islamofóbico consiste en la imposición sobre el conjunto de prácticas y discursos musulmanes de distinciones elaboradas desde el exterior de las propias comunidades, con el fin de distinguir el "buen islam" del "mal islam". Las clasificaciones, en sí mismas, no son islamofóbicas —cuanto menos, son inevitables—, y los propios musulmanes las llevan a cabo con frecuencia, constituyendo a menudo un motivo de conflicto: el islam shií frente al sunní, un islam "tradicional" frente al "moderno", etcétera. Ahora bien, cuando esas distinciones se establecen sobre criterios etnocéntricos, por los que el "islam bueno" o "tolerante" es aquel que se ajusta a las condiciones dominantes, por ejemplo, en el espacio público europeo —un islam reducido a su dimensión íntima, del que se extirpan o reducen al mínimo sus expresiones comunitarias o colectivas, convertido en un mero asunto de conciencia personal—, entonces resulta pertinente considerar islamofóbica esa voluntad clasificatoria que, a decir verdad, es una herencia de la experiencia de dominación colonial sobre Oriente, y que no persigue otro objeto que el de distinguir a los musulmanes "dóciles" (véase, gobernables según principios europeos de control y representación de las poblaciones, como los "Beni Oui Oui" del colonialismo francés en el norte de África) de los indómitos, incómodos o rebeldes a esas formas de gobernabilidad. En términos generales, la islamofobia pretende a menudo traducir al plano teológico o jurídico una distinción que en su origen tiene un sentido y finalidad políticos. Cuando los observadores se refieren a

la diferencia entre un "islam tolerante" y otro "intolerante", en realidad están distinguiendo entre un "islam tolerable" y otro "intolerable".

- **4.** La islamofobia se expresa, sin embargo, en términos paradójicos: con frecuencia procede, como acabamos de señalar, a dividir a la comunidad de musulmanes entre "tolerantes" e "intolerantes" con fines políticos, pero al mismo tiempo considera que esa comunidad constituye en su conjunto un compartimento estanco, que apenas sufre mutaciones a lo largo de su historia, y cuya esencia viene determinada por la omnipresencia del Libro Sagrado, del Corán, ante el que se actúa a menudo como si fuera una guía perfecta para interpretar todas y cada una de las conductas de los musulmanes. En realidad, la paradoja no es más que aparente, puesto que la distinción táctica entre buenos y malos musulmanes desemboca idealmente en la asimilación de unos y la inasimilabilidad de los otros, por lo que los primeros dejan de ser, en ese caso, "musulmanes" (esto es, dejan de responder al estereotipo uniforme que designaría a todos ellos). Por ello, la distinción, tan común estos días, que dividiría a los musulmanes tolerantes de los intolerantes no hace otra cosa que reforzar los estereotipos que subrayan la propia condición "intolerante" del islam. Esa operación, repetimos, constituye un típico rasgo islamofóbico: asimilación y neutralización frente a exclusión y rechazo. La polarización de las comunidades actúa como una constante islamofóbica: quienes no se ajustan a los parámetros políticos, religiosos, económicos o morales que las elites consideran adecuados son expulsados del espacio de la civilización, abocados al reino de la barbarie. En cierto sentido, son deshumanizados, convertidos en un Otro desconectado de nuestras aspiraciones y emociones. De ese modo, su futuro y bienestar tiende a resultarnos indiferente, y su sacrificio puede no conmovernos apenas.
- **5.** Esa operación de expulsión simbólica de las musulmanas y musulmanes, de "alterización" en definitiva, requiere de la intervención de múltiples actores para que, desde posiciones y perspectivas diferentes, confirmen por acumulación que la asimilación de los "malos" musulmanes es imposible. Con frecuencia, esas intervenciones tienden a proliferar y multiplicarse —aunque menudean a lo largo del tiempo— con ocasión de algún episodio que actúa como espoleta: un atentado, por supuesto, pero también otros actos de naturaleza inocua, como la voluntad de apertura de un oratorio, el deseo de vestir un *hiyab* o de consumir productos *halal*. Esas fases en que los actos islamofóbicos aumentan en su gravedad e intensidad es lo que conocemos, según la definición del sociólogo Stanley Cohen, como una campaña de pánico moral. Nos encontramos, ahora mismo, en una de esas fases. En las campañas de pánico moral, el papel de los medios de comunicación es esencial para la difusión de esos idearios y representaciones estereotipadas, que alimentan las convicciones islamófobas. Por lo tanto, debemos exigir la máxima responsabilidad a

sus propietarios y redactores. Si los medios de comunicación son un vehículo para la islamofobia —la explícita y la implícita—, también deberían serlo para quienes nos oponemos a ella.

- 6. La noción misma de islamofobia, dada su novedad, ambigüedad y su falta de objetivización, resulta desconocida para una parte importante de quienes son teóricamente sus víctimas. La existencia y denuncia de la islamofobia requiere, así pues, una toma de conciencia entre musulmanes y no musulmanes semejante a la que en su día comportó el reconocimiento del racismo o de la noción de clase. Y en el caso de esa toma de conciencia entre los propios musulmanes, esa evidencia abre la espinosa cuestión de quiénes están autorizados a intervenir para que aquella emerja. Es decir, la cuestión que se plantea es si el reconocimiento de la islamofobia debe ser fruto de una reflexión interna de las propias poblaciones musulmanas o si podemos participar de ella las no-musulmanas. Aunque tal vez fuera idealmente deseable que esa toma de conciencia no resultase inducida, la constatación de que la mayor parte de actos islamofóbicos (pero no todos) se cometen desde el exterior de las propias comunidades supone que el compromiso que adquirimos las no-musulmanas y no-musulmanes contra la islamofobia deba ser, al menos, tan intenso y necesario como el que asumen las propias personas musulmanas.
- **7.** La islamofobia se declina de maneras diferentes en función de las distintas trayectorias históricas en que emerge; en Francia, por ejemplo, sus dispositivos estigmatizadores pivotan sobre todo en torno a la institución escolar, mientras en el Estado español parecen hacerlo hasta el momento alrededor de los centros de culto. En el caso francés, eso se debe al papel asumido por la escuela en la reproducción de los valores republicanos, mientras en el español se debe a la férrea competencia con las iglesias y, probablemente, a la amenaza que supone la presencia de un grupo de hombres musulmanes, es decir, marroquíes o pakistaníes.

Más allá de las declinaciones locales, sin embargo, ciertas situaciones son especialmente susceptibles de interpretarse en un registro islamofóbico que, por esa razón, adopta un carácter transversal. En el Estado español, por ejemplo, la islamofobia está cada vez más presente en la imposición de la "emancipación" a las adolescentes que desean vestir pañuelo en los institutos. Sometidas a un régimen de socialización escolar que estigmatiza su propio origen, representado por el pañuelo y por la religión, esas jóvenes son conminadas a desarrollar proyectos liberatorios cuyo objetivo no es otro que el de parecerse a "nosotros". Asimismo, en los sumarios y sentencias por delitos de terrorismo yihadista, se reconstruyen las vidas de los sospechosos, convirtiendo los hechos más cotidianos en hitos de una carrera terrorista, en signos inequívocos de una presunta radicalización (López Bargados, 2014; Mijares, 2014). Es especialmente relevante la criminalización que se practica sobre las prácticas comunitarias,

"quienes no se ajustan a los parámetros políticos, religiosos, económicos o morales que las elites consideran adecuados son expulsados del espacio de la civilización, abocados al reino de la barbarie"

como el rezo colectivo en la calle —por falta de aforo suficiente en los precarios espacios de culto con ocasión de las festividades islámicas—, o las que pivotan en torno a la visibilización del cuerpo, como el uso de las vestimentas asociadas a la religión. En suma, el registro islamofóbico prolifera en torno a la expresión pública de la religión (no católica). Una razón para ello puede hallarse en los principios secularistas, de carácter hegemónico, que comparten buena parte de las elites políticas e intelectuales europeas, y que parece incapacitarlas para comprender, no solo el revivalismo religioso de todo tipo que experimenta Europa, sino en par-

ticular la voluntad que muestran las comunidades religiosas por jugar un nuevo papel político y ponerlo de manifiesto sobre el espacio público, concebido hasta ahora como el ámbito secular por antonomasia.

- 8. La islamofobia condiciona la vida de las personas que la padecen, musulmanas y no musulmanas. Las soluciones que los Estados promueven para evitar lo que se describe como una invasión vihadista pasan todas por lo mismo: el control de las poblaciones y del espacio público. Los signos de una "musulmaneidad" no tolerada, como la vestimenta de las mujeres y el rezo público de los hombres, son criminalizados, pero además se produce una naturalización del endurecimiento de las políticas de control en nombre de la seguridad, cuyo alcance supera con mucho a la población musulmana, convertida en pretexto para la promulgación de nuevas leyes aún más restrictivas. De ese modo, las campañas islamofóbicas constituyen un aliado táctico de la nueva embestida neoliberal, puesto que la inseguridad que aquella provoca justifica la imposición de leyes tipo "mordaza". Por otra parte, en el campo político, la islamofobia suscita una reconfiguración de fuerzas, al hacer emerger movimientos de unidad nacional —no necesariamente relacionados en un principio con la extrema derecha— que se posicionan contra una supuesta invasión del islam, como es el caso de los identitaires franceses. La islamofobia divide igualmente a los feminismos y a la propia izquierda, arrastrándolas ocasionalmente a compartir puntos de vista con las derechas más recalcitrantes o con los movimientos más antifeministas. En el seno de las comunidades musulmanas, en fin, se reproduce la marginación respecto a las posiciones más alejadas de ese islam "tolerable", de modo que todas las variantes salafistas e islamistas son fuertemente condenadas como dañinas y fanáticas, aunque no siempre sea ese el caso.
- **9.** Muchas de las intervenciones que estos días advierten contra la islamofobia rampante se pronuncian en un registro que bien puede ser considerado islamofóbico. De hecho, a menudo las primeras se convierten en un salvoconducto para el segundo.

Por ejemplo, algunos expertos en terrorismo, bien conocidos por sus posiciones antimusulmanas, han invocado estos días la necesidad de ejecutar programas de sensibilización y lucha contra la islamofobia. Esa invocación parece inmunizarles ante una eventual acusación de islamofobia, legitimando con ello un mensaje que se sirve de categorías definidas desde un registro islamofóbico, tales como la idea del inminente advenimiento de una sociedad yihadista constituida por millones de personas, o la conocida letanía de que España se encuentra sentada sobre un polvorín. Esas admoniciones despejan así el camino a las políticas del miedo, y confirman la urgente necesidad de que nos dotemos de agencias de información y seguridad eficaces, así como de instrumentos jurídicos diseñados *ad hoc* para la lucha antiterrorista. Una parte significativa de los programas de sensibilización contra la islamofobia acaban por hacer el juego a los discursos y prácticas a los que formalmente se oponen.

10. La islamofobia presenta un elemento clave en su configuración, que es la dominación patriarcal. La idea de que el islam, por definición, constituye un agravio para las mujeres musulmanas, y por extensión para todas las mujeres del mundo, es consustancial al término. De ese modo, fuerzas políticas de ideologías muy diferentes se presentan como defensoras del feminismo y de las mujeres simplemente con posicionarse abiertamente contra el islam, obteniendo de manera automática réditos políticos. Ni que decir tiene que la versión más liberal de los feminismos acude en su apoyo. En toda esta configuración, las mujeres musulmanas son consideradas cómplices de esa dominación, responsables de su perpetuación y enemigas en consecuencia de la emancipación de todas las mujeres. Esta complicidad con el enemigo se construye de modo ambiguo, simultáneamente de manera pasiva y activa. Pasiva, porque se denuncia la supuesta incapacidad de las mujeres musulmanas para reaccionar ante la humillación. Esa línea argumentativa deja vía libre al Estado para regular justamente aquello que considera el signo de su dominación, su modo de vestir. En su versión más activa, la complicidad femenina con su propia degradación autoriza a arrancarles por la fuerza el pañuelo, o a denigrarlas por vestirlo en lugares públicos. La islamofobia tiene como campo de batalla principal el cuerpo de las mujeres. Las retóricas sobre el yihadismo no han hecho sino reforzar la posición ambigua que se otorga a las mujeres musulmanas en la construcción de ese islam maligno. Tanto el lenguaje de los expertos como el de los medios reproducen esa polarización: de "víctimas" "seducidas" y "convencidas" del proyecto yihadista, pasan a convertirse en "reclutadoras activas". De un grupo de mujeres carentes de voluntad, engañadas para participar en la yihad apelando incluso a móviles sentimentales, a otro que recluta y engaña sin piedad a las mujeres incautas, incorporadas como "esclavas sexuales" o "concubinas" que formarán parte de un "harén".

Tal como sostenemos en este artículo, se ha iniciado una campaña de pánico moral que representa las poblaciones musulmanas como un enemigo potencial de valores que identificamos como propios de las sociedades europeas.

Muchos observadores, participantes incluso a su pesar en esa campaña, tendrán la tentación de polarizar las posiciones, de distinguir entre aliados a nuestra causa y quienes se ven imposibilitados a ello por su cultura y su religión. El recurso al juego macabro de las identidades en conflicto está ya en marcha, y si no presentamos oposición corremos el peligro de vernos todos arrastrados por esa corriente. Lo que hemos tratado de restituir en estas páginas es parte de la complejidad de la cuestión, pero no nos cansaremos de repetir hasta qué punto nuestra resistencia es urgente. Es el pluralismo consustancial a las sociedades europeas, un marco de convivencia que permita la expresión de múltiples sensibilidades, lo que está en juego estos días. Tal vez no siempre sea fácil acotar las actitudes islamófobas, pero las palabras huecas que muchos empleamos contra su ascenso no hacen otra cosa que alimentar a la bestia. Reconocerla, incluso cuando parece disfrazarse de cordero, es un primer paso para hacerle frente.

ci6

Alberto López Bargados forma parte de Stop Als Fenòmens Islamofòbics (SAFI) y es profesor de la Universitat de Barcelona. **Ángeles Ramírez Fernández** pertenece al Grupo de Investigación Antropología de Orientación Pública (GIAOP) de la Universidad Autónoma de Madrid.

Bibliografía citada

- Bonet, E. (2014) "Jóvenes occidentales locas por un yihadista". El Confidencial. 15/10/2014 Disponible en: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-10-15/jovenes-occidentales-locas-por-un-yihadista_242506/.
- Cañas, E. M. (2015) "No saben qué es el islam". Diario de Cádiz. 13/1/2015. Disponible en: http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1938181/no/saben/es/islam.html.
- Elices, I. (2015) "Pintadas contra la comunidad musulmana en la mezquita de San Juan de los Lagos". Diario de Burgos. 9/1/2015. Disponible en: http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF62A1260-DC1F-D918-31CA262B7C8FDC63/20150109/pintadas/comunidad/musulmana/mezquita/san/juan/lago.
- Heras, A. (2015) "Aparecen pintadas contra el Islam en la mezquita de Jaén". Diario Jaén. 12/1/2015. Disponible en: http://www.diariojaen.es/jaen/item/73517-aparecen-pintadas-contra-el-islam-en-la-mezquita-de-jaen.
- Lardiés, A. (2015) "Ataque a la mezquita central de Madrid: 'Islam fuera de Europa". Voz Populi, 12/1/2015. Disponible en: http://vozpopuli.com/actualidad/55649-ataque-a-la-mezquita-central-de-madrid-islam-fuera-de-europa.
- López Bargados, A. (2014) "Autos de fe en un mundo de incrédulos: etnografiando la construcción del 'terror islámico' en Cataluña". En A. Ramírez (coord.) *La alteridad imaginada. El pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia*. Barcelona: Bellaterra.
- Mijares, L. (2014) "El efecto Persépolis: procesos de domesticación y marginación de alumnas musulmanas en los centros educativos". En A. Ramírez (coord.) *La alteridad imaginada. El pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia*. Barcelona: Bellaterra.

Ha nacido un nuevo movimiento por los derechos civiles

Dan La Botz

En Estados Unidos está surgiendo un nuevo movimiento por los derechos civiles. En todas las grandes ciudades de todo el país, de Nueva York a California y de la frontera canadiense a la mexicana, ha habido manifestaciones combativas. En ellas han participado en conjunto decenas de miles de personas en protesta por el asesinato de Michael Brown y Eric Garner por parte de la policía y la negativa de los jurados de Misuri y Nueva York a imputar a los agentes que los mataron. Empezaron en Ferguson (Misuri, cerca de San Luis) en agosto de 2014, y las manifestaciones continuaron a lo largo de todo el otoño y culminaron en una movilización masiva que duró varios días en diciembre. El 13 de ese mes, cientos de miles de personas marcharon en Nueva York y Washington, entre otras ciudades. Parece que estamos en el comienzo de algo nuevo, grande e importante.

En las manifestaciones de todo el país, los participantes levantan las manos y gritan "manos arriba, no disparéis", como se cree que hizo Brown. Otros se agarran la garganta y exclaman "no puedo respirar" once veces como hizo Garner cuando murió, tal como ha quedado registrado en un vídeo grabado con teléfono móvil y que ya han visto millones de personas. Las manifestaciones han sido diversas en todos los sentidos: afroamericanos, blancos, latinos y asiáticos, en su mayoría jóvenes, pero con la presencia de personas de todas las edades. En Nueva York, Chicago, Oakland y Los Ángeles, los manifestantes han bloqueado importantes calles y carreteras. Cientos de personas han sido detenidas, aunque en general la policía se ha mostrado comedida y no ha habido nada parecido a la represión masiva que tuvo que soportar el movimiento Occupy Wall Street.

Al igual que el de Occupy, donde algunos de los líderes de este nuevo movimiento adquirieron sus primeras experiencias, se trata de un movimiento en gran medida espontáneo, descentralizado, acelerado, creativo y audaz. La mayoría de sus activistas no han estado nunca antes en una manifestación y en muy pocos casos han estado integrados en una organización social o política. El movimiento como tal no tiene un programa propiamente dicho, ya que se centra en una consigna de tipo moral: "las vidas de los negros importan". La gente sale a la calle porque siente dolor y tristeza, está moralmente indignada y quiere vivir en un país mejor que el que tenemos ahora. Como ha dicho alguien, esta es la "primavera estadounidense".

"¿Creará un movimiento de masas en gran medida espontáneo nuevas organizaciones, promoverá a nuevos líderes, desarrollará un programa social y político" Una vez más vemos en estas manifestaciones —como ya lo vimos con las de los *indignados* en la Puerta del Sol y en la plaza Tahrir y en el movimiento Occupy Wall Street— el gran reto: ¿creará un movimiento de masas en gran medida espontáneo nuevas organizaciones, promoverá a nuevos líderes, desarrollará un programa social y político, o el reflujo del movimiento no dejará apenas ningún poso? El movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en el periodo de 1955 a 1975 creó toda una serie de organizaciones

—SCLC, SNCC y Panteras Negras— y catapultó a importantes dirigentes como Martin Luther King, Fannie Lou Hamer, Ella Baker y Malcolm X. ¿Creará este nuevo movimiento sus propias organizaciones, sus propios líderes, análisis y programas para estar a la altura del momento político? Esta es la cuestión.

Los medios de comunicación están divididos a la hora de comentar estos acontecimientos. Mientras que la conservadora Fox News ha apoyado sin fisuras a los agentes de policía blancos y denigrado a las víctimas negras, una periodista de la CNN no pudo contener las lágrimas cuando describió la diversidad y el idealismo de los manifestantes. Medios de izquierda como la MSNBC los han apoyado en gran medida y han entablado un debate nacional en torno a la condición de los afroamericanos que va más allá de cuestiones de justicia penal y plantea aspectos relacionados con la economía, el empleo, la vivienda y la educación. Algunos comentaristas de grandes medios han calificado los hechos de "nuevo movimiento de derechos civiles", y tienen razón.

Dos asesinatos por la policía incendian a una nación

Los hechos comenzaron en julio y agosto. Un agente de policía que aplicó una llave de estrangulamiento ilegal y prohibida por la policía local de Nueva York, mató el 27 de julio a Eric Garner, un hombre desarmado buscado por vender cigarrillos de contrabando. Poco después se produjeron pequeñas protestas en Staten Island. Después, el 9 de agosto, un agente de policía dio el alto a Michael Brown, también desarmado, y se produjo un altercado. El agente disparó doce veces sobre Brown y lo mató. Cuando el gran jurado decidió no imputar al agente, la ciudad de Ferguson se convirtió en escenario de violentas protestas en las que fue incendiado un barrio comercial mientras en todo el país se produjeron manifestaciones de solidaridad. En diciembre, el gran jurado de Nueva York anunció a su vez que no imputaría al agente de policía que había matado a Garner en julio, pese a que el juez de instrucción había calificado su muerte de homicidio resultante de la compresión del cuello. Por supuesto, estos no fueron más que los dos casos más recientes de una larga lista de

hombres negros asesinados por la policía. El Movimiento de Base Malcolm X ha realizado un estudio que demuestra que en EE UU muere casi cada día un afroamericano a manos de la policía. No es extraño que cuando se declaró la no imputación del agente que mató a Garner, las protestas estallaran en todo el país.

La controversia política en Nueva York

Después de que el gran jurado decidiera no imputar al agente que mató a Garner, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, habló a los medios sobre cómo se sentiría si hubiera perdido a su hijo Dante. Aunque De Blasio es blanco, su mujer, Chirlane, es negra y el hijo de ambos, que tiene 16 años de edad, es mulato, lo que en EE UU es lo mismo que ser negro. De Blasio declaró: "Son siglos de racismo los que nos han precedido hasta el día de hoy. Este es ahora un momento de luto nacional, un momento de dolor nacional y de búsqueda de una solución". El alcalde añadió que el fiscal general de EE UU, Eric Holder, que estaba a punto de dejar el cargo, y su sucesora, Loretta Lynch, habían señalado que se llevaría a cabo una nueva investigación federal sobre la muerte de Garner.

De Blasio explicó asimismo que él y su mujer "habían tenido que hablar con Dante durante años sobre los peligros a que puede enfrentarse..." y sobre "cómo tomar precauciones especiales en cualquier encuentro que tenga con agentes de policía que están ahí para protegerle". De Blasio concluyó con esta pregunta: "Así que he tenido que preocuparme durante años. Chirlane ha tenido que preocuparse. ¿Está Dante seguro todas las noches? Hay tantas familias en esta ciudad que sienten esto todas las noches. ¿Está seguro mi hijo? No solo ante alguna de las dolorosas realidades —crímenes y violencia en algunos de nuestros barrios—, sino seguros ante las mismas personas en que desean confiar como sus protectoras. Esa es la realidad".

Muchos hombres afroamericanos, actores, figuras del deporte y músicos habían dicho lo mismo sobre las conversaciones que habían mantenido con sus hijos. Sin embargo, los comentarios del alcalde enfurecieron a Patrick Lynch, presidente de la New York Patrolmen's Benevolent Association, el sindicato de policías, que acusó a De Blasio de dejación de apoyo a la policía y de "lanzarlos bajo las ruedas del autobús". Políticos y medios conservadores también arremetieron contra el alcalde por sugerir que la policía podía ser racista. El anterior alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, salió en defensa de los agentes, señalando que la policía arrestaba o tenía encuentros violentos más a menudo con afroamericanos porque los negros cometen más delitos. Mientras la derecha criticaba las marchas que bloquearon calles de Nueva York y otras ciudades, De Blasio defendió el derecho de los manifestantes a protestar.

Entonces, el domingo 21 de diciembre, un hombre negro llamado Ismaaiyl Brinsley se acercó a un coche patrulla de la policía y abrió fuego contra sus

ocupantes, matando a dos agentes, Rafael Ramos y Wenjian Liu, y acto seguido se quitó la vida. Brinsley, como se supo poco después, era un hombre con abultados antecedentes penales y un historial de enfermedad mental y acababa de llegar de Baltimore, donde había disparado al estómago a su antigua novia, Shaneka Thompson, dejándola en estado crítico. Brinsley había colgado mensajes en las redes sociales con referencias a los asesinatos de Michael Brown y Eric Garner y con el anuncio de que se proponía "poner alas a los cerdos". "Si matan a uno de nosotros", anunció, "nosotros mataremos a dos de ellos".

El dirigente del sindicato de policías, Lynch, vino a decir que los manifestantes que marcharon contra el racismo y la brutalidad policial habían inspirado a Brinsley, y añadió que De Blasio tenía "sangre en las manos". Cuando De Blasio fue al hospital de Brooklyn a rendir homenaje a los dos agentes muertos y cuando más tarde acudió al funeral, cientos de agentes dieron la espalda al alcalde. El exgobernador republicano del Estado de Nueva York, George Pataki, culpó de la muerte de los dos agentes a la "retórica antipolicial" de los demócratas De Blasio y Holder. La derecha trató de volver el vendaval político contra los manifestantes. Sin embargo, cuando el alcalde De Blasio pidió a estos últimos que declararan una tregua hasta después de que las familias de los agentes muertos hubieran celebrado sus funerales, los manifestantes se negaron. "No permitiremos que los recientes hechos trágicos hagan descarrilar este movimiento", gritó un manifestante. "Esta es la revolución y no nos dejaremos reprimir".

Para protestar contra de Blasio, la Policía de Nueva York hizo una huelga de brazos caídos de dos semanas que le costó a la ciudad millones de dólares, pero que a su vez condujo a una lucha dentro de la policía entre los partidarios de Lynch y los partidarios de De Blasio.

La controversia en Nueva York entre De Blasio y la policía es la expresión local de una lucha nacional entre el *establishment* conservador y los reformistas socialdemócratas, entre los viejos conservadores blancos y los jóvenes afroamericanos y sus aliados blancos, latinos y asiáticos. La lucha en torno a los asesinatos policiales no es más que la punta de iceberg de la injusticia social en EE UU.

El racismo del sistema judicial estadounidense

En julio de 2013 se produjeron en todo el país manifestaciones como las que han tenido lugar recientemente —aunque no fueron tan masivas y persistentes— cuando un guardia jurado, George Zimmerman, fue absuelto de la acusación de asesinato después de haber matado a un joven negro de 17 años de edad, quien iba desarmado, llamado Trayvon Martin. Aunque aquel caso despertó un eco tremendo, el homicidio de jóvenes negros es una constante en la sociedad estadounidense desde hace décadas. Apenas

en los últimos meses, agentes de policía de varias ciudades de EE UU han disparado a varios hombres afroamericanos, que fallecieron.

- 22 de septiembre: La policía de Dayton, en Ohio, mató a John Crawford, un negro que estaba comprando con su familia en un supermercado Walmart y había cogido una pistola de juguete que vendían allí.
- 20 de noviembre: Un agente de policía mató sin motivo aparente a Akai Gurley, un negro desarmado, en la escalera de una casa en el este de Nueva York.
- 22 de noviembre: Dos segundos después de llegar al lugar, un agente de policía de Cleveland mató a Tamir Rice, un chico negro de 12 años de edad que estaba jugando con una pistola de juguete.
- 2 de diciembre: La policía de Phoenix, en Arizona, mató a Rumain Brisbon, un hombre afroamericano, al parecer porque los agentes confundieron su frasco de píldoras con una pistola.

La lista de asesinados en los últimos 20 años es larga (Juzwiak and Chan, 2014). Mientras que algunos de ellos habían cometido delitos menores o graves y algunos estaban armados, muchas de las víctimas de las prácticas racistas y violentas de la policía estadounidense estaban desarmadas y en algunos casos bajo custodia policial cuando murieron. Un estudio de ProPublica revela que un afroamericano tiene 21 veces más posibilidades de recibir un disparo de la policía que un hombre blanco:

Los 1.217 disparos motales de la policía entre 2010 y 2012 que están registrados a escala federal muestran que los negros de 15 a 19 años de edad murieron a razón de 31,17 por millón, mientras que apenas fueron 1,47 por millón los hombres blancos de ese grupo de edad los que muerieron a manos de la policía (Gabrielson, Grochowski Jones and Sagara, 2014).

Muchas otras investigaciones locales y nacionales formulan la misma conclusión: la policía actúa con sesgo racial (Lee, 2014). El asesinato por la policía de hombres afroamericanos — muchos de ellos desarmados, algunos mientras estaban bajo custodia policial, algunos enfermos mentales— es el resultado previsible de un sistema de discriminación racial, acoso policial, malos tratos, detenciones arbitrarias, falsificación de pruebas, falta de asistencia letrada, condenas desproporcionadas y encarcelamiento excesivo.

La población carcelaria de EE UU ha aumentado de 500.000 en 1980 a 2,3 millones en la actualidad. Este país tiene una mayor proporción de la población en la cárcel (743 por 100.000 habitantes) que cualquier otro país del mundo. El gobierno federal y los Estados de la Unión gastan más de 60.000 millones de dólares en sus prisiones. El aumento de la población carcelaria se nutre en gran medida del evidente racismo del sistema. Un

"Un estudio de ProPublica revela que un afroamericano tiene 21 veces más posibilidades de recibir un disparo de la policía que un hombre blanco" tercio de los hombres negros y un sexto de los hombres latinos de EE UU serán encarcelados alguna vez durante su vida, frente a una 17.ª parte de los hombres blancos. Los afroamericanos no representan más que el 13% de la población estadounidense, pero abarcan el 40% de la población carcelaria de este país; los latinos son el 16% de la población, pero el 21% de los presos. Los afroamericanos y los latinos aportan más de la mitad de los que están a la espera

de la ejecución de la pena de muerte, y aunque alrededor de la mitad de todas las víctimas de asesinato estadounidenses eran de piel negra, casi el 80% de los ejecutados fueron condenados por matar a blancos. En EE UU, los presos no pueden votar y en muchos Estados los antiguos presos tampoco pueden votar ni siquiera una vez puestos en libertad; además les es prácticamente imposible encontrar un empleo. Esta situación la conocen muy bien los afroamericanos y latinos que la viven, pero gran parte de la población blanca la ignora o la niega.

Críticas a la injusticia racial

El movimiento de protesta contra el racismo del sistema judicial ha cobrado fuerza durante los últimos años. La profesora Michelle Alexander, académica afroamericana, examinó estas cuestiones en su aclamado e influyente libro titulado *The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Color Blindness*, publicado en 2010. En él explica que la guerra contra las drogas y la política de orden público tienen un efecto similar al sistema racista de Jim Crow en el siglo XIX. Ese mismo año, Piper Kerman, una mujer blanca que pasó 13 meses en la cárcel por su participación en un asunto de narcotráfico, escribió *Orange is the New Black: My Year in a Women's Prison*, que más tarde dio pie a un espectáculo de éxito emitido por Netflix. Desde entonces ha dado muchas conferencias contra el encarcelamiento, señalando que las mujeres constituyen el segmento que más crece de la población carcelaria, dejando atrás a familias destrozadas.

Otra fuente de oposición al "sistema de injusticia", como lo llaman muchos, es The Innocence Project, creado por Barry Scheck y Peter Neufeld en Nueva York, que se dedica a demostrar la inocencia de personas condenadas equivocadamente mediante el uso de pruebas de ADN y ya ha conseguido la absolución de 316 condenados, entre ellos 18 que estaban en el corredor de la muerte. La labor de The Innocence Project indica que a menudo las declaraciones de testigos oculares son erróneas, que la policía y los fiscales tratan muchas veces injustamente a los acusados y que la reducción de penas a cambio de la admisión de culpa lleva a muchos

inocentes a aceptar años de cárcel por temor a salir peor parados si se declaran inocentes.

Todo esto ha venido acompañado en muchos Estados de la Unión de movilizaciones contra el encarcelamiento masivo y la pena de muerte. Esta actividad reúne a menudo a activistas religiosos, sobre todo católicos, con activistas humanitarios laicos y militantes de izquierda. La National Coalition to Abolish the Death Penalty es la asociación más amplia que lucha contra la pena capital, y está amparada por la American Civil Liberties Union (ACLU). Grupos como la International Socialist Organization (ISO) también han colaborado durante años en asociaciones contra la pena de muerte. El apoyo de la población estadounidense a la pena capital —un 60% todavía la defiende— se halla en el nivel más bajo de los últimos 40 años.

El pasado afroamericano

Los orígenes del sistema de injusticia racial y las revueltas que tienen lugar actualmente en EE UU solo pueden entenderse a la luz de los siglos de opresión violenta y explotación de la población afroamericana. Traficantes holandeses llevaron los primeros esclavos a las colonias británicas de Norteamérica en 1619 y en el siglo XVIII va había esclavos negros en todas ellas, desde Massachusetts hasta Georgia. En los cálidos Estados del sur, los esclavos trabajaban en plantaciones donde producían tabaco, añil, algodón, azúcar y arroz, plantaciones que se beneficiaron del sistema esclavista. Los propietarios británicos de las plantaciones no tardaron en sustituir a los trabajadores blancos contratados por esclavos africanos y el sistema económico también se convirtió en un sistema de castas raciales. Tras la Revolución de 1775-1783 y el establecimiento de los Estados Unidos, los Estados del norte fueron aboliendo paulatinamente la esclavitud y parecía que esta iba a ser abandonada en todo el país, pero la invención de la desmotadora en 1794 dio un nuevo impulso a las plantaciones de algodón y al trabajo esclavo en el sur.

Era un sistema violento. La esclavitud en las plantaciones del sur solo podía mantenerse a base de cadenas, látigos y armas de fuego. A menudo separaban a familias afroamericanas cuando los dueños vendían esclavos, arrancando a bebés y niños de los brazos de sus madres. A los hombres y mujeres que no trabajaban con el ahínco o la rapidez suficientes o que incumplían las normas de la plantación solían desnudarlos y latigarlos, a veces hasta la muerte. Los hombres blancos aprovechaban su poder para forzar o inducir a las mujeres negras a mantener relaciones sexuales, de modo que las plantaciones del sur se poblaron de sus descendientes mulatos. A veces los esclavos se rebelaban contra el sistema, pero frente a los hombres blancos armados tenían pocas posibilidades de éxito. Mientras

que los políticos sureños defendían su sistema esclavista afirmando que era superior al capitalismo del norte, en Nueva Inglaterra y otros Estados septentrionales surgió un movimiento abolicionista formado por blancos, negros libres y esclavos huidos. Los abolicionistas daban conferencias, hacían circular peticiones y ayudaban a esclavos a escapar y ganar la libertad. El más combativo de ellos, un fanático religioso blanco llamado John Brown, murió en la horca después de dirigir un ataque en Harper's Ferry, en Virginia, en un intento de suministrar armas a los esclavos para que pudieran liberarse ellos mismos.

En la década de 1840 se vio claramente que EE UU tenía dos sistemas sociales rivales: en el norte, una agricultura capitalista, una industrialización incipiente y el comercio, y en el sur, el sistema de esclavitud en las plantaciones. Cada una de estas dos regiones pugnaba por controlar las tierras del oeste conquistadas después de que EE UU derrotara a México y se quedara con la mitad de su territorio entre 1836 y 1857. Y tanto el norte como el sur pugnaban asimismo por controlar el gobierno federal. Cuando Abraham Lincoln ganó las elecciones en 1860 con un programa que prometía impedir la expansión de la esclavitud, los Estados sureños se independizaron y formaron una Confederación, dando comienzo a la guerra civil. Durante la guerra, Lincoln abolió la esclavitud en algunas partes de EE UU y unos 200.000 negros libres y esclavos liberados se enrolaron en el ejército de la Unión. La Unión derrotó a la Confederación en 1865, cuando el sistema de plantaciones del sur había quedado devastado por la guerra. Se introdujo una enmienda a la Constitución por la que se abolió la esclavitud, los antiguos esclavos pasaron a ser ciudadanos de EE UU y los hombres negros (pero no las mujeres) obtuvieron el derecho al voto.

Durante el periodo de Reconstrucción, de 1867 a 1877, con el Partido Republicano en el poder y el ejército de la Unión ocupando el sur, los afroamericanos recién liberados salieron beneficiados, pues pudieron reunificar sus familias, construir escuelas e iglesias, votar en las elecciones y adquirir bienes inmuebles. Sin embargo, tras la retirada del ejército de la Unión, los blancos del Partido Demócrata recuperaron el control en el sur y establecieron un nuevo orden social. La mayoría de políticos blancos negaron a los negros el derecho a presentarse como candidatos a las elecciones, a votar o a formar parte de los jurados. En todos los Estados sureños los blancos impusieron un sistema de segregación, separando a blancos y negros en todos los ámbitos de la vida, desde la escuela hasta el ferrocarril. La mayoría de afroamericanos se habían hecho aparceros y pronto acabaron endeudados y obligados a realizar peonadas, dada la dominación económica de los comerciantes y terratenientes blancos. El conjunto del sistema Jim Crow, como lo llamaban, se apoyaba en la amenaza omnipresente de linchamiento, asesinato sádico que a menudo incluía la castración y la muerte

en la horca o la hoguera. En una grotesca comunión, los participantes y espectadores blancos se llevaban a veces a casa los huesos carbonizados de las víctimas. Entre 1882 y 1962 fueron linchados en total 3.345 negros en EE UU.

Primeras luchas por la libertad

Las condiciones imperantes en el sur llevaron a muchos afroamericanos a tratar de escapar al norte. Hubo dos "grandes migraciones", como las llamaron, una durante la primera guerra mundial y la otra durante la segunda. Cientos de miles de familias negras del sur emigraron a ciudades del norte como Nueva York, Filadelfia, Detroit, Cleveland y Pittsburgh, donde encontraban puestos de trabajo mejor pagados como obreros en las fábricas o empleados del hogar en las casas de la clase media y alta blanca. En el norte, sus hijos podían asistir a la escuela pública junto con niños blancos y los padres podían viajar en autobús y en metro en los mismos vagones que los blancos. Al mismo tiempo también empezaron a llegar a las ciudades estadounidenses inmigrantes afrocaribeños procedentes de Jamaica, Trinidad y Barbados. Con un mayor nivel educativo y más experiencia en el sindicalismo obrero y en la política en esas islas, en muchos casos se convirtieron en líderes de los afroamericanos procedentes del sur de EE UU. Algunos afroamericanos llegados al norte se hicieron seguidores del nacionalista negro Marcus Garvey, quien hablaba de volver a África, mientras que otros apoyaron al socialdemócrata W.E.B. DuBois, de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), v aun otros al socialista A. Philip Randolph.

El movimiento por los derechos civiles que comenzó a mediados de la década de 1950 aspiraba a poner fin al sistema legal de segregación y privación del derecho al voto en el sur. A base de boicots, manifestaciones masivas y protestas pacíficas frente a la represión más violenta, que incluía apaleamientos, atentados con bomba y asesinatos, entre 1955 y 1965, principalmente bajo la dirección del reverendo Martin Luther King, el movimiento forzó al presidente demócrata Lyndon B. Johnson y al Congreso de EE UU a promulgar la ley de derechos civiles de 1964 y la ley de derechos de sufragio de 1965, que devolvieron a los afroamericanos del sur sus derechos fundamentales, aunque tuvo que pasar otra década para que esos derechos pudieran ejercerse efectivamente.

Al mismo tiempo, en 1966, líderes negros como Stokely Carmichael, del Student Non-Violent Coordinating Committee, habían comenzado a propagar la consigna de "poder negro". Aunque surgió en el sur, la consigna del poder negro sedujo a jóvenes afroamericanos en el norte, donde el problema no era la segregación legal ni la privación del derecho al voto, sino más bien la falta de oportunidades económicas, viviendas dignas o

"Este país tiene una mayor proporción de la población en la cárcel (743 por 100.000 habitantes) que cualquier otro país del mundo" buenas escuelas. Los Black Panthers adoptaron la consigna del poder negro y se armaron para defenderse de los ataques de la policía, y varios de ellos murieron a manos de esta en los años siguientes. Los afroamericanos de muchas ciudades de EE UU se sumaron a las revueltas urbanas entre 1964 y 1970, en las que los manifestantes quemaron barrios céntricos, saquearon tiendas y en ocasiones mantuvieron

enfrentamientos armados con la policía. La combinación del lema del poder negro con las revueltas urbanas hizo que se rompiera la alianza existente entre los judíos y los afroamericanos, y más en general entre los socialdemócratas y los afroamericanos, al tiempo que muchos estadounidenses blancos abandonaron las ciudades para instalarse en los suburbios.

La situación actual

La década de 1980 fue un periodo de "reacción blanca" contra el movimiento por los derechos civiles, el movimiento contra la guerra de Vietnam y el movimiento feminista. Muchos hombres blancos, en particular, inclusive hombres blancos de la clase obrera, abandonaron el Partido Demócrata y votaron por el Partido Republicano, propugnando una política sumamente conservadora en muchas cuestiones. En todo el país uno se encontraba a menudo con que el Partido Demócrata gobernaba en las grandes ciudades en las que los afroamericanos, los latinos e inmigrantes constituían una parte sustancial de la población, mientras que el Partido Republicano controlaba los suburbios poblados mayoritariamente por blancos, las zonas rurales, además del poder ejecutivo y legislativo de los Estados.

Hoy en día, las ciudades estadounidenses, tanto del norte como del sur, siguen estando igual de segregadas, por mucho que la segregación racial ya no se imponga de la misma manera violenta que en el pasado, de modo que muchos negros habitan en barrios y viviendas más pobres que los blancos (Thorpe, 2014). Las escuelas también están segregadas, ya que los niños afroamericanos suelen acudir a escuelas públicas de las ciudades y los arrabales pobres, que cuentan con menos financiación y menos equipamientos y materiales, mientras que los niños blancos disponen más a menudo de escuelas privadas o parroquiales o colegios suburbanos bien dotados de financiación y equipamientos. En proporción, son muchos menos los afroamericanos y latinos que llegan al bachillerato y cursan estudios universitarios. Un informe reciente revela que "el 54% de los afroamericanos terminan la enseñanza secundaria, frente a más del 75% de los alumnos blancos y asiáticos" (Thompson, 2014). La tasa de desempleo entre los afroamericanos es desde hace décadas alrededor de dos veces mayor que

entre los blancos, tanto en períodos de pleno empleo como en épocas de paro elevado.

Desde la década de 1970 no ha habido ningún verdadero movimiento de liberación afroamericano. Las antiguas organizaciones de derechos civiles se han institucionalizado y supeditado al Partido Demócrata. Viejos dirigentes afroamericanos defensores de los derechos civiles, como el reverendo Jesse Jackson, quien ya se dio a conocer en la década de 1960, y el reverendo Al Sharpton, que pasó a ser una figura pública en los años ochenta — ambos han acabado militando en el Partido Demócrata—, han intentado encauzar las protestas recientes dentro de los canales habituales de la socialdemocracia. Sin embargo, los que se manifiestan en las calles son mayoritariamente jóvenes, muchos menores de 20 años, de modo que los viejos líderes ya no influyen en ellos ni les representan. Como tampoco, en este terreno, los antiguos grupos de izquierda que han intentado situarse en el centro del movimiento. De hecho, la masividad y fluidez del movimiento impide que cualquiera de los pequeños grupos de izquierda de EE UU pueda influir mucho. Al mismo tiempo están surgiendo nuevas redes de activistas afroamericanos y aliados suvos a caballo del movimiento actual.

El llamado "sistema de justicia" estadounidense está amañado contra los afroamericanos, latinos y la gente pobre en general. El sistema como tal —desde el policía de barrio y el fiscal hasta el juez y el guardia de la cárcel— no imparte justicia a casi ninguna persona que quede atrapada en sus redes. Fruto de más de dos siglos de desarrollo al amparo de intereses de clase, oportunismo político y prejuicios raciales, ese sistema es un horror y un escándalo. La lucha no solo consiste en parar los asesinatos por parte de la policía y los guardias privados, sino en transformar un sistema basado en el miedo, la violencia, la tortura y el asesinato, en otro que no busque el castigo, sino la rehabilitación y la justicia reparadora.

Es hora de un nuevo comienzo

Sabemos que detrás del criminal sistema de justicia se halla el sistema capitalista, que genera y acentúa continuamente la desigualdad social, dejando a muchas personas sin empleo y a menudo en la pobreza. Mientras haya desigualdad y discriminación, la policía será una fuerza de ocupación en nuestras comunidades pobres. Cuando falta enseñanza, atención sanitaria, viviendas, empleo y salarios dignos, cuando falta justicia social, no puede haber justicia a secas.

Dan La Botz es activista sindical, periodista y miembro de la organización política estadounidense *Solidarity*.

Traducción: VIENTO SUR

Bibliografía citada

- Gabrielson, R., Grochowski Jones, R. and Sagara, E. (2014) "Deadly Force, in Black and White". ProPublica. 10/10/2014. Disponible en: http://www.propublica.org/article/deadly-force-in-black-and-white.
- Juzwiak, R. and Chan, A. (2014) "Unarmed People of Color Killed by Police, 1999-2014". Gawker. 12/8/2014. Disponible en: http://gawker.com/unarmed-people-of-color-killed-by-police-1999-2014-1666672349.
- Lee, J. (2014) "Exactly How Often Do Police Shoot Unarmed Black Men?". *Mother Jones*. 15/8/2014. Disponible en: http://www.motherjones.com/politics/2014/08/police-shootings-michael-brown-ferguson-black-men.
- Thompson, T. (2014) "Fact Sheet: Outcomes for Young, Black Men". *Tavis Smiley Report*. Disponible en: http://www.pbs.org/wnet/tavissmiley/tsr/too-important-to-fail/fact-sheet-outco-mes-for-young-black-men/.
- Thorpe, G. (2014) "Top 10 Most Segregated Cities in the US", 24/3/2014. *Atlanta BlackStar*. Disponible en: http://atlantablackstar.com/2014/03/24/10-of-the-most-segregated-cities-in-the-u-s/.

2 miradas voces

Paisajes de silencio

Alberto Espinosa Hernández

Alberto estudia fotografía en el CEV de Madrid. Allí conoce a un profesor, Carlos Sánchez, que le engancha con su pasión fotográfica, le resuelve las infinitas dudas que le surgen durante su aprendizaje y lo introduce en el mundo de la fotografía de autor y de los grandes maestros como Ansel Adams y Michael Kenna. En un primer momento trabaja solo con cámara analógica con la que conserva el misterio del disparo, de la imagen latente, del trabajo lento del laboratorio que le da libertad, donde crea imágenes en blanco y negro.

Intuye que la ausencia de color le permite concentrarse en otros aspectos, comprender que la foto no es una representación de la realidad sino la visión subjetiva de ella. Así llega a estas imágenes poéticas y, en cierta manera, nostálgicas. Surgen paisajes de países próximos —Marruecos, España, Francia, Italia, Portugal...— unidos por un estilo en las tomas, en el punto de vista, de tal manera que muchas veces los nombres de lugares y países parecen intercambiables, y nos reconocernos en una cultura común. Todos producen sensaciones de orden, plenitud, tranquilidad, de las que él carece —como afirma en una entrevista—. Aísla lo esencial, realiza un ejercicio de reducción minimalista que sugiera un contenido metafórico. Y en todas ellas encontramos la ausencia de protagonismo humano.

A veces viaja a un sitio concreto buscando una imagen calculada pero la magia aparece en el camino, en ese lugar que no espera, en ese latido que le sorprende. Viajes solitarios, dedicados con intensidad y tesón a la creación.

Utiliza normalmente el medio formato y es un placer verle buscar el encuadre perfecto en Belchite (https://www.youtube.com/watch?v=NRgGU8k00xk).

También trabaja en publicidad y en moda porque su objetivo es vivir de la fotografía. Conseguir que su pasión se convierta en su modo de vida. Además aprende mucho en esos campos en iluminación detallada y extrema, en puntos de vista y en color que, a veces, recupera para sus fotos como autor. Ha participado en muchas exposiciones y ha colaborado en numerosas revistas. También ha recibido distintos premios a lo largo de su —aún— corta carrera. Si queréis saber más de él y, sobre todo, admirar más imágenes suyas lo podéis hacer en su página web http://www.albertoespinosaphotography.com/.

Carmen Ochoa Bravo











3 plural plural

Derecho a la ciudad: poder de las plazas y municipalismo

El conjunto de artículos que integran este **Plural** constituyen, en cierta medida, una continuación del aparecido en mayo de 2011, en el número 116 de la revista bajo el título "Crisis urbana y derecho a la ciudad" publicado días antes de la explosión del 15M.

En aquel número abordamos la "crisis urbana" entendiéndola como la crisis derivada de la extensión a escala planetaria de un modelo de desarrollo urbano surgido en las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX en los EE UU. Este modelo condujo al desarrollo masivo de la suburbanización: carreteras, automóviles, urbanización difusa y nuevo estilo de vida. El derecho a la ciudad, como marco estratégico para las luchas urbanas, viene condicionado por las formas físicas y políticas que ha tomado este tipo de desarrollo urbano y depende de cómo la gente y los movimientos populares se enfrentan a las dinámicas disolutorias o excluyentes de estos procesos urbanizadores.

En este **Plural** abordaremos, en primer lugar, la ciudad como espacio de protesta. "Las ciudades son campos de batalla", decía Walter Benjamín en su *Libro de los Pasajes*. No se equivocaba. La actual crisis urbana y sus formas de segregación están transformando las maneras de protesta de una forma que parece depender de las metamorfosis del espacio: las "marchas" como unión entre las luchas agrarias tradicionales y el nomadismo desterritorializado de la globalización neoliberal (de las euromarchas a las marchas por la dignidad); la geopolítica de las resistencias trazada por el movimiento "antiglobalización" y sus contracumbres (Seattle 1999, Praga 2000, Génova 2001, Barcelona 2002, etcétera) o por el ciclo de protesta transnacional "del 15M" (revueltas árabes, "indignados", movimiento de las plazas en Atenas, Occupy Wall Street, Yo soy 132 en México, Hong-Kong); la reapropiación de las plazas y espacios públicos de los centros de las ciudades (15M) y los motines o insurrecciones urbanas que se desplazan a barrios y suburbios (revueltas en la *banlieue* francesa, *riots* en Londres).

En este número **Ana Méndez de Andés Aldama**, integrante del colectivo de investigación Observatorio Metropolitano, aborda el papel de la plaza como epicentro de la acción política en tanto que elemento central de un

ciclo de protesta que se inicia en la primavera árabe y que hace una apropiación de antiguas y nuevas formas de organización y protesta en torno a un elemento constitutivo y constituyente de la democracia: la plaza como ágora política. El elemento fundamental de estas protestas es, como señala, la multiplicación de dispositivos de politización (acampadas, espacios urbanos autogestionados, etcétera) que comparten algunas características comunes: el desarrollo de propuestas de acción colectiva, la creación de espacios de amplia autoorganización y la emergencia de nuevos sujetos políticos. No resultaron ser las estructuras más eficaces posibles pero contribuyeron a la creación de un nuevo sentido común.

"La calle es nuestra" (Gamonal, Burgos)

En segundo lugar, el plan inicial era contar con artículos realizados por exponentes de movimientos sociales en torno a las luchas urbanas por la reapropiación de los bienes comunes y del terriotorio: la lucha por el derecho a la vivienda y la experiencia de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), las luchas urbanas contra la privatización del agua (Madrid, Alcázar de San Juan) y por su remunicipalización; la lucha contra los equipamiento públicos innecesarios (el barrio de Gamonal en Burgos), contra el desarrollo urbanístico depredador (Cabanyal de Valencia), contra las ciudades-marca y por barrios habitables (Barceloneta), como exponentes de luchas urbanas por la redefinición en clave democrática del territorio que apuntan al desarrollo de una ciudad y un urbanismo *otro* que aflora en las prácticas de los movimientos sociales antagonistas.

Para el presente **Plural** hemos contado con la colaboración de **Carlos Huerga**, activista de la PAH, en un artículo que relata la dinámica reciente del movimiento por el derecho a la vivienda, desde sus inicios con "V de vivienda" hasta la consolidación de la PAH, movimiento que ha conseguido, gracias a la práctica desobediente de interposición del cuerpo frente a los desahucios, poner en el centro de la agenda política la cuestión de la estafa inmobiliaria e hipotecaria, generar redes de apoyo mutuo y elevar a "sentido común dominante" la demanda de dación en pago con efectos retractivos y el alquiler social.

Por último, abordaremos la coyuntura política marcada por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. En este momento, buena parte de las expectativas de la gente para acabar con el austericidio y revertir la situación, están depositadas en los procesos electorales. **Brais Fernández** e **Isabel Serra**, de Anticapitalistas y Podemos, tratan sobre el papel de la disputa electoral en las formaciones sociales neoliberales, analizando el papel que puede jugar Podemos, las diferentes estrategias de la izquierda en el ciclo electoral y las herramientas necesarias para el cambio político con particular atención al reto inmediato de las elecciones municipales y autonómicas.

La creación de candidaturas de "unidad popular" en ciudades y pueblos de la geografía de este país de países es la auténtica novedad del ciclo electoral y constituye la posibilidad de hacer efectivo el derecho a la ciudad. Guillermo Zapata, portavoz de Ganemos Madrid, pone en relación la nueva ola de municipalismo democrático inaugurada por el 15M, las mareas, la PAH, etcétera, con la posibilidad de gobierno democrático de la ciudad. Como elemento clave del nuevo gobierno democrático señala la necesidad de adecuar las estructuras de participación (físicas y digitales) a la realidad intermitente de la vida, y las dimensiones que debe tener el proceso de confluencia: a escala ciudadana, cooperación con los espacios organizados de lo social y con los diferente actores políticos.

Carlos Sevilla, editor



1. Espacio urbano, poder de las plazas y municipalismo

El espacio público como campo de batalla

Ana Méndez, de Andés

En el espacio público ideal el conflicto es continuo. David Harvey (2007)

Dos eventos consecutivos, en julio y noviembre de 1999, determinan el nuevo carácter en la reapropiación del espacio público que configura la historia de las protestas del siglo XXI. A partir del bloqueo y colapso de nodos financieros y políticos que tuvieron su momento álgido en el Carnaval contra el Capital del 18J y la "batalla de Seattle" durante la segunda mitad de 1999, hasta el establecimiento de asambleas y acampadas en las plazas de Egipto, Turquía, España, Grecia y Estados Unidos, pasando por las marchas de campesinos, indígenas, trabajadores y paradas o la ocupación de solares vacíos para huertos urbanos y espacios comunitarios, el espacio público se ha configurado como el más importante marco espacial de un nuevo tipo de acción política, de distinta intensidad y potencia espacio-temporal, organizada mediante redes conectadas a través del globo/1, con operaciones descentralizadas según ciudades, grupos de intereses o afinidades/2, y con la capacidad de producir alianzas inesperadas que provocan desplazamientos en la construcción de las relaciones de poder/3

^{1/&}quot;Alguien en el grupo de redes internacionales mandó un correo a un grupo anarquista de Nueva York, que lo reenvió a Chicago, que a su vez lo reenvió a Boston, y así a través de varias ciudades americanas hasta que llegó a México DF, desde donde se mandó a un grupo de apoyo zapatista en Chiapas donde había gente que conocía a la persona que mandó el primer correo desde Reino Unido pero no tenían ni idea de que ella conocía nada sobre el 18J, así que le escribieron preguntando: '¿Has visto esta propuesta? ¿Sabes algo de esta acción?'" (Do or Die, 1999).

^{2/} Mapa del bloqueo a la OMC de la Direct Action Network en David Silnot: "Seattle WTO Collapsed 14 Years Ago: Lessons For Today". Disponible en: https://www.popularresistance.org/seattle-wto-collapsed-14-years-ago-lessons-for-today/.

^{3/} Alianzas como la de "camiones y tortugas" (sindicalistas y ecologistas) en las calles de Seattle, los *skaters* y las trabajadoras del sexo en las protestas contra la aplicación de la Ordenanza Cívica de Barcelona, o la de migrantes y *hackers* en la lucha contra la penalización de los manteros.

El espacio público no solo acoge sino que permite y promueve la generación de movilizaciones que han conseguido reterritorializar los malestares y las luchas que los procesos de globalización intentan dispersar y antagonizar a lo largo de distintos espacios de la economía global y a través de distintas capas de la sociedad. A la vez, son capaces de introducir en el imaginario colectivo imágenes de gran potencia que se oponen de manera rotunda y eficaz al eslogan neoliberal acuñado por Margaret Thatcher de que "No hay alternativa"/4, y proponer y desarrollar, en la propia organización y en la implementación de las acciones, espacios de colaboración, democratización y solidaridad que niegan la lógica del individualismo. La expresión del descontento civil que en los cuatro últimos años/5 ha alcanzado una escala global y ha provocado el deseo de nuevas organizaciones de acción política que superen las instituciones políticas tradicionales y los canales de expresión habituales se ha expresado en las calles y plazas, de la plaza de Tahrir a la Puerta del Sol, de Syntagma al parque de Gezi, y se extiende a movimientos y demandas como la defensa del acceso al transporte público del movimiento Passe Libre/6 en Brasil o la democratización de los medios de comunicación y el debate público-político de Yo soy 132/7 en México.

La plaza como ágora política

La plaza como el espacio público ideal que permite todo tipo de intercambios sociales, epicentro de la acción política, ha sido esencial en el ciclo de protestas que se inicia en la primavera árabe y que hace una apropiación de antiguas y nuevas formas de organización y protesta en torno a un elemento esencial de la democracia: la plaza como ágora. Una breve genealogía del llamado "movimiento de las plazas" comienza en Egipto en enero de 2011, sigue con las ocupaciones en España durante mayo y junio, se desplaza a los pocos días a la plaza de Syntagma en Atenas y se multiplica de manera exponencial con Occupy Wall Street y sus derivados en los Estados Unidos/8 y el llamamiento a las plazas europeas extendió las acampadas a ciudades de toda Europa. Dos años después, la chispa de la protesta reprende en la ocupación de la plaza de Taksim en Estambul y un año más tarde la demanda por la democracia llega hasta Hong Kong.

Sin embargo, las acampadas como forma de protesta distan mucho de ser un elemento estrictamente novedoso. Frente a protestas como el Women's Peace

^{4/} There Is Not an Alternative —TINA— es el eslogan acuñado por Margaret Thatcher, que declaraba: "No existe esa cosa llamada sociedad, hay hombres y mujeres y familias".

^{5/} Este texto se termina de escribir en el cuarto aniversario de la ocupación de la plaza de Tahrir, en El Cairo. 6/ http://saopaulo.mpl.org.br/.

^{7/} "Manifiesto del #YoSoy132 al pueblo de México": http://www.yosoy132media.org/asambleas-2/asambleas-metropolitanas/discurso-frente-a-televisa/.

^{8/} Wikipedia tiene listados y referenciados 309 "occupies" en todo Estados Unidos: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Occupy_movement_protest_locations_in_the_United_States.

"... las acampadas como forma de protesta distan mucho de ser un elemento estrictamente novedoso"

Camp en Greeham Commons/9 contra el almacenamiento de armas nucleares que duró 19 años, de septiembre de 1981 al año 2000, o la protesta de Brian Haw contra la guerra de Iraq que le llevó a vivir del 2001 al 2011 frente al Parlamento inglés, el movimiento de las plazas aparece como una serie de *blitz-krieg*, breves momentos de ex-

traordinaria intensidad sucedidos a lo largo de poco menos de un año y donde las ocupaciones más emblemáticas duraron apenas unas pocas semanas: Tahrir 18 días (24 de enero-12 de febrero 2011); Puerta del Sol 28 días (15 de mayo-11 de junio 2011); y Occupy Wall Street también 28 (17 de octubre-15 de noviembre 2011); Syntagma poco más de dos meses (25 de mayo-30 de julio 2011); dos años después Taksim duró 17 días (28 mayo-15 de junio 2013). Acampadas de relativa corta duración y alta concentración de impacto extendidas en decenas de países, con cientos de ocupaciones en ciudades y pueblos y millones de participantes/10 en una multiplicación de dispositivos de politización que comparten algunas características comunes: el desarrollo de propuestas de acción colectiva, la creación de espacios de amplia autoorganización y la emergencia de nuevos sujetos políticos.

La organización de las plazas, de la Puerta del Sol a Zuccotti Park o Syntagama se basa en asambleas que trabajaban con distintos niveles de consenso. Si en Nueva York usaban la técnica del micrófono humano /11 en Madrid las asambleas requerían de un alto grado de organización logística: amplificación, moderación, traducción en lengua de signos, y mucho tiempo, hasta el punto de que decisiones importantes, como la de levantar la acampada de Sol, podían tardar días en tomarse. Estos dispositivos no resultaron ser las estructuras de toma de decisiones más efectivas posibles, pero produjeron un resultado tremendamente importante y singular: un nuevo sentido común. Las acampadas se entienden como respuestas colectivas al austericidio, la privatización de la capacidad de reproducción social y la apropiación de la cooperación y, como tal, deben atacar las bases de la individualización, principal estrategia del expolio. La asunción de que las relaciones se desarrollan en un sistema que funciona bien de manera natural y en el que los problemas son debidos a nuestras acciones, características y actitudes personales se desmonta a través de la producción de un espacio de escucha y de autoorganización colectiva que trasciende más allá de las plazas y alcanza a las movilizaciones por la vivienda,

^{9/} http://www.greenhamwpc.org.uk/.

^{10/} La 15Mpedia tiene listadas 139 acampadas en el Estado español y 49 el el resto de Europa en "Lista de acampadas": http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_acampadas. Se puede ver el mapa aquí: http://www.ikimap.com/map/mapa-de-las-acampadas.

^{11/} La intervención de Judith Butler sobre la política del cuerpo público es uno de los mejores ejemplos de la performatividad de esta técnica (Lambert, 2011).

la salud o la educación. Bajo las tiendas, el campamento, con sus comisiones y grupos de trabajo, su delimitación de áreas de acampada y sus infraestructuras, produce el convencimiento de que "sí se puede". Sí se puede dar de comer y beber a miles de personas, es posible crear un sistema que provea de un sentido de seguridad y control en base al respeto, es posible estar a cubierto del sol o de la lluvia. Es posible tomar decisiones y colaborar con gente a la que te une poco más que el convencimiento colectivo que las cosas pueden y deben ser organizadas de otra manera.

Más allá y más acá de las plazas

Esta representación de la plaza europea como el espacio de referencia en la producción pública y política, sin embargo, no es tan fácilmente trasladable, ni cubre todas las modalidades de acción. Fue la remodelación del parque de Gezi la que encendió la chispa que prendió en la advacente plaza de Taksim, dando cuerpo en el espacio público a la resistencia de toda una ciudad contra los megalómanos proyectos de la oficina del alcalde (como el tercer puente sobre el Bósforo o la construcción de un canal en la parte europea)/12 y su gestión neoliberal de la ciudad/13 De la misma manera, las protestas del movimiento Pravo na Grad (derecho a la ciudad) en Zagreb durante 2008 no protestaban únicamente contra la construcción del quinto centro comercial del centro de la ciudad (Klicek, 2014; Subversive Urbanism, 2012), con apartamentos de lujo incorporados, aunque las protestas se centraran en la privatización de una parte importante de la zona peatonal alrededor de la Plaza de las Flores a través de la construcción de una entrada al aparcamiento, sino principalmente contra la concepción de la ciudad como un espacio a mercantilizar, con total ausencia de espacios de autoorganización. En el verano de 1988, fue el establecimiento del toque de queda y posterior intento de desalojo de las personas que dormían en Tompkins Park en el Lower East Side de Manhattan lo que dio lugar a una resistencia que se considera como una de las primeras acciones contra la creciente gentrificación de esa parte de Manhattan.

La cultura norteamericana, de hecho, se basa en una concepción del espacio público bastante alejada de este imaginario. Jane Jacobs ofrece en su libro *Muerte y vida de las grandes ciudades americanas* su famosa lauda a las aceras y habla de la importancia de los parques, pero no menciona en ningún momento las plazas. Esta división del espacio público norteamericano en calles dedicadas al tráfico y la movilidad, y parques destinados al ocio y el

^{12/} http://reclaimistanbul.com/category/themes/mega-projects/.

^{13/} Este artículo incluye algunos datos que dan cuenta de la escala de la protesta: "Según datos del Ministerio del interior, las protestas tuvieron lugar en 80 ciudades y, de una población total de 81,3 millones, 545.000 personas participaron de manera activa en 4.725 manifestaciones reclamando su papel político en la reconfiguración de sus propias ciudades, la defensa de sus libertades y, sobre todo, expresando su deseo de democracia. Hubo 5.341 detenciones y 4.312 personas y 694 policías heridos" (Deniz, 2013).

"Estos dispositivos no resultaron ser las estructuras de toma de decisiones más efectivas posibles, pero produjeron un resultado tremendamente importante y singular: un nuevo sentido común"

recreo deja el concepto "plaza", en el español original, en manos de promotoras y publicistas para nombrar centros comerciales y oficinas, y es causante de cierta confusión en la nomenclatura urbana estadounidense. Occupy Wall Street en Zuccotti Park (anteriormente llamada Liberty Plaza Square por el edificio de oficinas One Liberty Plaza) fue posible precisamente porque este pequeño espacio ni es un parque (más bien una plaza) ni es público. Es un "espacio público de propiedad privada" bajo el control de Brookfield Office Properties, la compañía dueña del edificio

de oficinas advacente, y uno de los 503 espacios públicos y 320 edificios de Nueva York (la mayoría de ellos en Mid y Lower Manhattan)/14 generados por una ordenanza implementada en los año 70 que concede un aumento de la superficie edificable y otras ventajas edificativas (como posibilidades de retranqueo, aumento de la altura total, etcétera)/15 a cambio de que se construyeran, mantuvieran y gestionaran estos espacios de acceso público y propiedad (y gestión) privada. Como parte del trato, la plaza debía estar abierta al público 24 horas y son los dueños los que se encargan de que se respeten las normas establecidas por ellos mismos, por lo que la policía no podía desalojar el campamento a menos que se lo pidieran los encargados del espacio/16. Cuando un año después, OWS intentó establecerse en Union Square, lugar emblemático de manifestaciones y protestas, el hecho de que estuviera ocupado en su mayor parte por un parque público sujeto al toque de queda (entre la medianoche y las seis de la mañana) y que la policía pudiera regular, en aras de la fluidez de la movilidad, la ocupación de las aceras, limitó enormemente la capacidad de acción de esta nueva iniciativa.

Otra estrategia de reapropiación y producción de espacio público de resistencia son los espacios urbanos autogestionados que surgen de la demanda y ocupación de espacios vacíos o en desuso, combinan actividades de producción, reproducción y protesta, y son capaces de articular momentos de resistencia urbana de gran intensidad. Así sucedió con los huertos comunitarios que surgieron en Nueva York a partir de la experiencia del grupo Green Guerrillas que ocupó, y más tarde consiguió en cesión, un solar abandonado en el Lower Manhattan perteneciente al ayuntamiento de Nueva York. A partir de

^{14/} Se puede ver la localización en el siguiente mapa: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/priv/mndist1.

^{15/} Véanse las ordenazas: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/priv/priv.shtml y el mapa de localización.

^{16/} Entre los que, curiosamente, se encontraba Diana L. Taylor, la pareja sentimental del entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg: http://www.brookfield.com/content/board_of_directors-26685. html?Page=1&locationTypeId=0.

esta experiencia, las iniciativas se multiplicaron y en la década de los noventa se organizaron de manera efectiva resistiendo al afán privatizador del alcalde Giuliani y construyendo una red de más de 400 espacios en toda la ciudad. Algunos ejemplos contemporáneos de este tipo de protesta-resistencia son el Prinzessinen Garten de Berlín, Eco-Box en París, Esta es una Plaza en Madrid, La Huerta del Rey Moro en Sevilla o el Forat de la Vergonya en Barcelona.

La producción inmaterial del espacio

Las imaginaciones radicales pueden desbordarse desde las mentes, los cuadernos de notas, los espacios del arte, hacia las calles. John Jordan (2005)

En las últimas décadas, distintos dispositivos han intentado llevar a cabo un salto del espacio público-público al espacio público-político, con la creación de nuevos modos de protesta que utilizan la ciudad como tablero de juego de una construcción de imaginario que se opone a la apropiación de las cosas comunes y crean momentos de excepcionalidad que prefiguran la revolución de los cuerpos públicos de la que habla Judit Butler a Occupy Wall Street. Si las acampadas ocupan el espacio público de las plazas en dispositivos de alta intensidad y corta duración, otro tipo de intervención aún más efímera y performática se empieza a desplegar en el espacio público desde inicio de la década de los noventa con la intención de ocupar no solo el espacio físico sino, sobre todo, el espacio del imaginario colectivo que determina lo que está permitido hacer en el espacio público, demostrando cómo la protesta puede ser un aspecto más de la fiesta, y viceversa.

El 18 de junio de 1999, coincidiendo con la reunión del G8 en Múnich, se convoca un día de acción global bajo el lema "Carnaval Contra el Capital". La convocatoria reúne en Londres a miles de figuras enmascaradas que recorren de manera aparentemente desorganizada las calles de la City, hasta converger y ocupar las oficinas del mercado de derivados y materias primas, el London International Financial Futures Exchange (LIFFE). La propuesta pone en práctica las tácticas utilizadas por el movimiento Reclaim the Street, que había comenzado a organizar acciones en las calles contra la ocupación del espacio público por parte de los coches como metáfora de la ocupación de la producción capitalista en las vidas y cuyo primer primer póster declaraba: "Si quieres cambiar la ciudad, tendrás que controlar sus calles" (Blissant, 2007). El espacio del evento festivo del carnaval callejero produce "carnavales de resistencia, con sus cuerpos grotescos desatados, su rechazo absoluto de las jerarquías y de la división entre actores y espectadores, su insistencia en la participación total, su caos creativo impredecible, el discurrir de la multitud fluido y sin leyes, nos enfrenta cara a cara, o mejor dicho culo con culo, con todo aquello de lo que nuestra sociedad abjura y necesita controlar" (Jordan, 2005). Momentos en suspensión que se enfrentan a la ciudad-mercancía creada para apropiarse de "De manera que el espacio público, autoorganizado y de acceso universal, se parece más a un recurso común que a una propiedad pública bajo tutela institucional"

manera agresiva y excluyente de lo que debería ser de todas, y que produce un espacio público que se rebela contra sus ocupantes a través de la ausencia de bancos, elementos disuasorios contra la población que duerme en la calle, retirada de fuentes de agua potable, comercialización de los espacios públicos, etcétera. La relevancia simbólica de elementos como las medidas "antihomeless", representación de la ciudad excluyente, es de tal envergadura que provoca desde tormentas de Twitter a su inclu-

sión en las colecciones de arte contemporáneo/17. De la misma manera, la operación de venta de la estación de metro de Sol a una compañía de telefonía móvil ocupa el espacio simbólico de la plaza al mismo tiempo que se intenta llenar el espacio físico de la Puerta del Sol con árboles y usos privativos/18 por parte de las mismas fuerzas a las que se enfrentaba la acampada.

Otro aspecto crucial de la producción inmaterial de las plazas es la compleja red de comunicación-distribución, heredera de proyectos como Indymedia que surgió precisamente de las protestas de Seattle. La estructura y organización de los blogs, cuentas de Twitter, Facebook y Bambuser, geolocalización de las acampadas, la retransmisión de las asambleas y sus consensos o el análisis de procesos y archivo de la memoria en plataformas digitales, contribuyen y resuenan en la organización territorial y espacial de los movimientos de protesta de una manera netamente reflejada en el lema del proyecto de edición abierta Bookcamping: "De la plaza a la nube y de la nube a la plaza". En esta producción del espacio público digital, el aspecto territorial se superpone al simbólico/comunicativo, de manera que reclamar el espacio público supone también reclamar un espacio político de representación. Como en 2005, durante las revueltas de la banlieue francesa, donde durante días se queman coches y se extiende la revuelta en un círculo de comunicación-acción virtuoso. A medida que las impactantes imágenes de coches ardiendo se replican en los medios de comunicación, se extiende el fenómeno dentro y fuera el país, como chispa que, literalmente, incendia la pradera, en un ejercicio que reclama una centralidad sistemáticamente denegada, aunque sea difícil evaluar el impacto de estas acciones en las políticas públicas del Estado francés de la

^{17/} Las espinas utilizadas en ciertos lugares de Londres han sido incorporadas a la colección del Victoria&Albert Museum en su Rapid Response Collection: http://www.vam.ac.uk/content/articles/r/rapid-response-collecting/.

^{18/} Véase el plano de la propuesta, aún no implementada: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/08/madrid/1349704795_560147.html.

misma manera que se ha establecido el impacto de las protestas laborales sobre las acciones de las compañías privadas, que descenderían un 0,1 por cien por cada párrafo publicado en el *New York Times/*19.

Devenir-común del espacio público

Las imágenes de objetos ardiendo y vecindarios sublevados se replican desde la banlieues francesas a la periferia de Burgos. El barrio de Gamonal bloquea e incendia para protestar contra la construcción de un nuevo bulevar y su correspondiente parking subterráneo bajo el lema "La calle es nuestra". Resuenan las declaraciones en 1976 del entonces Ministro de Gobernación a propósito de la prohibición de la manifestación del 1 de mayo: "La calle es mía". Es decir, del Estado. Y es difícil determinar cuál de las dos afirmaciones representa mejor la realidad. Aunque nominativamente las calles sean dominio público, están reguladas y son gestionadas por el Ayuntamiento, quien retiene toda la capacidad de control y determina qué se puede hacer en ellas. La normativa municipal establece quién puede realizar actividades económicas en ellas (aunque sea un intercambio-venta de cromos); quién puede beber, qué y dónde (aunque sea una cerveza en un banco); quién y como se puede anunciar en ellas (aunque sea sobre gatos perdidos o de venta de coches), cómo nos sentamos o incluso si nos podemos sentar. La institución Ayuntamiento controla el espacio público e impone su criterio de lo que este debe ser. Sin embargo, la capacidad de control no es infinita, precisa de medidas y dispositivos para imponerse, el espacio público es extenso y, en la mayoría de los casos, escapa al control institucional. Solo en los lugares de mayor concentración de potencial económico, normalmente el centro de las ciudades, o en situaciones excepcionales, como los grandes eventos, es capaz la institución de ejercer un control férreo, mientras que en los espacios y tiempos periféricos al poder, el espacio público tiene un alto grado de autoorganización. De manera que el espacio público, autoorganizado y de acceso universal, se parece más a un recurso común que a una propiedad pública bajo tutela institucional. Las prácticas de protesta y reapropiación representan de manera clara la potencia política y la capacidad de generar a partir de un espacio público político, de relación y productividad, espacios comunes que no se cierran en sí sino que permanecen abiertos a la negociación y al conflicto. Reclamar las calles, las plazas, los parques como parte de la esfera pública, instalar acampadas, desplegar carnavales y plantar jardines significa reclamar el terreno común desde el que relanzar estas y otras prácticas de reapropiación no solo del espacio público, sino de la ciudad

^{19/} Según un estudio de las 342 protestas que llegaron a las páginas del *New York Times* entre 1962 y 1990 (McDonnell y King, 2013).

como derecho y de nuestra capacidad de desarrollar en ella una vida que merezca la pena ser vivida.

Ana Méndez de Andés es integrante del Observatorio Metropolitano de Madrid.

Bibliografía citada

- Blissant, L. (2007) "Do-It-Yourself Geopolitics. Global Protest and Artistic Process". 27/4/2007. Disponible en: https://brianholmes.wordpress.com/2007/04/27/do-it-yourself-geopolitics/.
- Deniz, E. (2013) "Gezi Park As A Place Of Encounter For The Recent Local Struggles In Turkey". Anuari del conflicte social 2013/Observatory of Social Conflict. University of Barcelona. Disponible en: http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/download/10334/13126.
- Do or Die (1999) "Friday June 18th 1999. Confronting Capital And Smashing The State!". *Do or Die*, n.° 8, pp. 1-12. Disponible en: http://www.eco-action.org/dod/no8/j18.html.
- Harvey, D. (2007) Entrevista de Iria Candela publicada en *El País*, 8/9/2007. Disponible en: http://elpais.com/diario/2007/09/08/babelia/1189207032 850215.html.
- Jacobs, J. (1961) *The Death and Life of Great American Cities*. Nueva York: Random House. Trad. cast.: *Muerte y vida de las grandes ciudades* (2011). Madrid: Capitán Swing Libros.
- Jordan, J. (2005) "Tomando notas al caminar (sobre cómo romperle el corazón al Imperio)". *Transversal 10 Art and Police*. Disponible en: http://eipcp.net/transversal/1007/jordan/es.
- Klicek, S. (2014) "Cleaning out the rat-holes of Zagreb's Flowers Square". Failed Arquitechture, 14/3/2014. Disponible en: http://www.failedarchitecture.com/cleaning-out-the-rat-holesof-zagrebs-flower-square/.
- Lambert, L. (2011) "#LibertySquare. Judith Butler at the Occupy movement: 'This is a politics of the public body'". The Funambulist blog, 2/12/2011. Disponible en: http://thefunambulist.net/2011/12/02/liberty-square-judith-butler-at-the-occupy-movement-october-23rd-2011/.
- McDonnell, M.-H. y King, B. (2013) "Keeping up Appearances: Reputational Threat and Impression Management after Social Movement Boycotts". Administrative Science Quarterly 58 (3)387–419.
- Méndez de Andés, A. (ed.) (2010) urbanaccion 07/09. Madrid: La Casa Encendida.
- Subversive Urbanism (2012) "Zagreb: the right to the city". Subversive Urbanism, 12/4/2012. Disponible en: http://subversiveurbanism.tumblr.com/post/20976303350/zagreb-the-right-to-the-city.



2. Espacio urbano, poder de las plazas y municipalismo

Desde V de Vivienda a la PAH, la lucha por el derecho a la vivienda

Carlos Huerga

En los últimos cinco años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) probablemente ha sido el movimiento social que mejor ha sabido sacar a la escena pública algunos de los mayores atropellos que hemos sufrido en nuestro país: la estafa hipotecaria, las consecuencias para todas las personas que se hipotecaron mientras crecía la burbuja inmobiliaria y la indefensión de estos ante la banca.

Para encontrar los orígenes de este movimiento debemos retroceder unos años, hasta el 2006, año en el que el colectivo V de Vivienda se constituyó. Este movimiento consiguió sacar a la luz el problema que había en España para que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda, haciendo a su vez que se comenzara a hablar de la burbuja inmobiliaria y del derecho a la vivienda en los medios. Las manifestaciones, así como las acciones que llevó a cabo junto con las asambleas de barrio que se crearon a su alrededor, consiguieron atraer el foco mediático. Tal fue su impacto que Miloon Kothari, relator de la ONU, se reunió con ellos para estudiar la situación de este problema. El resultado fue un informe sobre el acceso a la vivienda que mostraba la situación que estábamos denunciando.

Tras la aprobación del entonces gobierno de Zapatero de una ayuda al alquiler para los más jóvenes, el movimiento comenzó a desinflarse, intentando reactivarse con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el Alquiler Social Universal. Esta iniciativa no terminó de concretarse y el movimiento siguió convocando manifestaciones con una asistencia en descenso, hasta que cesó su actividad.

Aunque algunas de sus reclamaciones son distintas, este movimiento fue el germen en Barcelona de la actual Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Tras la venida a menos de V de Vivienda y tras analizar la crisis inmobiliaria que surgió en 2008, varios activistas que se conocieron en V de Vivienda

crearon en Barcelona la primera PAH en 2009 y este nuevo movimiento comenzó a andar.

Comenzaba la crisis y con ella contábamos los desahucios hipotecarios por decenas de miles. Poco a poco, y con mucho esfuerzo, esta PAH comenzó a intentar parar estos desalojos y con ello consiguió que se hablara en los medios de comunicación de este problema. Ante tal situación, se crearon más PAHs: en Murcia en 2010 y en Valencia y Madrid en 2011.

Justo cuando estas dos últimas comenzaban a trabajar, llegó el 15M. Estuvimos semanas en Sol, las asambleas de barrio y las comisiones (la interbarrios de vivienda entre ellas). La ebullición social que supuso el 15M, junto con el constante aumento de los desahucios, hizo que se crearan PAHs a lo largo y ancho del Estado, enraizándose así este movimiento por todo el territorio.

En este nuevo escenario, en el que teníamos PAHs por todas partes, se trabajó de una manera organizada en tres campañas: Stopdesahucios; mociones en ayuntamientos; y la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social.

La campaña Stopdesahucios, la única de las tres en las que se sigue trabajando, se basa en la articulación de redes de apoyo que actúan coordinadamente para conseguir la paralización de desahucios que se encuentran en trámite. Vecinos y activistas se organizan para paralizarlos, ya sea presionando a la entidad que quiere desahuciar, dando apoyo jurídico o directamente organizando un piquete que impida el desalojo y consiga negociar algún tipo de solución.

En Stopdesahucios luchan por el derecho a la vivienda, un derecho básico, apoyándose sobre tres tratados:

- Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios:...".
- Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde dice que el estado está obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmó y ratificó este pacto, por lo que está obligada a respetarlo.
- Artículo 47 de la Constitución Española, que dice literalmente: "Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística".

Estos tres artículos dejan al descubierto la omisión del derecho a la vivienda hecha por parte de las administraciones públicas, tal y como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el año 2013. Todo esto en un contexto en el que una persona, al ser desahuciada, es arrojada a la marginalidad social ya que la deuda de su hipoteca no solo permanece, si no que aumenta debido a las costas judiciales y cláusulas (algunas de ellas abusivas, como este movimiento consiguió demostrar), haciendo que el afectado no pueda tener una segunda oportunidad.

La segunda campaña, las mociones en ayuntamientos, buscaba el compromiso de los consistorios para parar los desahucios en ciudades y pueblos. Con esta actividad, que sobre todo se trabajó cuando las PAHs comenzaban a dar sus primeros pasos, pretendíamos que los ayuntamientos aprobaran mociones en las que se comprometían a erradicar los desahucios de sus territorios. Pretendíamos tener un documento más con el que presionar a las entidades bancarias que promovían los desahucios: que nos dieran su palabra y además la cumplieran.

Varios pueblos consiguieron que sus ayuntamientos aprobaran estas mociones. Pero más que conseguir un pilar más desde el que luchar contra los desahucios, sirvió para demostrar el servilismo del poder político al poder financiero, ya que a la hora de tratar de aplicar el contenido de estas, los ayuntamientos solían limpiarse las manos y permitir que las entidades financieras hicieran lo que quisieran con sus ciudadanos.

Puede parecer que esta campaña fue un fracaso. Sin embargo, ser capaces de demostrar este servilismo carga de legitimidad a los piquetes ciudadanos que trabajan para que sus vecinos no sean desahuciados, así como arma políticamente a otras campañas que se desarrollaron tras la ILP.

En este contexto de indefensión que demostraban los Stopdesahucios y constataba el sometimiento de los ayuntamientos a las entidades financieras, surge la tercera campaña que se trabajó desde las PAHs: la ILP hipotecaria.

Esta ILP proponía tres medidas:

- 1. Dación en pago con efectos retroactivos: se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.
- 2. Paralización de los desahucios: siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a su voluntad.
- Alquiler social: el ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

Esta ILP consiguió el apoyo de más de 1.400.000 firmas. Sin embargo, desde que la iniciamos, hasta que finalmente tomamos la decisión simbólica de retirarla, tuvimos que ir sorteando todos los baches que nos fuimos encontrando: la no validación de

"Aunque algunas de sus reclamaciones son distintas, V de Vivienda fue el germen en Barcelona de la actual Plataforma de Afectados por la Hipoteca" muchos fedatarios, las normas que anulaban miles de firmas, el intento por parte del PP de no admitirla a trámite, el no poder defenderla en el Congreso y derivarnos a una comisión, la modificación del texto sin nuestra opinión, etcétera.

En esta situación, en la que se nos negó la posibilidad de discutir con los diputados las propuestas por las que queríamos que votasen, comenzamos la campaña de escraches. En ella, lo primero que hicimos fue invitar a todos los diputados a venir a nues-

tras asambleas para contarles nuestra iniciativa. Ninguno vino. Entonces decidimos ir a buscarles nosotros organizando los escraches, que no eran otra cosa que tomar el derecho a ser escuchados por nuestros representantes. Ninguno de los escraches fue violento, todos reclamaban lo mismo, poder hablar con quienes hablan por nosotros en el Congreso de los Diputados, pero estas acciones fueron aprovechadas tanto por las caverna mediática para tratar de criminalizarnos, comparándonos incluso con ETA, como por parte del poder judicial, poniéndonos multas de hasta 3.000 €, que posteriormente tuvieron que ser anuladas ya que un juez dictaminó que estos escraches no eran ilegales ni atentaban contra ningún derecho.

Con este cóctel en el que vivimos estas semanas y a pesar de contar con el apoyo de más del 80% de los ciudadanos (según encuestas del CIS), el Gobierno modificó el texto de la ILP, sin respetar ni uno solo de los puntos iniciales que proponíamos. Simplemente presentó "otra cosa" que no tenía nada que ver con las medidas que apoyaron más de 1.400.000 personas. Llegados a esto, no nos quedó más remedio que retirar simbólicamente la ILP, ya que lo que quedaba no era la propuesta en la que habíamos trabajado. Cabe decir que posteriormente el TJUE sentenció que la ley de desahucios que sacó el PP con este proceso tampoco se ceñía a la directiva europea de vivienda. Tampoco sirvió de mucho el Real Decreto que concedía una moratoria de dos años y que se redactó cuando comenzaron a darse suicidios por desahucios. La única solución de mínimos era la que llevaba la ILP.

El fin de esta ILP trajo consigo dos varapalos a las PAHs: por un lado, el desafortunado final que vivimos fue un jarro de agua fría para el movimiento. Ver cómo una campaña en la que habías estado trabajando tanto y había recibido tal apoyo social, podía ser manipulada de la manera en la que lo fue, supuso una bofetada al movimiento. Por otro, supuso pasar de la cresta de la ola, con una campaña que estaba saliendo constantemente en los medios de comunicación, junto con las reclamaciones que nuestro movimiento demandaba, a estar en un escenario en el que no teníamos otra actividad que nos estructurara a nivel estatal.

En este punto, desde el movimiento se comenzaron a pensar y articular nuevas campañas. Principalmente fueron dos las que surgieron: la Obra Social PAH y Juicio y Castigo. En ambas el movimiento sigue trabajando.

La campaña Obra Social busca recuperar viviendas vacías de bancos en las que realojar a las personas que han sido desahuciadas. En varias ciudades del Estado ya se han recuperado edificios enteros en los que las personas que se han realojado reclaman que les sean cedidas las viviendas bajo un alquiler social que les permita tener una segunda oportunidad. Además de esto, pretende denunciar cómo en un país en el que se han llevado a cabo más de 500.000 desahucios, existen cientos de miles de viviendas vacías en manos de bancos que hemos rescatado con dinero público, dándose el caso también de la SAREB, entidad con un 45% de propiedad pública. A día de hoy, más de 1.000 personas han encontrado en esta fórmula una posibilidad de conseguir una solución habitacional.

Por otro lado, la campaña Juicio y Castigo pretende armar la siguiente fase de actuación de la PAH, tras lo ocurrido con la ILP hipotecaria "subiendo las apuestas".

Esta campaña busca un avance en el señalamiento a los culpables de la situación de los y las afectadas por la hipoteca. Habiendo señalado ya a los políticos, va a por el núcleo duro, a los responsables últimos y más importantes de la estafa hipotecaria: los integrantes más poderosos de los consejos de administración de las entidades financieras.

Además, mientras que la PAH da una continuidad a los trabajos de resolución inmediata de nuestros problemas (negociaciones con los bancos, visibilización social, Obra Social PAH, presión ante ayuntamientos y parlamentos regionales, recursos antes las instancias internacionales, etcétera) Juicio y Castigo trabaja en una campaña de documentación y denuncia pública de nuestra situación y de los culpables de esta. Tiene como uno de sus ejes de trabajo documentar la violación sistemática de derechos humanos que se está produciendo en materia financiera e hipotecaria, y busca señalar y juzgar a los culpables de la misma: que se sepa la verdad, que se haga justicia y se pongan los medios adecuados para garantizar que esta estafa no se repetirá jamás, y para que haya reparación de los daños causados.

En el marco de esta campaña se sitúa la denuncia que más de 80 familias han puesto a UCI y Credifimo, y sus bancos padres Santander y CaixaBank, por estafa continuada en la comercialización de activos tóxicos, es decir, la venta de hipotecas basura, cuya ejecución está suponiendo para miles de familias no solo la pérdida de su vivienda y el aumento de la deuda contraída, sino la perdida de los avales presentados por sus familiares como requisitos para acceder a estas hipotecas basura.

En estos casi cinco años, injusticia tras injusticia, la PAH ha tratado de adaptarse a la situación dando una respuesta, ya sea parando desahucios, demostrando quiénes son los culpables, generando alternativas u organizando a los afectados y afectadas para que sean capaces de empoderarse y encontrar una solución a sus problemas. Quizás este último sea uno de los mayores

logros que este movimiento ha conseguido: demostrar que, organizándote, sí se puede luchar contra las injusticias. Tal es así, que hasta los partidos políticos han tenido que adaptar su discurso a estas circunstancias.

Podemos hacer una lectura más o menos positiva de este movimiento: si no ha parado suficientes desahucios, si parte de los desahucios que se paran se acaban ejecutando, etcétera. Sin embargo, es imposible no valorar tanto las redes de solidaridad que este movimiento ha sido capaz de generar en tantos pueblos y ciudades, como la labor de concienciación que ha conseguido hacer frente al problema de los desahucios. Hemos conseguido que hablar de la PAH sea hablar de justicia social.

Carlos Huerga es miembro de la PAH de Madrid.



3. Espacio urbano, poder de las plazas y municipalismo

Poder, estrategia y elecciones ante el ciclo político del Estado español

Brais Fernández e Isabel Serra

En el Estado español vivimos una situación compleja y aparentemente contradictoria, y el modo de expresión de la crisis de régimen por parte de los de abajo ha mutado enormemente. Por una parte, la movilización social vive un reflujo relativo, con excepciones como la resistencia de los trabajadores de Coca-Cola o la de los afectados por la Hepatitis C, simbólicas para mucha gente pero muy sectorializadas en su acción o incapaces de reiniciar un ciclo general de movilización. Pero esa aparente calma en lo social no puede esconder que las energías e impulsos de cambio se han trasladado al plano electoral. En esa esfera se ha concretado la crisis del régimen del 78: las grandes herramientas integradoras, vehículos de los consensos entre clases, el Partido Popular y el PSOE, se muestran incapaces de articular la gobernabilidad en los espacios

de representación tal y como lo venían haciendo hasta ahora. Toda estrategia rupturista pasa por aprovechar los eslabones más débiles del régimen como punto de partida para fortalecer las deficiencias del movimiento popular. La siguiente cita en el campo de disputa electoral son las elecciones municipales y autonómicas; si entendemos que la actual coyuntura es una síntesis de diversas fuerzas y dinámicas en disputa, tenemos que empezar este artículo anotando algunos precedentes que nos parecen fundamentales para la configuración de la actual coyuntura.

Hitos y dinámicas: del 15M al 25M

La potencial crisis de gobernabilidad del régimen del 78 no se entiende sin la profunda crisis estructural del capitalismo global, que se expresa en el Estado español en la crisis económica tras el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria que alimentó el pasado ciclo de crecimiento y las políticas de austeridad. Las consecuencias sociales han sido devastadoras para la mayoría de la población: más desigualdad, precarización de las clases populares y empobrecimiento.

El patrón productivo y financiero del Estado español, profundizado por la arquitectura institucional de la Unión Europea, elimina la posibilidad de una salida de la crisis por parte de un solo país. Sin embargo, paralelamente, la inestabilidad social causa de la crisis política que viven Grecia o el Estado español puede convertirse en el epicentro del terremoto que ponga en jaque no solo el régimen del 78 sino el conjunto de la Unión Europea, frente a los intentos de cierre en una suerte de "refundación del capitalismo" por parte de las elites. En este artículo nos interesa destacar el correlato socio-político de esta crisis en el marco del Estado español, la movilización popular que ha pasado de lo social a proyectarse en lo electoral, haciéndose un hueco entre las otras fuerzas políticas, y las implicaciones que tiene esto para el mapa político previo.

De modo que, si bien la crisis económica es el marco objetivo en el que se enmarca la crisis del régimen, es la respuesta por abajo la que abre la crisis política y las oportunidades de cambio o de recambio. Nos interesa destacar esta idea: la crisis de régimen es un ciclo abierto por el 15M, que saca a la luz todas las desafecciones políticas latentes, les da forma invalidando los viejos consensos entre clases, creando un nuevo aparato simbólico y fabricando la oportunidad de la construcción de nuevos actores políticos como Podemos. Porque el 15M no fue solo una impugnación ante la incapacidad sistémica de garantizar un futuro seguro y estable a amplias capas de la población, sino también contra las "izquierdas realmente existentes" como el PSOE, IU o los sindicatos, que eran los que tradicionalmente habían gestionado las demandas "integrables" de las clases subalternas. No se trata de poner a estos agentes al mismo nivel: es obvio que IU no comparte la misma responsabilidad que el

"... una disputa entre una renovación de elites que no aborde las causas estructurales de la crisis o un punto de ruptura que democratice todos los aspectos de la vida social. Revolución o restauración"

PSOE en la gestión del régimen del 78 (aunque el PCE fuera una pieza fundamental en su constitucionalización) o que sectores de los sindicatos han combatido con coherencia en favor de los intereses de los trabajadores. Lo fundamental en este caso es que fueron percibidos por un sector cada vez más grande de la población como incapaces de responder a sus demandas y de ejercer su función como representantes, ya que habían pasado a aplicar políticas con base en las necesidades de los mercados financieros o a sus propios intereses, precarizando a los propios representa-

dos. De modo que el malestar, si bien tiene efectos políticos, partió de la situación económica. En paralelo, los sectores más movilizados los ven como herramientas que ya no servían para construir una alternativa a lo existente. Surge así un vacío en la esfera de la representación.

Ese vacío destruyó la normalidad y pasividad sobre la que se sostenía la estabilidad del régimen. El caso más extremo de cómo los consensos mutan en disensos lo vemos en el caso de la corrupción. Si bien la corrupción era algo profundamente arraigado en el sistema político español, ese arraigo era también norma, un consenso y por lo tanto una forma de gobierno, no una demanda agregadora de los descontentos. Fue la movilización social la que convirtió lo existente pero invisible en el foco a través del cual el régimen pierde legitimidad, sin olvidar que la transversalidad de la corrupción se fundamenta en una idea muy arraigada que es el punto de partida de todo quehacer político en la actual coyuntura, esto es, que la crisis se soluciona con más democracia, que es la conquista de nuevos mecanismos para el ejercicio del poder político la que nos puede permitir crear otra salida. Idea transversal y por lo tanto una disputa entre una renovación de elites que no aborde las causas estructurales de la crisis o un punto de ruptura que democratice todos los aspectos de la vida social. Revolución o restauración.

Si el 15M es el punto de partida en el cual se hace efectiva la crisis de régimen, las elecciones europeas del 25 de mayo son el hito que concreta la alternativa a esa crisis. Podemos irrumpe ocupando ese espacio no representado, recogiendo sus demandas y sus contradicciones, apareciendo como "la llave para abrir el candado del régimen del 78", como dice Pablo Iglesias, pero sin un proyecto de cierre claro.

La lucha electoral en las formaciones sociales neoliberales

Nos parece importante hacer un apunte sobre el papel específico de las luchas electorales en este periodo. No utilizamos el término "lucha" por casualidad:

queremos recalcar que vemos lo electoral como un frente más, con sus especificidades y su importancia particular, en la lucha por construir una alternativa al capitalismo. Eso significa no limitar y separar la lucha electoral del resto de luchas, ni tener una visión liberal de los procesos electorales, que limitan el ejercicio democrático a las esferas de los espacios parlamentarios y representativos, deteniendo la democracia a las puertas de los centros de producción económica o de los espacios de conflicto que existen en la sociedad civil. Se trata de partir de las legitimidades existentes para erosionarlas. Si bien la izquierda socialdemócrata o eurocomunista tenía una visión de los procesos electorales como parte de una lenta "guerra de posiciones", basada en la acumulación de fuerzas en las estructuras representativas de los aparatos del Estado, nosotros planteamos darle la vuelta a esa dinámica. Proponemos ver los procesos electorales como elementos disruptivos, que sirven para desordenar el estatu quo y, paralelamente a la toma del poder electoral y la apertura de un proceso por arriba, dotar a las clases populares de puntos de apoyo para la acumulación de fuerzas en el terrero de la autoorganización y de la construcción de una institucionalidad alternativa que posibilite la existencia de un gobierno de ruptura. Solo este "contrapoder" puede soportar la contraofensiva por parte de unas elites que, si bien están desgastadas en Grecia o el Estado español, gozan de total bienestar en el conjunto del capitalismo global.

La cuestión del uso de los procesos electorales como "inicios de la ruptura" también tiene una base histórica. El neoliberalismo es, ante todo, una maquinaria ideológica y material de atomización política y social de las clases trabajadoras, a través de la agudización de la competencia intraclasista y de su expulsión de los nichos conquistados en las relaciones estatales. Movimientos que surgen de la necesidad de resistir, como el 15M, la PAH o las Mareas, recomponen parcialmente los lazos sociales destruidos por el neoliberalismo, o por lo menos, palian su destrucción en la esfera social, cotidiana, pero no reconstruyen por sí mismos el proyecto político socialista, aunque sean la base para su reconstrucción. Se hace necesario buscar puntos de incardinación en un plano que dispute el poder político, es decir, en hitos de lucha concretos que vinculen toda la desafección y la resistencia acumulada y dispersa en el plano de lo social.

Con todos sus límites programáticos y de proyecto estratégico, Podemos fue capaz en cierta medida de explorar el desarrollo de estas potencias. Las elecciones europeas del 25M fueron un "golpe" en la estabilidad del tablero político del régimen, no tanto por el resultado obtenido, sino por la sensación de que ganar en el plano electoral es posible, lo cual es en esta coyuntura una precondición necesaria (aunque no suficiente) para iniciar un proceso transformador. Por otra parte, el proceso electoral fue también un proceso de autoorganización popular, concretado en los círculos de Podemos. Es obvio que este desarrollo se ha visto limitado en el periodo posterior, con el giro de

la dirección de Podemos hacia la constitución de una "maquina de guerra electoral" (en palabras de Iñigo Errejón, secretario político del partido), pero esas posibilidades siguen abiertas y Podemos aparece hoy como un actor capaz de vehicularlas, aunque como explicaremos más abajo, creemos que no lo logrará solo.

Ciclo electoral y cambio político: las estrategias de la izquierda

En el seno de la izquierda política se han planteado varias estrategias para el ciclo electoral del próximo periodo, que consta de tres disputas: municipales, autonómicas y elecciones generales, aunque el primer asalto se produjo ya en las elecciones europeas, pese a que muchos actores no eran conscientes de ello, por lo que podemos decir que partimos ya con un escenario condicionado.

La estrategia de Izquierda Unida tiene como objeto fundamentalmente su supervivencia como proyecto político, muy vinculada a sus resultados electorales, que le proporcionan sus principales medios económicos y de intervención política. La irrupción de Podemos ha puesto contra las cuerdas a IU por varias razones. Herederos de la estrategia eurocomunista de "lenta acumulación de fuerzas en los aparatos representativos del Estado" de la que hemos hablado más arriba, esta estrategia tiene un correlato concreto en esta coyuntura. En un contexto donde el régimen es estable a nivel electoral, el voto es más fiel, más estático y por lo tanto, las campañas electorales son un ejercicio de rutina, ya que responden a identidades "estandarizadas" del electorado. El problema al que se enfrenta IU tiene su raíz social en el 15M; a pesar de sus intentos, ha sido incapaz de salir de ese margen "izquierdo" en el que ha sobrevivido durante décadas, tras el fracaso del PCE en la transición para convertirse en el partido hegemónico en la izquierda, al estilo del Partido Comunista de Italia (PCI). Cuando el 15M desordena el tablero político surgido del 78, IU se enfrenta a una dicotomía difícil de resolver: o lanzarse a construir un proyecto político que entronque con el nuevo imaginario colectivo (lo que significaría su conversión en parte de algo más amplio) o conservar su espacio político tradicional. Este análisis no pretende ser una crítica desde una supuesta superioridad moral: Ernest Mandel explicaba que los aparatos políticos o sindicales tienen una psicología especifica que él denominaba "la dialéctica de las conquistas parciales". Esto es, una relación entre el conservadurismo provocado por el miedo a perder lo conquistado (en el caso de IU: un aparato, un electorado, una identidad) y unas determinadas dinámicas sociales que solo te permiten sobrevivir asumiendo cambios bruscos y repentinos. IU se encuentra ahora mismo en esa situación: con su espacio electoral cada vez más menguado, un sector de su dirección apuesta por replegarse; otro, por resistir sin renunciar a su identidad tradicional, convirtiéndola en un valor frente a Podemos; mientras que otros sectores, todavía minoritarios, dan el salto a Podemos. El próximo ciclo electoral puede ser un auténtico infierno para IU, atrapada entre contradicciones irresolubles y condenada de nuevo a ser la pata "izquierda" de otro actor, en ese caso de Podemos. Eso no significa que IU y su capital militante no pueda jugar un papel fundamental en esta época, pero sus ataduras con determinadas políticas (su pacto con el PSOE en Andalucía, por ejemplo) y la escasa voluntad de la dirección de Podemos de contar con la izquierda política para articular la "unidad popular" ponen a IU en una situación extremadamente complicada.

En el caso de las izquierdas independentistas, la situación es dispar y muy determinada por las dinámicas de los procesos soberanistas de cada país. Así, vemos cómo la CUP espera un ascenso fuerte pero no explosivo en sus resultados electorales, que refuerce su identidad dentro del binomio independencia/ anticapitalismo, recogiendo por una parte su capital acumulado en el proceso independentista catalán representando al sector de ese proceso que, apostando por un Estado propio, no está dispuesto a pagar el precio de los recortes sociales que propone el proyecto neoliberal de Artur Mas. Su negativa a confluir con Guanyem en Barcelona revela los límites de la CUP a la hora de apostar por espacios más amplios en donde no sea la fuerza nítidamente hegemónica, así como su voluntad de primar la autoconstrucción de su proyecto sobre la generación de dinámicas sociopolíticas más amplias. Sin embargo, hay que reconocer un elemento enormemente positivo en las CUP: son una de las pocas organizaciones que plantean explícitamente un proceso paralelo entre avance en el terreno de la representación institucional y avance en la implantación militante, logrando una sintonía entre ambos "frentes" que les permite evitar los riesgos de burocratización y autonomización de los representantes consustanciales al "juego en las instituciones de los de arriba".

La estrategia electoral de Bildu parece situarse más en el juego de las alianzas poselectorales. Con un electorado sólidamente consolidado, gestionando municipios y la diputación de Guipuzkoa, su reto parece consistir en mantener un equilibrio entre su alma más posibilista, partidaria de construir un "compromiso histórico" con el PNV y sus sectores más rupturistas, proclives a buscar el *sorpasso* del partido histórico de la burguesía vasca.

En Galiza, el partido tradicional del nacionalismo gallego, el BNG, sufre un lento pero constante declive de su potencia electoral, con una estrategia que oscila entre los guiños al PSOE para evitar un nuevo gobierno del Partido Popular y un sectarismo al estilo KKE griego que les impide dialogar con el resto de la izquierda antineoliberal, lo cual convierte sus campañas electorales en un ejercicio de diferenciación constante. ANOVA, el partido liderado por Xosé Manuel Beiras, se encuentra en una difícil situación. Sin espacio electoral propio, oscilando entre el nuevo ciudadanismo radical y la voluntad de mantener un anclaje nacionalista, su escasa implantación territorial le genera una fuerte dependencia del liderazgo mediático de Beiras. Es posible

"... el proceso electoral fue también un proceso de autoorganización popular, concretado en los círculos de Podemos. Es obvio que este desarrollo se ha visto limitado en el periodo posterior" que ANOVA, uno de los experimentos de partido-movimiento más interesantes que se han dado en el Estado español, acabe condenado a ser una fuerza sin representación institucional: su estrategia electoral unitaria no encuentra interlocutores dispuestos a asumirla, ni en el caso del BNG ni en el de Podemos.

Porque precisamente ese es uno de los retos que le surgen a la izquierda nacionalista. ¿Cómo responder ante el fenómeno Podemos? Si bien es cierto que en la mayoría de los casos no supone una competencia directa con su electorado tradi-

cional, lo que provoca Podemos es la aparición de un "techo", de un límite, en la expansión electoral de estos partidos. Si antes de la aparición de Podemos el "nacionalismo sin Estado" aparecía como un vehículo que potencialmente podía aspirar a representar la desafección de los no-representados, ese espacio ha quedado temporalmente cubierto por este nuevo actor. De esto se deriva una relación compleja y potencialmente conflictiva: a la dirección de Podemos no le interesa la relación con estos partidos porque le resta electorado en España y estos partidos ven con recelo a Podemos porque lo perciben como un freno para la "nacionalización" de los descontentos.

Si hablamos de estrategia electoral, Podemos es uno de los fenómenos más interesantes de las últimas décadas. No nos vamos a detener en los pros y los contras de sus técnicas comunicativas, como el uso del liderazgo mediático, la disputa en los medios de comunicación de masas o el uso de "significantes flotantes" para transmitir una imagen de trasversalidad ideológica que vaya más allá del eje izquierda-derecha. Nos interesa debatir en torno a la estrategia de "toma del poder" que ha planteado la dirección de Podemos, apoyada masivamente por sus bases y cómo materializarla en concreto. La estrategia planteada se fija un objetivo claro: ganar las próximas elecciones generales. De ahí, la dirección de Podemos deriva varios correlatos: que todos los demás procesos electorales se subordinan a las elecciones generales, que toda alianza con el resto de la izquierda, social o política se contrapone a la "unidad popular" y que por lo tanto es un lastre para ganar las elecciones, pues la movilización social asusta a los sectores más moderados del electorado y aleja a Podemos de la centralidad ideológica.

Detrás de esa apuesta se esconde una concepción de la "toma del poder", en nuestra opinión, unilateral. Partimos de la visión de Gramsci que revolucionó el análisis de la estructura de poder político bajo el capitalismo, con su teoría de las articulaciones entre hegemonía, sociedad y Estado. La clase dominante no ejerce el poder simplemente a través del gobierno, que es solo un espaciovértice en los aparatos del Estado, que se compone de múltiples espacios no

electos que ejercen de estructuras "regulacionistas" (limitan hasta dónde puede gobernar un gobierno) en manos de las clases dominantes, como los aparatos judiciales. Todo ello en tensión con los espacios intermedios (entre estatales y de la sociedad civil) como el sistema educativo, que reproducen la hegemonía de la clase dominante. En esa "estructura de gobernabilidad", el gobierno estatal y el parlamento son una pata más, quizás la más visible pero no la más importante: existen otras como los municipios, las comunidades autónomas, las diputaciones, así como múltiples estructuras de la sociedad civil que, en tensión con el Estado, organizan la gobernabilidad de la sociedad, como las asociaciones de vecinos o los sindicatos. Así pues, se hace necesaria una estrategia integrada y multiforme de la toma del poder, y por lo tanto una estrategia electoral que responda a esta perspectiva. No ocupar espacios significa dejarlos en manos del enemigo, como analizó Joan Garcés en su balance de la experiencia del gobierno de Unidad Popular en Chile, mostrando cómo el gobierno de Allende sufrió una oposición que bloqueó a su gobierno transformador desde los aparatos del Estado o de gobierno que no controlaba la izquierda, como municipios o estructuras judiciales, mientras paralelamente la oposición se organizaba desde espacios de la sociedad civil como las asociaciones empresariales o las universidad privadas.

Por eso creemos que la estrategia de toma del poder político que plantea la dirección actual de Podemos es incompleta: creemos que debe existir una dialéctica entre victorias electorales, ocupación de los espacios en la sociedad civil y los aparatos del Estado y generación de una institucionalidad basada en la autoorganización popular que sustituya a través del conflicto a las viejas estructuras, creando otras que surjan directamente del ejercicio democrático desde abajo.

En ese sentido, las elecciones municipales podrían jugar un papel fundamental. En Grecia, determinadas experiencias autogestionarias combinadas con la conquista electoral municipal han conseguido paliar las brutales políticas de la Troika, como por ejemplo, a través de la reactivación de servicios sanitarios abandonados por el Estado central. Esa dinámica también ha regenerado el tejido comunitario griego, prefigurando nuevas formas de organización colectivas, que al fin y al cabo, anticipan una nueva constitución de la sociedad: ni más ni menos, el inicio de un proceso constituyente desde abajo, que podría dotar de un apoyo sólido y activo a los cambios que se implementen desde el gobierno central.

Retos inmediatos: las elecciones municipales

Desde el ciclón Podemos el pasado 25M, diferentes actores políticos que no apostaron desde el primer momento por este proyecto se vieron en la necesidad de resituarse, siendo impulsores de los espacios de confluencia en forma de candidaturas municipales de unidad popular. Si bien este hecho es uno de

los motivos fundamentales por los que se han configurado estos espacios, no podemos reducirlo únicamente a esto. La forma que han tomado (unidad de diferentes fuerzas de izquierda, democracia y apertura a la ciudadanía) tiene sus antecedentes en el 15M.

Estos espacios de confluencia han tenido modos de construirse muy diferentes y sería difícil reducirlos a un único modelo, pero en la mayor parte de los casos se han visto condicionados por las decisiones de Podemos y dependientes de esta organización. Tanto, que se ha invertido la lógica entre lo que fueron las potencialidades de Podemos y las que tienen estos espacios de confluencia: en la fase de creación de círculos, el movimiento real v el empoderamiento popular eran vehiculados por Podemos y los espacios de confluencia volvían a ser espacios reducidos a los activistas y militantes organizados. Concurrir a las elecciones municipales como Podemos no solo le hubiera dado estructura territorial por abajo a Podemos, sino que significaba ver al movimiento popular asaltando las instituciones. Hoy, Podemos se vacía por abajo más allá de los consejos ciudadanos territoriales y la forma organizativa que ha tomado dificulta la pluralidad y pone en cuestión la democracia tal y como parecía ser, mientras que algunas de las candidaturas de unidad popular se vuelven abiertas, democráticas y plurales, con capacidad para generar estructuras de empoderamiento popular, aunque con dificultades para ser actor relevante en la correlación de fuerzas que impone Podemos.

¿Como resolver esta paradoja? Es necesario empezar a romper con la contraposición artificial que desde algunos sectores se ha planteado entre la unidad de la izquierda (social, política, activista) y la unidad popular. La unidad popular tiene que estar estructurada y organizada políticamente para ser democrática y eficaz; el querer excluir a la izquierda militante de esa tarea solo significaría la imposición de un modelo plebiscitario, donde los ciudadanos pasan a ser "una masa" amorfa que solo ratifica o rechaza. Y aclaramos: con unidad de la izquierda no pensamos solo en unidad de las siglas, sino más bien de experiencias, militancias y movimientos sociales.

Estamos convencidos de que podemos convertir estas elecciones en la primera fase de una estrategia de toma del poder integrada, recordando lo que decía Miguel Romero:

ganar en sentido social es la condición de cualquier otra victoria. Y para ello haría falta una mayoría social suficientemente organizada, articulada entre componentes que serán muy diversos, solidaria entre sus diversas demandas y capaz de asumir la calidad de soberanía popular frente a los obstáculos legales y materiales que se interpongan en su camino.

Brais Fernández e **Isabel Serra** forman parte del movimiento Anticapitalistas (forma que Izquierda Anticapitalista adquiere desde su II congreso) y participan en Podemos.



4. Espacio urbano, poder de las plazas y municipalismo

Municipalismo democrático: ¿Cómo se organiza una ciudad?

Guillermo Zapata

Yo me creía muerto pero sé que estoy vivo y que concibo otro lugar (Nacho Vegas: "Ciudad vampira")

1.

Para quienes tuvimos nuestra formación política inicial en la segunda mitad de los años noventa, con el ciclo que va de la insurrección zapatista de 1994 al movimiento global desde Seattle en el 99 hasta Génova en 2001, y posteriormente con las movilizaciones contra la guerra en 2003, el desafío político siempre fue el mismo: construir organizaciones metropolitanas. Ser capaces de construir movimientos a la escala de la ciudad misma porque las personas precarias ya no teníamos fábrica en la que luchar. La ciudad misma era nuestra fábrica y solo desde la ciudad misma podíamos recuperar nuestros derechos.

Pero si te sentabas una tarde de 2003 en las laderas del parque de Aluche a echar un cigarro o tomar una cerveza después de la asamblea de tu colectivo de barrio e imaginabas la forma concreta de dicha organización aquello se volvía muy complicado.

Para empezar, el propio territorio que habitábamos nos era desconocido. Nuestros vecinos y vecinas vivían vidas que nos eran ajenas y que tocábamos siempre desde un lugar que no era el de la política organizada, sino el de la vida misma y en aquellas épocas pre 15M no sabíamos aún que vida y política se entrelazaban y que cuando aparecían de forma separada no estábamos haciendo lo que se suponía que queríamos hacer. Era como si hubiéramos perdido el mapa.

2.

La nueva ola de municipalismo democrático es la mejor y más compleja actualización de dicho viejo anhelo. Evidentemente, aquello y esto no tiene mucho que ver, aunque solo sea porque median 15 años, una crisis económica, otra crisis de régimen político, la aparición de un movimiento de transformación social amplísimo y miles de dispositivos de todo tipo que incluyen artefactos tan sofisticados como la PAH, 15MpaRato o Podemos. Pero sí podemos identificar un problema común de entonces y ahora: se trata de ser capaces de asumir la escala política del desafío, la escala ciudad. ¿Cómo se construye una organización a escala metropolitana en una ciudad como Madrid?

Ganemos Madrid ha puesto ese desafío en el centro de su apuesta política. No se trata entonces de construir una candidatura electoral, sino un movimiento municipal o un espacio de unidad popular.

Sin embargo, la dimensión electoral determina la apuesta en varios aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado condiciona la relación con el tiempo ya que hablamos de una necesidad de organización atravesada por la urgencia de un ciclo electoral muy veloz con una sucesión de citas muy rápidas para definir un nuevo marco institucional. En segundo lugar porque esa posibilidad de intervención en el campo institucional es lo que dota de potencia a la propia iniciativa. Dicho de otra forma, la posibilidad de construir un movimiento municipal está atravesada por ese desafío electoral concreto. Lo que pasa es que no se agota en dicho desafío, pero sí es bueno tener en cuenta que no existen dos cosas diferenciadas (movimiento municipal y candidatura electoral) sino una simbiosis entre esos dos desafíos que ayuda a visibilizar y consolidar la propuesta.

3.

Cuando hablamos de la organización democrática de una ciudad tenemos que plantearnos entonces un programa claro de democratización institucional, de recuperación de la soberanía a escala metropolitana. Eso pasa por alcanzar mayores niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones, lo cual abre un triple desafío.

Por un lado se trata de pensar cómo se compone ese sujeto ciudadano que ejecuta la participación y retoma las instituciones y qué posibilidades materiales de participación tiene. Tenemos que huir aquí de la tendencia habitual del activismo político a la centralidad (la política sucede en el lugar en el que yo estoy) y a la intensidad (la política es más política cuanto más se sostiene en el tiempo) En las asambleas de Ganemos Madrid vemos ya en las propias personas más involucradas en el proceso una tensión entre necesidad y posibilidad. Necesitamos estructuras de participación que se acomoden a la realidad intermitente de nuestras vidas. No hay una continuidad en la posibilidad de ejercer la democracia porque no hay condiciones de vida que nos permitan

liberar tiempo para participar. Las estructuras de democratización deben por tanto ajustarse a la vida real y no al revés (ajustar la vida a las estructuras).

En segundo lugar tenemos que pensar cuál es la dimensión espacial de la participación. Es decir, ¿dónde se participa? Históricamente el espacio de la participación es el territorio físico y es ahí dónde se ha sostenido el desafío de la participación construyendo principalmente el movimiento vecinal. El vecino o la vecina son los sujetos de la participación. A día de hoy esta concepción es demasiado limitada porque los barrios que generaban ese sujeto vecinal ya no son como eran y no existe ese "sentirse del barrio" de la misma forma, porque hay elementos que superan la dimensión estrictamente barrial o distrital e incluso la suma de sus partes (la financiarización de la economía en la ciudad supera cualquier dimensión tradicional de territorio) y porque han aparecido nuevos lugares de socialización y construcción de comunidad que permiten la participación, como es el territorio digital de las redes. No se trata por tanto de elegir un lugar sobre otro, porque a la vez todos los lugares tradicionales de la participación siguen estando (aunque transformados) y el espacio físico -como demostró el 15M- es un territorio fundamental para expresar una nueva política. Tenemos que pensar ahí a partir de una estructura de distintas capas que interaccionan, se cruzan, etcétera.

En tercer lugar hay que medir la responsabilidad que se le otorga a la ciudadanía, la responsabilidad que se le otorga al movimiento organizado (la dimensión más activista) y la dimensión que se le otorga a las dimensión institucional. De nuevo poner el acento en uno de los campos no resuelve el desafío. Si todo pasa por la organización no hay participación democrática y la dimensión institucional es poco operativa. Si todo pasa por la dimensión institucional no hay articulación social ni participación. Si todo pasa por la ciudadanía no hay construcción de infraestructuras de participación ni se resuelven problemas complejos que requieren de saberes institucionales. Se trata de reconocer por tanto las diferentes dimensiones, reconocer sus intereses (a veces incluso contrapuestos) y ensamblarlos en espacios que sean a la vez comunes e independientes.

4.

Hablar de municipalismo hoy no es hablar de la necesidad de que un conjunto de experiencias más o menos dispersas que han densificado en el territorio tengan la necesidad de una expresión institucional que represente su parcialidad o su forma de entender la acción política. Hacer eso, digamos ser la expresión institucional de un área determinada (o de una determinada ideología o de una determinada identidad política) podría tener sentido en un contexto pre 15M. Lo que afrontamos hoy es una dimensión constituyente con una sociedad que demanda nuevos derechos a instituciones. No quiere decir que esas experiencias de organización, esa capacidad de lectura de la realidad o la

"La posibilidad de construir un movimiento municipal está atravesada por ese desafío electoral concreto" experiencia de distintas fuerzas sociales y políticas gestionando políticas públicas o infraestructuras no tengan sentido, tienen todo el sentido, pero lo tienen en la medida en que se colocan al servicio de ese proceso social del que, en todo caso, son una especie de retaguardia paradójica. Una retaguardia que avanza una herramienta porque intuye que en ese camino hay más posibilidad de expresión y despliegue de esa potencia ciudadana.

Hablar de un municipalismo constituyente implica también pensar en un municipalismo que no se puede aislar de su contexto. El municipalismo tradicional parte de una perspectiva que sigue siendo cierta, que es que el municipio es la institución más cercana a la ciudadanía y por tanto el lugar a partir del cual es más sencillo y posible ejercer mayores niveles de control democrático, pero dicho municipalismo no puede afrontar ya los desafíos de un mundo en el que el propio municipio está atravesado por dinámicas globales que lo exceden. Se trata entonces de construir una red de municipios, algún modelo de conexión territorial que permita abordar de forma común problemas comunes y que pueda avanzar por la vía de recuperar competencias y dotación presupuestaria para el desarrollo de los diferentes proyectos políticos.

5.

Uno de los elementos fundamentales de dicho proyecto municipal es asentar en el presente la idea de un mundo que funciona de forma diferente y que, sin embargo, se puede vivir en él. En estos momentos asistimos a un contexto muy determinado en la crisis del régimen político del 78 que ya no nos dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles a pesar de sus problemas, sino que el mundo que tenemos, aún en su horror, es mejor a cualquier otra cosa que pudiera sustituirlo. Es una estrategia de producción de pánico que, por más que muestra enormes debilidades para que la sociedad la sienta como legítima, prefigura el problema principal que vamos a abordar a la salida del ciclo electoral, ¿cómo vamos a vivir en ese mundo nuevo?

La tendencia contraria a la producción de pánico es la producción artificial de ilusión, cambiar la distopía negativa por una de orden positivo. El municipalismo permite precisamente un ejercicio de disutopía, es decir, de hacer tangible y vivible de forma muy concreta cambios en las formas de gobierno y administración pública. Pero dicha lógica requiere de un ejercicio enorme de imaginación institucional. No se trata tan solo (por más que sea un asunto importante) de generar un programa político de cambio y democratización, sino de ser capaces de imaginar las formas concretas y tangibles en las que dicha nueva organización se vive y se nota en el cotidiano de las personas que habitan la ciudad.

Ese ejercicio de imaginación se produce quizás en los márgenes iniciales de la discusión política de las distintas áreas que componen el movimiento municipalista, pero es fundamental, porque no hay cambio real si no podemos tocarlo.

Dicho cambio no tiene por qué sostenerse de forma exclusiva en la institución. Las redes que la propia ciudad ya está constituyendo son un buen ejemplo de que se puede producir mucha realidad, mucho "mundo nuevo" en medio de las ruinas y con un gobierno como el del Partido Popular delante, lo que si puede hacer una candidatura municipal es servir de sostén de dichas iniciativas de todo tipo, asegurar su perdurabilidad, su autonomía y su crecimiento.

6.

Otro de los elementos clave de esta forma de nuevo gobierno democrático son los procesos de confluencia. Hablamos de confluencia en tres sentidos distintos y complementarios. Por un lado una confluencia a escala ciudadana, los procesos de unidad popular. En segundo lugar los mecanismos de cooperación con los espacios organizados de lo social que no participan de las iniciativas municipalistas de forma directa, pero que construyen ciudad y democracia y desarrollan sus propias estrategias y herramientas. En tercer lugar la confluencia entre los diferentes actores políticos que pueden conformar una candidatura.

Los tres procesos encierran una enorme complejidad y tienen temporalidades y mecanismos de funcionamiento distintos, pero responden a una misma realidad. El reconocimiento de que estamos ante un momento de grave emergencia social en la que la intervención institucional se vuelve necesaria acumulando en ella la mayor cantidad de inteligencia y potencia posible. Dicho reconocimiento parte de ser conscientes también de la posibilidad de victoria electoral, que retomando las palabras de un compañero de Ganemos Moratalaz "no es la toma del poder, sino la toma del poder disponible", es decir, el acceso al espacio de poder que permite ampliar el margen de maniobra sin pensar por ello que el poder está hoy en la institución, sino más bien disperso en otros lugares, especialmente en el campo financiero y económico, aunque no exclusivamente, también en lo mediático y otros espacios.

Estamos aquí porque reconocemos un límite y una potencia. El límite es el bloqueo institucional impuesto por el bipartidismo y la estructura política del régimen del 78. La potencia es el deseo de democracia que la sociedad misma no solo ha demandado sino que ha puesto en marcha.

La cuestión es cómo articular las distintas fuerzas sociales, ciudadanas y políticas en un proyecto común. El reconocimiento a la diferencia es fundamental en este sentido, no con la idea de construir consensos planos que nieguen el debate, sino porque como dicen desde Marea Atlántica, el infierno se conquista por asalto, pero el cielo lo construimos en común. No andamos sobrados de fuerzas e inteligencias como para dejar a nadie fuera de esto. Al contrario, tenemos que construir procesos municipales que sean capaces de

reconocer las diferencias y construirla en común partiendo de que su posición sobre el hecho democrático no es antagónica, sino que parte de trayectorias políticas distintas que son todas ellas necesarias como son necesarias la mayoría de las personas que viven en la ciudad para construirla democráticamente.

7.

Todos estos principios, todas estas palabras, todas estas percepciones comunes tienen que componerse a partir de un principio que quizás sea una de las cuestiones que el 15M puso encima de la mesa y que hemos evaluado con menos detenimiento: la pragmática.

El deseo político que nace del 15M no parte de ninguna ilusión de alteridad. No tiene ninguna gana de avanzar hacia otro mundo posible, sino que se plantea el problema concreto de hacerse cargo de este, del único mundo que tenemos. Esa pragmática política nos obliga a traducir cualquier imaginario de democracia municipal en propuestas concretas de organización y en líneas políticas de intervención.

La pragmática política del 15M nos sitúa entonces en un plano de extrema complejidad.

Hablamos de una ciudad que en su dimensión puramente material está atravesada por una deuda municipal enorme, una administración pública controlada desde hace más de 20 años por el mismo partido así como un capital inmobiliario que no ha dudado en recurrir a tramas de corrupción gravísimas para mantenerse en el poder.

Hablamos también de una ciudad con unas diferencias de composición social y cultural enormes, con una segregación espacial tremenda, en la que buena parte de los servicios públicos vinculados a las competencias municipales han sido parcial o totalmente privatizados.

Reconocer que es también la ciudad que acampó en Sol, la de la consulta del agua, la que ha detenido ya cientos de desahucios y dado viviendas a decenas de familias. La ciudad de la marea verde y la marea blanca, etcétera. No es suficiente. Las formas de organización social contra el bipartidismo no son las mismas que las de la organización social para desarrollar otro proyecto de ciudad. La cuestión que se juega ahora es precisamente cómo construir ese encaje, cómo hacer ese paso entre un tiempo y otro sabiendo que a la vez es necesario diseñar herramientas que tengan primero capacidad de victoria y segundo capacidad de organización social y de gobierno. Pero ese primero y segundo es tan solo una secuencia en el tiempo, porque la composición necesaria para resolver ese problema se construye a la vez.

8.

Es el principio del mes de enero de 2015, y en diciembre de este año viviremos en otro país y en otras ciudades y pueblos. Independientemente del resultado

contable del ciclo electoral sabemos que no habremos ganado aún, habremos empezado a ganar, habremos abierto algunas puertas, habremos modificado las condiciones de posibilidad que nos han traído hasta aquí.

Vamos a hacerlo sabiendo que es enormemente complejo y sabiendo también que no es suficiente. Estamos acostumbrados a lanzar proyectos que no son más que la antesala de otros proyectos aún más grandes y complejos. En realidad, en estos meses nos estamos ocupando de abrir las puertas de las instituciones con la suficiente capacidad para que acto seguido se pueda desencadenar una potencia ciudadana. Ese proceso, esa potencia, no será un acelerón casi seguro, quizás al principio sí, quizás tengamos una sensación de velocidad razonable, pero a la que tenemos que resistirnos.

Cuando pase la euforia tendremos trabajo que hacer y no será un trabajo fácil.

Si volvemos la vista atrás hoy tenemos algo muy importante: tenemos el mapa. Y el mapa es el tesoro. Pero sabemos que dicho mapa se quedará desactualizado pronto, precisamente porque nuestra presencia, la presencia de las iniciativas municipales en los distintos ayuntamientos va a generar un nuevo mapa, nuevas señales y una sociedad nueva a la que habrá que escuchar de nuevo.

El tiempo no transcurre de forma ordenada, no hay una secuencia natural de los acontecimientos sino que todo sucede a la vez, con acelerones imprevistos, giros inesperados y terrenos donde parece que no sucede nada. El nuevo municipalismo democrático tiene un carácter que lo diferencia de muchos otros proyectos políticos: su existencia no es efímera. Garantizar su permanencia pasa por alimentarlo, por darle peso, por mantenerlo con vida.

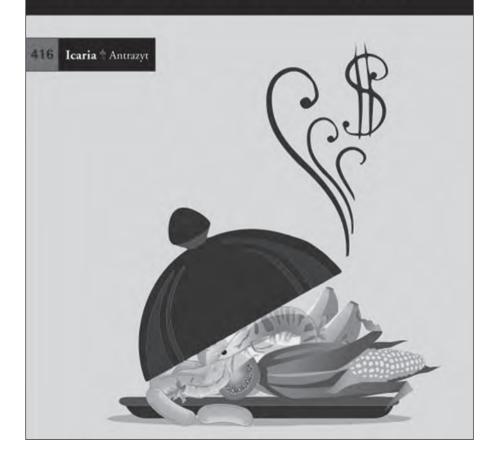
Y adelante con los faroles.

Guillermo Zapata forma parte del equipo de portavoces de Ganemos Madrid.

ESTHER VIVAS ESTEVE

El negocio de la comida

¿Quién controla nuestra alimentación?



4 Plural 2 Plural 2

Ladis, una vida solidaria (1958-2014)

Jaime Pastor

El pasado 31 de enero, en una sala llena de gente que le apreciaba y le quería, se celebró en Madrid un acto de homenaje a Ladislao Martínez, Ladis, fallecido el pasado 5 de diciembre. Las intervenciones que se fueron sucediendo recordaron la enorme cantidad de luchas, campañas, iniciativas, reflexiones y amistades que fue acumulando Ladis a lo largo de su vida y que sería imposible resumir aquí. En el video http://youtu.be/t8fdzux8NZM se puede encontrar la grabación completa de dicho acto.

Por nuestra parte, como ya comentábamos en el número anterior, tendremos siempre en nuestra memoria a ese Ladis con el que desde comienzos de los años 80 del pasado siglo compartimos proyectos, experiencias, ilusiones, pequeñas victorias y duras derrotas. La campaña por la salida de la OTAN fue sin duda una de las primeras pero luego fueron muchas otras, incluidas las que tenían que ver con la necesidad de construir una izquierda roja, verde, violeta e internacionalista. Una preocupación que en el decenio de los 90 nos llevó a promover juntos iniciativas como la Coordinadora por una Izquierda Verde y Alternativa, de corta vida; luego, Espacio Alternativo dentro de Izquierda Unida, y finalmente, Izquierda Anticapitalista. En esta organización, pese a que más de una vez mostró sus discrepancias con algunas de las opciones que se tomaban, siempre se sintió a gusto con el protagonismo de una nueva generación política, si bien insistía en la necesidad de su mayor implicación en la construcción y animación (como él tan bien hacía) de nuevos movimientos sociales, como el 15M o las Mareas. Sus últimos meses de vida fueron especialmente tensos para él, ilusionado por la irrupción de Podemos y a la vez preocupado por cómo podría contribuir a que ese proyecto llegara a cubrir las expectativas de cambio que estaba generando.

Ladis pasó a formar parte del Consejo Asesor de esta revista desde el año 2006 y, siempre desde su mirada crítica, trató de aportar ideas y sugerencias para que atendiéramos mejor los temas que, como el cambio climático, le parecían centrales, u otros más complicados y que él tan bien dominaba, como el relacionado con el sector eléctrico. Lo hacía, además, desde un marcaje sin

contemplaciones a muchas convenciones de la izquierda, tanto la tradicional como la radical, como se puede comprobar en el artículo que dedicó a dialogar con las tesis de Robert Lockhead en el número 91 de esta revista ("La izquierda y el cambio climático", disponible en http://www.vientosur.info/articulosabiertos/vientosur91-plural-ecologia-ladislaomartinez.pdf).

En la web de *VIENTO* **SUR** se puede encontrar una amplia relación de artículos y entrevistas suyas, pero hemos pensado que sería bueno publicar también en este número otros trabajos que reflejaran lo que Ladis quiso aportar a propósito del ecologismo, los movimientos sociales y la izquierda. Hemos optado por los dos que vienen a continuación porque pensamos que, pese al paso del tiempo, siguen teniendo mucha actualidad.



De la lógica social a la lógica ecológica, dos visiones en conflicto/1

Ladislao Martínez

Uno de los motivos de conflicto entre el ecologismo y el resto de la izquierda es el papel que uno y otra atribuyen a las nociones de escasez y abundancia. Para el grueso de la izquierda, uno de los aspectos centrales del conflicto social que se da entre capital y trabajo. En él, la plusvalía es la parte del trabajo que el capitalista usurpa a los trabajadores. Por ello el sistema capitalista implica una escasez para el grueso de la clase obrera que se acabaría el día en que esta se apropiara de las fuerzas de producción. Una frase paradigmática en este sentido es la del exsecretario general del Partido Comunista Francés Georges Marchais, que afirmó que "el capitalismo es un freno para el consumo de masas de los trabajadores". Y no es solo patrimonio de la izquierda comunista en todas las derivaciones de la III Internacional, sino que esta noción aparece (incluso con mayor vigor) en todas las restantes corrientes de base obrerista que, frente al "posibilismo" de la izquierda más moderada, siguen enfatizando que la clase obrera, el grueso de la población en los países industriales, sigue estando desposeída por los empresarios y, por tanto, teniendo derecho a más riqueza por su trabajo, lo que equivale a más derecho a bienes materiales.

Frente a ello el ecologismo viene, desde sus orígenes, considerando que las sociedades industriales son sociedades consumistas. Es decir, que la mayoría de la población consume productos por encima de lo soportable por la biosfera. Nótese que el término consumista solo entraña problemas ambientales severos cuando se refiere a poblaciones amplias. Y no es que los faraones, o los señores feudales, o los primeros capitalistas no fueran consumistas. Pero el consumo, incluso muy desaforado, de unos pocos no pasa de una incidencia ambiental discreta. La pirámide, el castillo o los primeros automóviles eran desde luego manifestaciones impúdicas de poder y riqueza, pero no eran un grave problema ambiental. Por el contrario, es tan difícil encontrar un motivo para negar el derecho de todos los ciudadanos de Madrid (y por supuesto no solo de los ricos) a disfrutar de una casa en la sierra para huir de una ciudad agobiante... como ignorar que, si todos hacen uso de ese "derecho", la sierra "desaparece". Disponer de un jet privado para desplazarse a largas distancias es algo que probablemente no debería permitirse a nadie, pero las emisiones de todos los aviones privados del mundo son una fracción pequeña de las emisiones de gases de efecto invernadero de los automóviles que colapsan casi a diario las carreteras de las grandes ciudades.

^{1/} Reproducido de la revista Libre Pensamiento, n.º 49, 24/9/2005 (N. del E.).

"... la mayoría de la población consume productos por encima de lo soportable por la biosfera"

Esta diferencia entre el ecologismo y el resto de la izquierda se traduce en planteamientos distintos ante un buen número de cuestiones sociales/2, como la conveniencia del desarrollo de ciertas infraestructuras de transporte, del desarrollo de viviendas, sobre todo si llevan una proporción de viviendas sociales, de la subida de precios de

productos como la gasolina, la electricidad o el agua. En honor a la justicia hay que decir que es casi imposible ver a la izquierda libertaria secundar las típicas movilizaciones de "autovía por"... (Cuenca, Soria, Teruel), o en la petición de trasvases para diversas zonas de levante, o pidiendo que una ciudad sea sede olímpica o que sea sede de una expo o..., pero desde luego no tiene la misma respuesta que el ecologismo ante sucesos como las subidas o bajadas/3 que se registran en el precio de la electricidad y que, con matices, suelen provocar reacciones contrarias. Creo que esta singularidad en el movimiento libertario se debe a la conjugación de dos factores: de un lado, en él hay mayor peso de las ideas ecologistas que en el resto de la izquierda y, de otro, que lo que sí funciona sin fisuras es la alergia del mundo libertario a mezclarse con sectores de la derecha que tanta presencia tienen en ese tipo de reivindicaciones abiertamente antiecológicas.

Ciencias sociales y ciencias naturales

A su polémica con el resto de la izquierda el ecologismo acude pertrechado de herramientas difícilmente criticables, precisamente porque poco tienen que ver con las categorías siempre discutibles (aunque puedan ser muy razonables) de las ciencias sociales y mucho con el indiscutible aparataje de las ciencias naturales. Para probar la insostenibilidad de las pautas de consumo energético de los países occidentales el ecologismo recurrirá a las emisiones medias per cápita de gases de efecto invernadero y a la distribución en torno a este valor medio de las emisiones para el conjunto de la población. El resultado será que si no hay presentación truculenta de los datos y si no fallan las leyes de la

^{2/} No nos referimos en este caso al tradicional conflicto que enfrenta al ecologismo con los sindicatos cuando se plantea el cierre de instalaciones contaminantes en el que está clara la pugna de legitimidades: aunque pueda entenderse la inconveniencia de una cierta actividad, están en juego unos puestos de trabajo y el sindicato está obligado a defenderlos. No debe darse por supuesto que el conflicto solo aparece si el sindicato no es suficientemente radical porque sencillamente no es así. ¿Qué ocurriría si hubiera una campaña activa por el cierre, digamos, de la central nuclear de Cofrentes en la que CGT tiene una importante presencia sindical? ¿Aceptaría la sección sindical sin cuestionarla la postura mayoritariamente antinuclear del sindicato?

3/ Muy sintomáticamente hay que resaltar que, aunque las tarifas eléctricas en este país bajaron ostensiblemente entre 1996-2002 la reacción entre el grueso de la izquierda, ahora también incluida la libertaria, oscilaba entre negar su existencia (entre los menos informados) o considerarla insuficiente. La posición de Ecologistas en Acción era que, puesto que había una reducción de costes, había que producir una reducción de ingresos similar de las compañías y crear con esa diferencia unos impuestos ambientales a invertir con gestión pública para promocionar el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.

física, las conclusiones serán absolutamente inapelables/4. Si se pretende una impugnación más radical de las pautas de consumo de las mismas sociedades se recurrirá a presentar la "huella ecológica"/5 y entonces se probará (con similares consideraciones que en el ejemplo anterior) que, para que todo el mundo consumiera recursos como los países industriales, habría que encontrar el mecanismo de hacer aumentar la Tierra entre dos y nueve veces, según el país que tomemos como referencia, para conseguirlo. Llegado este punto de la discusión, el/la ecologista plantearía que solo cabe hablar de derechos cuando estos son universalizables (yo puedo afirmar que tengo derecho a una cosa si todo el mundo puede reclamar la misma cosa y dicha reclamación puede ser atendida) y habría probado que la mayoría de la población de los países industriales no "tiene derecho" a los niveles de consumo actuales, y mucho menos a sus aspiraciones de incrementarlos.

Podría objetarse a este pretendido éxito dialéctico del ecologismo que no ha tenido en cuenta el factor tecnológico. Sin abandonar el ejemplo de las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero puede señalarse que tienen una amplia posibilidad de variación entre distintos países, según que para producir calor o electricidad se emplee carbón o gas natural. Y también de la eficiencia que se consiga en las transformaciones energéticas: así, una central de generación de electricidad de ciclo combinado tiene un rendimiento que supera en más del 50% a una central de turbina de vapor. Y podría seguirse añadiendo la posibilidad de emplear energías renovables (que no emiten gases de efecto invernadero/6), así como del empleo de la energía nuclear, aunque resulte una bicha innombrable para el ecologismo. Por servirnos de un ejemplo concreto, en el Estado español se usa bastante energía nuclear, tiene un fuerte potencial hidroeléctrico aprovechado y en los últimos años ha crecido mucho la energía eólica, mientras que en Italia no hay centrales nucleares en funcionamiento (se cerraron tras el accidente de Chernobil) y producen mucha menos electricidad renovable que nuestro país. Como consecuencia de ello sus emisiones

^{4/} Quizá no sobra precisar que soy de las personas de izquierda que creen que estamos legitimados para discutir y combatir todas o casi todas las leyes sociales, pero las leyes de las ciencias naturales y muy especialmente las de la física rigen para cualquier tipo de sociedad. Tras la revolución el sol seguirá saliendo por el este. Y si hay cambio climático hará más calor... aunque hayan cambiado las relaciones sociales de producción, haya desaparecido la desigualdad de la distribución de la riqueza y las discriminaciones por razón de género.

^{5/} La huella expresa el territorio necesario para sostener una determinada cesta de consumo. En la actualidad cada persona podría disponer de 1,9 hectáreas de superficie, pero la huella ecológica mundial es de 2,3 hectáreas. Esto quiere decir que ya superamos la capacidad de carga de la biosfera y que estamos usando recursos de generaciones venideras. El aumento de población aumenta las dificultades porque la Tierra no crece y por tanto la superficie disponible disminuye. Por países, la huella ecológica de un ciudadano medio en EE UU es de 9,7 hectáreas, en Europa oscila entre 3,5 y 7,6 (en España es 4,7) y en países pobres y muy poblados como China o India se sitúa entre 0,7 y 1,8 hectáreas.

^{6/} El aprovechamiento de la biomasa (leña, paja, biocarburantes, purines de ganadería...) sí emite en la combustión dióxido de carbono pero previamente este ha sido fijado para la producción de la materia orgánica, por lo que el balance neto de emisión suele considerarse igual a cero.

de dióxido de carbono por kilovatio-hora (kWh) de electricidad son significativamente mayores que las nuestras. La objeción es buena pero muestra con claridad sus propios límites: para no producir emisiones de carbono hay que usar otras tecnologías que también tienen su impacto, mucho menor en el caso de las energías renovables e inaceptable en el caso de la nuclear. Si en lugar de producción de calor o electricidad hablamos del transporte, que crece a gran velocidad, la reducción de emisiones solo puede venir de la mano de la eficiencia (transporte público, coches menores, conducción con mínimo consumo...) porque, aunque los biocarburantes pueden sustituir a una cierta fracción de productos petrolíferos, no existe ninguna alternativa efectiva al petróleo en el transporte a corto o medio plazo. No es imposible que en unos 20 años el grueso del transporte sea a partir de motores eléctricos o empleando hidrógeno como combustible, pero además de que no es algo en modo alguno sencillo, remite a los problemas ambientales de producir electricidad o hidrógeno.

Huella ecológica y tecnología

Si, como se ha visto, no es fácil esquivar la crítica ecologista de las emisiones per cápita, mucho más difícil aún es hacerlo en relación con la huella ecológica. Para conseguir reducir la huella ecológica a la mitad (y prácticamente todos los países industriales deberían hacerlo en proporciones mucho mayores para conseguir condiciones de sostenibilidad en un mundo no excesivamente desigual) debería haber, simultáneamente y sin ninguna contradicción, un gran número de mejoras tecnológicas en cadena en los más diversos campos (conservación de la diversidad, eficiencia en el uso de materiales, agronomía, tratamiento de residuos, producción limpia...) que apuntaran hacia la sostenibilidad. Algo totalmente imposible en sociedades que se rigieran por los principios de la igualdad y la solidaridad.

Debo señalar que si he recurrido a la objeción por no considerar el factor tecnológico en el pensamiento ecologista, ha sido con objetivos meramente dialécticos, para proceder a señalar que justo lo contrario es lo cierto. Acusar al ecologismo de descuidar la reflexión sobre las posibilidades de cambio que ofrece la tecnología es como acusar al santo Job de impaciente. A lo largo de toda su breve historia, uno de los puntos fuertes del pensamiento ecologista ha sido su continua preocupación por los límites y oportunidades que conllevaba el cambio tecnológico.

Por supuesto que el análisis ecologista está bastante alejado de los sermones que desde los poderes políticos y económicos se lanzan sobre la sociedad. En primer lugar, se tiene muy claro que, aunque las pautas de consumo del grueso de las sociedades industriales sea insostenible, hay comportamientos más insostenibles que otros. Volviendo a traer a colación el ejemplo de los jets privados y los automóviles, es evidente que las emisiones de los primeros son, por persona y kilómetro recorrido, mucho mayores que las segundas. Y, por

tanto, si hay que modificar comportamientos, toca antes al magnate renunciar a "su derecho" al avión que al trabajador/a a su utilitario.

En relación con lo anterior, también el ecologismo tiene muy claro que, no solo por nivel de consumo sino por posibilidad de decisión, la responsabilidad es muy desigual. Por ejemplo, para atender sus necesidades de iluminación un/a ecologista urbano que viva en un bloque de viviendas, deberá hacer uso de la red eléctrica existente y, con ello, inevitablemente, recibirá electricidad de una central nuclear contra la que tal vez se manifestó el domingo anterior. Su responsabilidad es bien distinta de la del engominado ejecutivo de la compañía eléctrica que está orgulloso de la decisión de sus predecesores en la eléctrica de construir nucleares y pugna denodadamente por que vuelvan los buenos viejos tiempos en los que se construían estas centrales. Del mismo modo conviene despojar de cháchara la pretendida "soberanía del consumidor" en las sociedades de mercado. Para ello sirva como ejemplo, entre los millones posibles, que una persona consciente de que la mayor parte de los envases tienen un impacto ambiental desmesurado será incapaz de conseguir leche en botella de vidrio retornable, aunque para conseguirla esté dispuesto a andar decenas de kilómetros y a pagar hasta el triple de lo que cuesta la leche en envase de brick en el supermercado. Los modelos de la economía dominante se alejan bastante de la realidad en demasiados casos significativos.

Responsabilidades

Si hubiera que construir una escala de responsabilidades en las sociedades opulentas por la destrucción del medio, aparecerían en primer término los poderes económicos, que inducen comportamientos lesivos para el medio y que intentan crear situaciones de dependencia en amplios sectores para beneficiarse en todos los casos. Seguidos muy de cerca por los poderes mediáticos, que crean una imagen de que esto se debe al orden natural de las cosas y que resulta ingenuo y arriesgado intentar cambiarlo, y los responsables políticos que mayoritariamente saben, callan, colaboran en este estado de cosas. Tampoco es pequeña la responsabilidad de sectores importantes de las clases altas, que exigen vehementes sus "derechos" al consumo inmoderado, son propagandistas entusiastas de las bondades de la sociedad de consumo y se ofrecen gustosos para lucir todos los bienes "posicionales" (chalet con césped bien verde, coche 4x4 para andar por la ciudad, móviles con la imagen de Aznar en cuatro dimensiones...) como muestra de vida feliz e imitable. Finalmente está el grueso de la sociedad, a la que cabe definir con la frase de Sartre: "mitad cómplice, mitad víctima... como casi todo el mundo". Víctimas porque sufren las enfermedades provocadas por el aire irrespirable de muchas ciudades, soportan niveles tremendos de ruidos, gastan un tiempo importante (y lo que es peor, en muchos casos creciente) en realizar los desplazamientos usuales, pierden bienes en riadas e inundaciones, llegan a sufrir restricciones de agua mientras

se riegan céspedes o campos de golf en zonas casi desérticas... Cómplices porque emplean el automóvil para recorrer distancias mínimas, desprecian redes de transporte público muy eficaces, emplean sistemas de calefacción eléctricos, encuentran tedioso separar la basura, piden que los productos vengan envueltos en miles de cosas inútiles y muy contaminantes por una obsesión casi enfermiza con la higiene, reivindican con vehemencia (¡que ojalá emplearan en la reclamación al jefe!) su inexistente derecho a viajar cada vez más y más lejos....

La izquierda no debería cerrar los ojos ante una realidad que se parece poco a los tópicos de la escasez de bienes de los/as trabajadores. Los ejemplos de que el nivel de consumo de muchos bienes materiales es alto en la inmensa mayoría de la sociedad, son muchísimos. Sin salir del campo de la energía, el consumo de electricidad medio de las familias españolas era de 3.300 kWh. Según nuestras estimaciones, una familia de tres miembros satisfaría todas las necesidades de servicios energéticos y dispondría de la posibilidad de satisfacer varios deseos razonables con un consumo anual de unos 1700/1800 kWh. Más del 80% de las familias superan esa cifra. O recurriendo a un ejemplo (más gráfico aunque menos concluyente) para quienes tienen intrínseca desconfianza por las cifras. Soy profesor de un instituto de Vallecas desde hace 12 años. En ellos he hecho encuestas a cientos de alumnos (de procedencia abrumadoramente obrera) sobre los equipamientos de sus viviendas. El número medio de televisiones por familia es de ¡tres!

Conclusión

Daría por bien empleadas estas notas si quedara claro que el ecologismo viene a derrumbar muchas falsas ideas del discurso de la izquierda. Con su derrumbe caen también muchos errores que se cometerían si en un hipotético proceso de transformación social hacia un mundo más igualitario no tuviera en cuenta los límites ambientales. Pero el ecologismo hace también mucho más complejas las relaciones con amplios sectores sociales en los países industrializados. Hacer una revolución bajo el programa máximo de "de nada en demasía" puede no resultar especialmente atractivo para los sectores efectivamente marginados de la sociedad e incómodo para quienes consumen más de lo razonable. O por pensar en cosas más sencillas y posibles, incluso en manifestaciones de fuerte contenido ecologista (contra el Plan Hidrológico Nacional, por el Prestige, contra centrales térmicas de gas en ciclo combinado...) sería impensable ver una pancarta que pidiera consumir menos. Y sin embargo pocas cosas reflejan mejor que dicha expresión el mensaje esencial del ecologismo a las sociedades opulentas.

^{7/} Esta es una frase famosa de Manuel Sacristán que en un lucidísimo artículo de finales de los 70 esbozaba la posible síntesis entre la izquierda clásica y el ecologismo entonfes incipiente. Y señalaba sus dificultades.

Por un ecologismo de la razón/1

Ladislao Martínez

El riesgo de invitar a discutir sobre un tema a diversos autores —además bastante próximos— es que con frecuencia se acaban repitiendo las mismas ideas expuestas con distintas palabras. Tengo, por ejemplo, un acuerdo básico con el texto con el que Joaquim Sempere "nos provoca". Se me ocurre entonces que mi aportación más interesante al debate debe ser alguna reflexión suelta sobre alguna característica poco desarrollada en el citado artículo del ecologismo en los países ricos, complementada con comentarios sobre los logros y perspectivas del ecologismo no político partidista del Estado español.

Coincido con Joaquim en que el ecologismo atravesó una primera fase "utópica" que no resistió el paso del tiempo/2. El ecologismo hoy realmente existente en los países industrializados tiene muchos rasgos de "utopía negativa", que existe repitiendo lo que casi nadie quiere oír, porque el paso del tiempo prueba que muchas veces es cierto. Coincido también con Joaquim en que entraña una gran dificultad recoger adhesiones mayoritarias cuando el programa político a defender no puede ser otro que el de "nada en demasía". Máxime cuando de la "demasía" se deriva la comodidad de sectores muy amplios, en muchas ocasiones mayoritarios de la sociedad.

Como sostengo que no puede hablarse de derechos más que cuando las pretensiones de un grupo social son universalizables/3, la totalidad del mensaje ecologista solo puede desazonar a la mayoría de la población... E incomodar al grueso de la izquierda que en su corriente socialdemócrata vive demasiado apegada al modelo económico en vigor y en la mayoría de los restos comunistas existentes prefiere cultivar el mito de una clase obrera mayoritariamente despojada de bienes materiales, a los que tiene legítimo derecho, por el capitalismo/4.

Uno puede por tanto enfadarse por la escasa aceptación que tienen algunas muy razonadas propuestas programáticas ecologistas, pero sería ingenuo sorprenderse

^{1/} Artículo originalmente publicado en la revista Mientras tanto, n.º 100, otoño de 2006 (N del A.)

^{2/} Al menos el español. Creo que ese rasgo no es común al ecologismo de todos los países occidentales. En bastantes países la "corriente principal" del ecologismo no pasó por esta fase "utópica".

^{3/} Y por ejemplo al menos con los actuales niveles tecnológicos no son universalizables muchos deseos que son considerados necesidades (también coincido con la sugerencia que hace Joaquim en su texto al respecto) por la práctica totalidad de la población: no tenemos derecho a recorrer las distancias medias anuales que se recorren en los países como España, ni al consumo de electricidad o de energía primaria per cápita actual, ni a la ingesta de proteínas animales presentes en una dieta media, ni a disponer de una segunda residencia para aliviar la tensión de las ciudades, ni a disponer de automóvil, ni... Algunas de ellas pueden ser demandas atendibles, pero no constituyen un derecho.

^{4/} He escrito algunas notas sobre el conflicto entre ecologismo y el resto de las izquierdas en *Libre Pensamiento* n.º 49. Para quienes aspiramos a la síntesis del eceologismo y la izquierda no puede resultar más que preocupante el alejamiento creciente que se detecta en los últimos años entre las opciones políticias verdes y comunistas. Y el fracaso electoral de las escasísimas opciones que pretenden la síntesis.

"... no puede hablarse de derechos más que cuando las pretensiones de un grupo social son universalizables" de que esto ocurra. En cualquier caso considero que las propuestas programáticas, sobre todo lo que se conoce como programas de alcance intermedio/5, tienen una importancia esencial, no tanto para ilusionar, como para minimizar los miedos que provoca abandonar situaciones de privilegio/6.

En relación con lo anterior cabe señalar la importancia que las catástrofes han tenido en el avan-

ce de la puesta en práctica social de algunas ideas ecologistas. No estoy diciendo con ello que el ecologismo haya avanzado solamente en sus planteamientos cuando se han producido catástrofes/7, pero sí que en muchas situaciones en que la correlación de fuerzas no estaba clara, ciertos sucesos catastróficos han sacudido las conciencias de las sociedades satisfechas hasta el punto de provocar saltos importantes. Tampoco esto es en mi opinión muy sorprendente porque el miedo es otro atributo de tales sociedades/8. Por citar algunos ejemplos claros: el parón nuclear. Aunque ya existían signos de que a finales de los 70 el optimismo sobre el uso pacífico de la energía nuclear empezaba a declinar, por efecto combinado del fracaso económico de dicha tecnología y la vigorosa respuesta social, fue el accidente de Harrisburg (EE UU, 1979) el que provocó su brusco parón, y el de Chernobil (Ucrania, 1986) su casi total paralización.

Otro ejemplo un tanto paradójico fue el parón que sufrió la comercialización de productos transgénicos (contra los que la resistencia social era apreciable, pero no masiva) por efecto de sucesos como las vacas locas y los pollos con dioxinas. El miedo se apoderó de buena parte de los ciudadanos europeos y existió una moratoria *de facto* sobre dichos productos durante varios años. No se trataba del mismo fenómeno pero la lectura que se hizo por parte de la sociedad es que "con las cosas de comer no se juega".

Toca señalar, no obstante, para huir del pesimismo que destilan estas notas, que la opción "clásica" de movilización-pedagogía social-acumulación de

^{5/} Reconozco mi deuda total en este campo con Jorge Riechmann.

^{6/} Me refiero a privilegios reales que ya se disfrutan o que se aspiran a disfrutar en un futuro no muy lejano. Sorprende, por citar solo un ejemplo, la virulencia con que rechazan las limitaciones al uso del automóvil muchas personas que aún no tienen coche, pero aspiran a tenerlo en un futuro.

^{7/} Ha habido otro mecanismo de consecución de objetivos ecologistas, como por ejemplo el proceso de transmisión, podríamos decir capilar, de logros entre países de similares condiciones socioeconómicas. Este fenómeno se ha producido mucho en el interior de la UE, donde los logros conseguidos en los países en que las "fuerzas ecologistas" eran mayores se han transferido muchas veces a través de legislaciones comunes. Este hecho se ha producido mucho en nuestro país en asuntos tales como el reciclado, la mejora de la calidad del aire y del suelo...

^{8/} Otra manifestación, en este caso terrible y terrorífica del miedo, es el aumento de la xenofobia. Sorprende ver la angustia con que viven la entrada de inmigrantes personas que no tienen ningún contacto con ellos. Y el miedo que provocan quienes objetivamente solo pueden ser considerados víctimas. Las llegadas de pateras de este verano a Canarias son una prueba de lo dicho. El giro perceptible de la administración Zapatero, que hasta ese momento había intentado mantener un discurso bastante integrador, guarda relación con el miedo de amplios sectores de la población y el cálculo electoral.

fuerzas también ha funcionado para lograr objetivos. Sin salir de nuestro país ni de este siglo, vale la pena recordar las movilizaciones sociales contra el trasvase del Ebro que revirtieron (cierto es que tras un cambio político al que sin duda contribuyeron) una situación que parecía atada y bien atada.

Una paradoja del ecologismo es que las causas que provocan su necesidad a partir de un determinado grado dificultan también la posibilidad de las alternativas que postula. En realidad esto no es una singularidad absoluta del ecologismo, pero sí que en él se presenta de un modo más acusado/9. Este asunto tiene que ver con las nociones de límite e irreversibilidad, tan útiles para el ecologismo. Un ejemplo para hacer más claro lo que quiere decirse puede extraerse de nuestro conocimiento actual sobre el cambio climático. Cuanto más se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero más evidente será la necesidad de considerar las propuestas ecologistas/10, pero al mismo tiempo dificulta su implantación "ordenada" porque agudiza sobremanera los problemas sociales y crea nuevas demandas que hacen más difícil reducir el uso de recursos no renovables. Cuando se superan límites absolutos ni siquiera existe la posibilidad de intentar dar marcha atrás: si se destruyen los bosques tropicales regenerarlo puede requerir un tiempo muy largo.

El avance combinado de diversos problemas ambientales hace que aparezcan conflictos entre distintos objetivos ecologistas legítimos. Por ejemplo en un país como España, en el que se presentan severas afecciones por el cambio climático (y en donde las emisiones han tenido un efecto desbocado), pero que al tiempo sufre un severo proceso de desertificación, el empleo de biocarburantes se convierte en un asunto polémico/11. En tal tesitura, para el ecologismo la tarea se vuelve extremadamente compleja. En mi opinión es poco lo que puede aportar el "ecologismo de la

^{9/} Los problemas de pobreza tienen un cierto parecido con los ambientales. Su existencia justifica la existencia de la izquierda, pero la falta de recursos a ella asociada dificulta la posibilidad de una salida de izquierdas. Aunque en este caso existe el margen de la riqueza injustamente repartida que puede reasignarse a favor de los necesitados. Este margen no existe muchas veces en los poblemas ambientales.

^{10/} Caben también intentos de huida hacia el abismo como es la posibilidad de incrementar el uso de la energía nuclear, pero el modelo de más tecnología dura para prevenir los problemas de la tecnología dura tiene las alas cortas. El asunto merece más reflexión, pero es apartarse del objetivo de estas notas.

^{11/} Esta es la discusión que en la actualidad mantenemos Óscar Carpintero y yo mismo sobre el uso de los biocarburantes. Él plantea una objeción frontal basándose en los daños reales y en los riesgos potenciales de su implantación en nuestro país. Yo juzgo que, sin ser la panacea de las alternativas al transporte, son un alivio a los problemas urgentísimos del cambio climático, que en mi opinión entienden mejor Blair y Gore que la mayoría del ecologismo ibérico. Escribo estas notas cuando todavía resuenan los ecos de prensa de las intervenciones de ambos mandatarios. Para Óscar toca aplicar el principio de precaución (que los dos invocamos) para no causar los daños hoy no conocidos de su introducción; según yo toca aplicarlo al cambio climático para no alcanzar la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero equivalente a un incremento de temperatura de 2°C (momento a partir del cual pueden aparecer las "sorpresas climáticas" de acuerdo con los mejores conocimientos científicos disponibles). Teniendo en cuenta la concentración actual y el ritmo de crecimiento que se está produciendo, esto ocurriría antes de 10 años. Él es muy crítico con las políticas gubernamentales a este respecto (ver su excelente artículo de El Ecologista n.º 49, de otoño 2006). Yo creo que con las debidas críticas (no a la importación de materia prima desde el primer mundo, no a los transgénicos, atención al recurso agua...) el ecologismo debe decir "sí" a dichos productos arriesgando una cifra indicativa de alternativa.

sensibilidad"/12 (por lo demás absolutamente legítimo) que difícilmente jerarquiza problemas, no acostumbra a ver adecuadamente sus complejidades y propende a soluciones escapistas. Más opciones tiene el "ecologismo de la razón" que debe reforzar sus alianzas con la ciencia (convertida paradójicamente en "razón crítica") para buscar, en tanto sea posible, el óptimo ambiental en cada situación. Creo que óptimo ambiental no puede confundirse en los tiempos actuales con el óptimo de cada uno de los problemas ambientales señalados, sino que coincide más bien con la resultante de lo menos malo de una evaluación multicriterio. Existen dos riesgos fatales para dicha evaluación: ignorar algunos de los problemas esenciales y no saber jerarquizarlos convenientemente/13.

Dos comentarios finales en relación con algunos rasgos del ecologismo del Estado español. El primero es el hecho bastante singular de que no existe una organización política de referencia/14, lo que ha obligado al ecologismo social y a las ONG ambientales a tener que jugar en varios campos. Tal y como yo lo entiendo, al ecologismo social no partidista le corresponde arriesgar más, conocer con suficiente rigor y precisión los viejos y nuevos problemas ambientales para orientar su actuación, e iniciar su andadura sin esperar a obtener un importante respaldo social. Si se acierta el paso del tiempo provoca un reconocimiento a posteriori que compensa sobradamente la travesía en el desierto. Hay que resaltar que los grupos sociales solo necesitan contar con el respaldo de sus propios activistas sin sufrir la tensión de contar votos en las confrontaciones electorales, que en las sociedades de la abundancia suelen castigar severamente las apuestas arriesgadas. Además, para hacer creíble el catálogo de "malas noticias" del que es portador suelen ser necesarias pruebas porque el escepticismo es un buen y fiel guardián de la pasividad de los satisfechos.

Y decía que el ecologismo social y las ONG ambientales han tenido que jugar en varios campos porque a esta tarea de abrir brecha/15 han tenido que unir

^{12/} Utilizo este término para referirme a aquellas personas que se sienten ecologistas pese a no conocer en profundidad buena parte de las amenazas ambientales. Pero que perciben con gran intensidad daños al medio ambiente en alguna de sus manifestaciones y ello es motivo suficiente para elegir campo.

¹³/ Existe, claro está, el riesgo individual de quienes se reclaman de este ecologismo y acompañan un método complejo con lagunas importantes. Las posibilidades de hacer el ridículo por pretenciosidad son muy altas.

^{14/} En nuestro país, los verdes solo han obtenido representación en CC AA presentando listas en solitario en Baleares. En distintos periodos ha habido también diputados o senadores estatales pero en listas conjuntas con otras formaciones (PSOE e IU) y eurodiputados en la misma situación. Aunque el asunto es seguro que resultará polémico, en mi opinión los partidos verdes autónomos son (tras ya muchos intentos) una experiencia poco relevante; ICV en Cataluña es la experiencia más semejante a la de los verdes europeos, mientras que los intentos de fuerzas nacionalistas (BNG, Chunta, Aralar, Batasuna...) por ocupar el espacio verde sin renunciar a su perfil nacionalista ha proporcionado magros resultados y me falta objetividad (por mi pasada implicación personal en el tema), pero diría que ha sido un fiasco práctico la apuesta roja, verde y violeta de IU. En algunos países europeos (como Portugal) la situación es bastante similar a la española.

^{15/} Yo diría que además los colectivos de la ecología social deben impulsar movilizaciones, servir de memoria histórica de las luchas, educar, ofrecer algunos (pocos) servicios ambientales que sirvan de pequeños laboratorios sociales de innovaciones o de estrategias de resistencia...Por el contrario, los partidos políticos de cierto tamaño tienen una enorme dificultad para incorporar en su práctica reivindicaciones que son necesarias, pero que necesitan cierto tiempo para alcanzar un mínimo respaldo social.

la de "recoger manzanas" o, en términos menos coloquiales, afianzar logros e intentar hacer irreversibles ciertas situaciones/16. Una y otra tarea tienen cierto grado de contradicción, lo que ha llevado al ecologismo de este país no solo a detraer fuerzas de su objetivo fundamental, sino a dedicar excesivo tiempo al trabajo de presión institucional y a ofrecer contrapartidas en los procesos de negociación que significan de facto hipotecas de cara a las nuevas luchas socioambientales. Aunque ha habido quien ha sabido capear aceptablemente esta tensión, el grueso del ecologismo ha sufrido una fuerte tensión hasta la institucionalización que ha dejado huellas.

El último comentario tiene que ver con la política de alianzas de que debe dotarse el ecologismo social de este país. En mi opinión, desde una identidad fuerte, el ecologismo debe ser capaz de establecer alianzas diversas con sectores sociales muy distintos para conseguir logros concretos. El aporte del ecologismo a esas dinámicas debe ser su conocimiento de los temas abordados y de los mecanismos de participación social. Aunque un objetivo a alcanzar es, sin lugar a dudas, un mayor nivel de conciencia de los problemas ambientales y de sus posibles soluciones, esta condición no puede ser un requisito previo. En distintas luchas ambientales los sectores sociales participantes son distintos/17. El reto del ecologismo es saber dirigirse a ellos, acompañarlos y socializar sus conocimientos. Al menos en los tiempos que corren en este país, resulta ridículo prentender que las luchas socioambientales de más interés deban tener como principal protagonista al grupo ecologista. Antes al contrario, debe contar con una pluralidad de agentes sociales, unidos entre sí exclusivamente por un programa de mínimos (que puede ampliarse y es conveniente que así sea) en el que todo el mundo se reconozca.

La otra tarea es asegurar la complementariedad y la coherencia de las luchas en que participa para conseguir avances significativos.

Ladislao Martínez ha sido un veterano ecologista social y político, cofundador de Ecologistas en Acción y miembro del Consejo Asesor de *VIENTO* SUR.

^{16/} Por citar solo un ejemplo, y sin que esto signifique una crítica a la totalidad, fue especialmente penosa la abstención de Greenpeace a la estrategia de prevención del cambio climático que presentó el último gobierno de Aznar. Votamos en contra los sindicatos, Adena y Ecologistas en Acción, representantes de ayuntamientos y CC AA gobernadas por el PSOE. Aparte de tratarse de un fallo de apreciación, prueba la tensión que existe por intentar alcanzar algo, sobre todos en las condiciones más difíciles cuando se tiene constancia de la gravedad de los problemas. Los ejemplos podrían alargarse hasta la extenuación.

^{17/} No puedo dejar de comentar un fenómeno que me ha resultado sorprendente. En los últimos seis años vengo participando en movilizaciones contra la instalación de centrales de gas en ciclo combinado en el sureste de Madrid (la zona más pobre). Existe una coordinadora de colectivos que se opone cuya composición solo depara algunas sorpresas: hay agricultores afectados, funcionarios —más libres para manifetsar su rechazo en zonas con una economía con fuertes rasgos endogámicos—, artesanos, autónomos... y una pléyade de jubilados y prejubilados que han retornado a los pueblos —en los que viven temporalmente o todo el año— y que quieren mantener condiciones naturales no muy diferentes de las que conocieron antes de abandonar los pueblos. Sin duda son una de las columnas centrales de la movilización.

Con voz propia

La economía feminista como apuesta teórica y política

Cristina Carrasco (ed.)

prólogo de Begoña Zabala

textos de Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto, Paloma de Villota, Lina Gálvez y Yayo Herrero





5 aquí y ahora

La criminalización de la pobreza al servicio del neoliberalismo

Isabel Torre

Actualmente, en las sociedades neoliberales se está generalizando una percepción perversa de la pobreza que, contra toda lógica, criminaliza a sus propias víctimas. ¿Cuál es la imagen que se ofrece al conjunto de la ciudadanía sobre las personas *pobres?* ¿Qué tratamiento les es dado, desde instancias políticas, a las personas que viven en los márgenes? ¿Qué efectos o motivaciones supone la criminalización de la pobreza para el neoliberalismo? A lo largo de las siguientes líneas trataremos de sintetizar algunas de nuestras reflexiones respecto a estos interrogantes.

Generalmente, se hace uso de un concepto laxo como es el término "pobreza" para aglutinar al conjunto de personas y colectivos desfavorecidos de la sociedad. Por visualizar y visibilizar algunos, podemos nombrar algunas minorías étnicas, los inmigrantes irregulares, las personas desempleadas o con trabajos precarios, aquellas sin recursos y con problemas de drogadicción o, en general, cualquier persona en riesgo de exclusión. Esta clasificación solo pretende dar una pista de las diversas situaciones en las que, también de forma paralela, pueden encontrarse las personas que nuestra sociedad ha considerado *pobres*.

Es precisamente en las tipologías y las clasificaciones donde reside la fuerza de los discursos y las prácticas que aquí se estudian, puesto que la sola asociación de símbolos y conceptos permite la construcción de estereotipos capaces de desencadenar reacciones de manera semiautomática. De hecho, el discurso de la derecha ha solido disfrazar algunos de sus conceptos ideológicos de verdades universales, al convertir determinados casos concretos en el reflejo "típico" de la noción ideológica defendida (Žižek, 2007). Así, si nos refiriéramos a los colectivos anteriormente mencionados, aludiendo deliberadamente a determinados casos particulares, sería posible construir una realidad social que metiera distintas casuísticas en el mismo saco. La hegemonía ideológica se consigue cuando se logra acompañar con una narrativa propia estas realidades sociales construidas. Como ejemplo de esto, tomemos el caso del colectivo de personas desempleadas. El caso puntual que se desea convertir en típico es el de la persona desempleada *vaga* que recibe ayudas del Estado. El relato que,

"... con criminalización de la pobreza
nos referimos, sobre
todo, al discurso y
prácticas que tienden a culpabilizar a
los pobres y demás
marginados/as de su
propia situación de
pobreza o exclusión"

desde posiciones neoliberales, tenderá a acompañar esta pretendida universalidad es aquel que enjuicia al colectivo por no querer participar de valores dignificantes relacionados con la ética del trabajo así como por aprovecharse de lo que le es ajeno, tal y como haría un parásito. La aceptación inconsciente de este tipo de tópicos genera prejuicios políticos, que se convierten en "tesis con las que se argumenta, pero sobre las que no se argumenta" (Bourdieu, 1999, p. 20).

Los relatos moralizantes que intentan imponerse sobre estos casos típicos tienden a entrañar mensajes despectivos sobre los colectivos a los

que se refieren. Esto, unido a la flexibilidad de la definición del término "pobreza", coadyuva a que esta sea una palabra que sirva para estigmatizar a todas las personas pobres, sea cual sea su comportamiento concreto en la sociedad (Bauman, 1998). Y es que, como apunta Bauman, con el mismo término puede referirse a personas que nada tienen en común, como madres solteras, fracasados escolares, drogadictos o delincuentes. Según este autor, lo que justifica que se les considere del mismo montón es que todos ellos constituyen una "carga para la sociedad" (2001).

Más allá de la deshonra que esto supone, las clasificaciones que asocian la pobreza con comportamientos pretendidamente indecentes, lo que hacen es dirigir la atención a estos estilos de vida para explicar la situación de pobreza desde el punto de vista de las conductas individuales, ignorando las condiciones estructurales y el propio sistema de estratificación. Así, con criminalización de la pobreza nos referimos, sobre todo, al discurso y prácticas que tienden a culpabilizar a los pobres y demás marginados/as de su propia situación de pobreza o exclusión. Por otra parte, contemplamos también una segunda acepción: aquella que alude a la persecución penal de aquellas personas que viven en situación de pobreza. Esto incluye la acentuada vigilancia a personas pobres, la generación de leyes que conviertan en delito ciertas prácticas habituales entre las personas que viven en los márgenes así como el endurecimiento de los correspondientes castigos.

1. Demonización en el discurso

Los gobiernos neoliberales activan ciertos mecanismos de criminalización de la pobreza y uno de ellos es el propio discurso. Los políticos y sus representantes mediáticos se esfuerzan por difundir un mensaje difamador, esperando que cale en la sociedad. Cuando las personas han interiorizado este mensaje, pasan a reproducirlo, asumiéndolo como propio. Esto, unido al hecho de que el término "pobreza" es ambiguo y modulable, provoca situaciones en las que, de

forma paradójica, el discurso criminalizador es utilizado de manera recurrente por los propios individuos protagonistas de este, aplicándolo cada vez a personas situadas en niveles inferiores del sistema de estratificación social, o de otras zonas del mismo estrato, según cómo se haya construido dicho sistema de representación. Así, personas de la clase trabajadora podrán aplicar el discurso a inmigrantes sin papeles, o jóvenes precarios harán lo propio con desempleados de larga duración.

La motivación principal que imprime el discurso difamador de las personas que viven en situación de pobreza es la de ahondar en la responsabilidad individual. Y es que a todos aquellos que defienden el sistema de libre mercado les conviene recalcar el concepto de igualdad de oportunidades, pasando el foco de atención de la sociedad al individuo. El efecto deseado es evitar la protesta por el funcionamiento antisocial de un sistema que funciona bajo la máxima de "más mercado, menos Estado", fórmula que acaba subordinando la política social a las necesidades del mercado capitalista (Pérez, 2005). Paradójicamente, la noción de *igualdad* de oportunidades ayuda, mediante la criminalización de la pobreza, a legitimar la *desigualdad* imperante en las sociedades neoliberales. De acuerdo con lo que dicta el dogma, la causa de que los pobres sean pobres es su propia conducta. Y es que responsabilizar del crimen de la pobreza es, a fin de cuentas, criminalizar.

A este respecto, viene al caso reproducir algunas declaraciones de conocidos dirigentes políticos, como David Cameron:

Es como si estas cosas —obesidad, alcoholismo, drogadicción— fueran puramente hechos externos, como una plaga o el mal tiempo. Obviamente las circunstancias tienen una enorme repercusión. Pero los problemas sociales a menudo son consecuencia de las decisiones que toma la gente (Jones, 2013, p. 95).

Mediante estas afirmaciones, Cameron instaura la supremacía de la responsabilidad individual mientras reduce las circunstancias condicionantes a hechos percibidos inevitables como son una plaga o el mal tiempo. Sin embargo, oculta una de las causas fundamentales —y en ningún caso, inevitable — que llevaron a gran parte de la clase trabajadora de su país a problemas de alcoholismo o drogadicción: el desmantelamiento de la industria británica propulsado por la también conservadora Margaret Thatcher (Jones, 2013).

La responsabilidad individual no solo se enaltece desde posiciones conservadoras, sino que también lo viene a hacer la renovada socialdemocracia. Así, el laborista David Freud, consejero briánico de bienestar social en 2008, sostenía entonces que había que quitar las ayudas a dos millones de personas para incentivarles a trabajar (Jones, 2013). La ceguera ante los condicionamientos estructurales se hace patente si tenemos en cuenta que la declaración de intenciones se hacía en un momento en el que solo había disponible medio millón de ofertas de trabajo. Por su parte, el también laborista James Purnell iba más

allá en unas declaraciones que, además de asentar la idea de que las personas que no tienen un empleo es porque no quieren, introducían elementos incriminatorios y enfrentaba a estas personas a los contribuyentes: "Si hay un puesto de trabajo, creemos que la gente debería cogerlo. No podemos permitirnos gastar el dinero de los contribuyentes en personas que se están aprovechando del sistema" (Jones, 2013, p. 115). Purnell refuerza su mensaje acusatorio calificando a los beneficiarios de las prestaciones como personas "con vidas miserables cuyo universo consiste en un viaje del dormitorio al salón" (Jones, 2013, p. 117). En la misma línea acusadora y moralista, el conservador británico Rhodes Boyson sostenía que "se les saca el dinero a los enérgicos, exitosos y previsores para dárselo a los ociosos, fracasados e indolentes" (Bauman, 1998, p. 80). Tal y como adelantábamos en la introducción, ejemplos como estos alimentan el estereotipo que define a la clase más desfavorecida como "parásitos de la asistencia social" (Bauman, 1998, p. 113), y difunden un relato que se desea hegemónico, en el que la responsabilidad de las desdichas ajenas recae sobre sus propios protagonistas.

En cuanto a la confrontación fomentada por estos portavoces políticos, es importante reparar en su aportación a la construcción de la clase baja como enemigo simbólico. La figura del enemigo simbólico representa un fenómeno social construido, no desde la lógica racional, sino desde el discurso o la mitología social, por los especialistas de la producción simbólica: políticos, periodistas y poderes oficiales (Tinessa, 2008). Tal y como apunta Bauman, el concepto de clase marginada, alimentado desde el poder, contribuye a crear la imagen de una categoría inferior de "gente plagada de defectos que constituye un 'verdadero problema social'" (1998, p. 13), la cual es invocada por la sociedad para canalizar sus temores infundados. Además del temor, Bourdieu destaca el odio, en este caso al inmigrante, como sentimiento en el que transformar las desdichas de la sociedad (1999). Coincide con él Guy Standing, al declarar que "la demonización de los 'inmigrantes ilegales' se ha convertido en parte de la reacción populista a las inseguridades que aquejan al precariado en general" (2013, p. 57). Y es que las sociedades en donde impera la inseguridad económica de forma generalizada, son más proclives a demonizar (Standing, 2013).

Además de legitimar el sistema de libre mercado y canalizar las ansiedades generadas por las prácticas antisociales que este implica, la criminalización de la pobreza que impregna el discurso neoliberal sirve, también, para erosionar el tradicional contrapoder de la clase trabajadora. Para ilustrar esta idea tomamos el trabajo de Owen Jones sobre el incitado desprecio a los jóvenes de empleos precarios del Reino Unido, apodados de forma peyorativa como *chavs*. Según resume el propio Jones, los ataques a los *chavs* forman parte de una ofensiva neoliberal, iniciada por el thatcherismo y extendida por el nuevo laborismo, que ha conseguido transformar en desprecio la forma idealizada,

o si acaso condescendiente, en la que se ha solido ilustrar a la gente de clase obrera en otros momentos de la historia (2013).

Para Jones, la cruzada neoliberal pasa por negar la existencia de la propia clase trabajadora, que durante tantos años ha luchado por sus derechos como auténtica fuerza política. Para ello, se utilizan mensajes como el que dice que "todos somos de clase media". Naturalmente, ese "todos" excluye a las personas más desfavorecidas, que no podrían en ningún caso ser consideradas clase media por su situación, a todas luces, marginal. Así pues, los que quedan fuera de esta clase media dominante resultan ser estigmatizados como vagos o delincuentes. En solo veinte años, las personas del Reino Unido que creían que la causa de la pobreza era la vagancia o la falta de voluntad había aumentado del 19% en 1986 hasta el 27% en 2006 (Jones, 2013, p. 52). La imagen que se vende sobre los pobres es que tienen un comportamiento irresponsable y reprobable que no se ajusta a los estilos de vida aceptados que comparte la respetable clase media.

Ante la ofensiva vilipendiadora, la clase trabajadora se encuentra sin referentes válidos que refuercen su identidad como tal. El estigma creado representa un impedimento para la conciencia de clase, ya que nadie podría estar orgulloso de pertenecer a un colectivo al que se ofende, demoniza y ridiculiza constantemente. Como resultado, la tradicional clase obrera se disuelve, aceptando el discurso dominante e intentando pasar por clase media, al menos y en la medida que pueden, en su comportamiento dócil. La clase media nunca ha sido combativa, sus integrantes no son adeptos de la teoría crítica del conflicto, por lo que las clases poderosas que abanderan los ideales neoliberales se hallan en una posición privilegiada en la que no encuentran oposición.

2. Medidas políticas que criminalizan

Además del discurso, el programa político neoliberal integra dos procesos que también representan formas de criminalización de la pobreza. Nos referimos, por un lado, a la intensificación del Estado penal, cuyas políticas represivas encarnan la criminalización de la pobreza en su vertiente más práctica, y, por el otro, a la disminución del Estado social. Ambas tendencias han sido estudiadas en profundidad por Loïc Wacquant, un investigador francés de cuya obra extraemos nuestras principales conclusiones.

En lo que respecta al ensanchamiento del aparato penal, el autor galo acuñó el concepto *prisonfare*, en clara analogía con el programa de bienestar social *welfare*, para designar "la corriente de políticas —categorías abarcadas, programas y discursos— que confrontan los males urbanos desplegando la policía, las cortes, las cárceles y prisiones y sus extensiones" (2012, p. 193). Dentro de "males urbanos" el autor hace referencia implícita a la pobreza en las ciudades, y a los efectos perjudiciales que esta genera, al privar a ciertos sectores de la población de satisfacer sus necesidades básicas. Esto incluye,

"... a todos aquellos que defienden el sistema de libre mercado les conviene recalcar el concepto de igualdad de oportunidades, pasando el foco de atención de la sociedad al individuo"

muchas veces, problemas de drogadicción o delincuencia.

Después de analizar las tendencias penales de los países denominados "avanzados", Wacquant no duda en establecer un claro vínculo entre el neoliberalismo imperante y el desarrollo de las políticas punitivas dirigidas a la delincuencia entre las clases marginales (2011b). Con la intensificación del *prisonfare*, se intenta "transformar un problema político, enraizado en la desigualdad económica e inseguridad social, en un problema de criminalidad" (Wacquant, 2006, p. 61).

En lugar de atajar los problemas atendiendo sus causas con medidas sociales a largo plazo, se promueve la represión y el castigo. Entre las propuestas represivas para la reducción de estos males urbanos destaca la estrategia de *tolerancia cero*, popularizada por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien la puso en práctica en los años noventa.

¿Pero qué motivaciones encierra la expansión penal emprendida por gobiernos neoliberales? En el seno de un sistema que busca el crecimiento económico, donde prima la obtención incremental de beneficios monetarios y se apoya en mecanismos de especulación financiera, la demanda de mano de obra queda en cuestión. Así, las personas sin recursos que no pueden ofrecer su fuerza de trabajo al mundo empresarial, se encuentran desposeídas de toda forma legitimada de subsistencia. Según Bauman, estas personas no son funcionales desde un punto de vista productivo y pasan, pues, a ser consideradas superfluas para el sistema (Caballero y Vilaseca, 2003). Así, con la aparición del paro masivo y de larga duración, el aparato penal cumple su misión neutralizadora, controlando a los que viven en situación de pobreza y sin perjuicio de "almacenar los elementos más perturbadores" (Wacquant, 2011b, p. 145).

Dentro del entramado punitivo que se apresta a neutralizar a la población marginada, el sistema carcelario viene a ocupar un lugar cada vez más central, dadas las alarmantes tasas de encarcelamiento de algunos países que conducen a una situación de evidente sobrepoblación carcelaria. Esta "dictadura sobre los pobres", denominada así por Wacquant (2006, p. 66), además de no atender las causas reales de los problemas, no hace más que agravarlos, al imponer el cumplimiento de penas en condiciones severas y, muchas veces, con trato inhumano.

Por otra parte, no cabe duda de que en la actual era de la globalización, las grandes corporaciones van acumulando poder, mientras los Estados-nación ven mermado el suyo propio. Esta situación en el contexto internacional se ve asimismo reflejada a nivel interno, ya que las políticas que implementan los gobiernos neoliberales promueven una retirada del Estado de la esfera social.

Así, el papel del Estado se vuelve cada vez más difuso, por lo que necesita un rol convincente que legitime su razón de ser. La criminalización de la pobreza se promueve, en este caso, para justificar la actuación del Estado, en respuesta a supuestos riesgos en la seguridad. En los últimos veinte años, la mayoría de países del primer mundo han endurecido sus políticas policiales, judiciales y correctivas (Wacquant, 2011b). La paradoja es que no han aumentado sus índices de criminalidad, y mucho menos las de victimización (Sales, 2014, p. 63). La expansión del Estado en este ámbito restringido, pero poderoso, consigue reforzar su autoridad, contrarrestando así su creciente déficit de legitimidad en los ámbitos económico y social.

Por último, el sistema *prisonfare*, al igual que hacen los discursos difamadores, también sirve al proceso de creación de enemigos simbólicos. Y es que el tratamiento delictivo de los males urbanos tiene la capacidad de generar nuevas categorías de percepción pública (Wacquant, 2011b). Según la tesis de Wacquant (2011b), los Estados neoliberales tienden a proyectar un clima de inseguridad que sirve para canalizar, mediante la figura del delincuente común, las ansiedades generadas por el propio sistema desregulado. Mediante la construcción de esta figura de enemigo simbólico, el miedo ante la incertidumbre y desprotección social se transfiere al plano de la criminalidad.

Conviene señalar que esta construcción simbólica propicia una Justicia —poco justa— que discrimina en función de la clase social o la procedencia del acusado. Por si fuera poco, a causa del conocido como efecto Pigmalión, estas nuevas categorías también tienden a perpetuar y ampliar las prerrogativas del Estado penal (Wacquant, 2011b). Hacemos especial hincapié en la producción de la realidad social en relación al crimen o la delincuencia, puesto que los datos ponen en evidencia que a pesar de las cada vez más altas tasas de encarcelamiento de muchos países, los índices de delincuencia no se han incrementado en proporción (Sales, 2014; Jones, 2013; Wacquant, 2004). Lo importante del caso es que, como sintetiza González aludiendo a la tesis de Wacquant: "la criminalidad no ha cambiado, ha cambiado la visión que la sociedad tiene de ella" (2011, p. 98). En la misma línea, Tinessa coincide en relacionar el número de reclusos, no tanto con el índice de criminalidad, sino con los procesos de criminalización, asegurando que lo que aumenta es el castigo, fruto de la construcción social (2008). Por todo esto, no debemos subestimar la importancia en la producción de la realidad del prisonfare.

Terminamos nuestra reflexión con el otro proceso estudiado por Wacquant que también presenta una clara conexión con la criminalización de la pobreza, esto es, el deterioro del Estado social. Concretamente, la constricción de ayudas sociales que analiza Wacquant se enmarca en lo que comúnmente ha sido denominado como *workfare*. Arriba y Pérez nos remiten a una definición del término que circunscribe su uso a aquellos programas o esquemas de prestación de asistencia social que requieren que la gente trabaje como condición

"Mediante la construcción de esta figura de enemigo simbólico, el miedo ante la incertidumbre y desprotección social se transfiere al plano de la criminalidad"

para su acceso (2007). En una sociedad donde el trabajo formal es considerado la llave para la ciudadanía, la corriente neoliberal consigue dilapidar la protección del Estado del bienestar para pasar a un sistema de prestaciones sociales condicionadas, el cual funciona como instrumento de vigilancia y disciplina. Como diría Wacquant, "el Estado pretende modelar, clasificar y controlar aquellas poblaciones que viven en su territorio y que se considera que se desvían de la norma, son dependientes y resultan peligrosas" (2011b, p. 154).

Así, desde una visión liberal e individualista, el trabajo se concibe como un deber que debe cumplir toda persona que no disponga de otros medios para sobrevivir. Es importante comprender la fuerza de esta idea que se ha instalado en el imaginario colectivo, puesto que constituye el germen de la criminalización de la pobreza. La ética protestante del trabajo junto a la máxima de la responsabilidad individual culpabiliza a las personas pobres desempleadas de su propia situación. La condicionalidad de las prestaciones sociales sirve para reforzar esta postura, enaltecer los valores oficiales, y bajo su pretexto, coaccionar a los y las pobres para malvender su mano de obra. Y es que las técnicas disuasorias de los programas workfare empujan al actual precariado a aceptar las duras condiciones del cada vez más desregulado mercado laboral (Wacquant, 2011a).

3. Conclusiones

La magnitud del grado de desigualdad existente en las sociedades neoliberales requiere de procesos legitimadores y de otro tipo que sostengan el orden social y, por consiguiente, el statu quo. Con mantenimiento del statu quo también nos referimos al mantenimiento de las tendencias desreguladoras del mismo, esto es, la progresiva reducción de la intervención pública en asuntos sociales. La criminalización de la pobreza tiene un papel fundamental en el mantenimiento del actual estado de cosas, para cuya consecución contribuye en distintos aspectos: (1) legitimar el sistema de libre mercado, primando la responsabilidad individual sobre la colectiva; (2) canalizar las incertidumbres propias de dicho sistema desregulado, mediante la construcción de enemigos simbólicos tanto desde el discurso como desde las políticas penales; (3) reafirmar la menguante autoridad del Estado, mediante estrategias punitivas sobre los de abajo; (4) controlar a la sociedad, neutralizando los posibles elementos disruptivos mediante la coacción de los sistemas workfare o el castigo del aparato prisonfare; y, por último, (5) desarmar la resistencia, evitando la unión de los y las trabajadoras que pudieran, de otro modo, convertirse en agentes del cambio social.

Isabel Torre es doctoranda en Estudios sobre Desarrollo en la Universidad del País Vasco-Euskalherria Universitatea (Instituto Hegoa).

Bibliografía citada

- Arriba, A., y Pérez, B. (2007) "La última red de protección social en España: prestaciones asistenciales y su activación". Política y Sociedad, 44, 115–133.
- Bauman, Z. (1998) Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.
- (2001) La sociedad individualizada. Madrid: Cátedra.
- Bourdieu, P. (1999) Contrafuegos: reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Anagrama.
- Caballero, A., y Vilaseca, S. (2003) "Entrevista a Zygmunt Bauman. Ya no hay lugares vacíos donde arrojar los desperdicios humanos". El Viejo Topo, 183, 10–17.
- González Sánchez, I. (2011) "Redefiniendo la pobreza y la penalidad: la formación del Estado neoliberal". RES. Revista Española de Sociología, 15, 97–102.
- Pérez, B. (2005) Políticas de activación y rentas mínimas. Madrid: Cáritas.
- Jones, O. P. (2013) Chavs: la demonización de la clase obrera (3ª ed.). Madrid: Capitán Swing. Tinessa, G. (2008) "Marginados, minorías e inmigrantes: criminalización de la pobreza y encarcelamiento masivo en las sociedades capitalistas avanzadas". Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, 148, 163–188.
- Sales, A. (2014) El delito de ser pobre: Una gestión neoliberal de la marginalidad. Barcelona:
- Standing, G. (2013) El precariado. Una nueva clase social. Barcelona: Pasado & Presente.
- Wacquant, L. (2004) "La escoria de la sociedad de mercado. Estados Unidos: de la asistencia al encarcelamiento". Renglones, 20-30.
- (2006) "Castigar a los parias urbanos". Antípoda. Revista de Antropología Y Arqueología,
- (2011a) "Neoliberal penality at work: a response to my Spanish critics". Revista Española de Sociología, 15, 115-123.
- (2011b) "Poner orden a la inseguridad. Polarización social y recrudecimiento punitivo". Revista Catalana de Seguretat Pública, 141-155.
- (2012) "El matrimonio entre el workfare y el prisonfare en el siglo XXI". Astrolabio, 184— 205.
- Žižek, S. (2007) En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur.

La Renta Básica Universal y la Seguridad Social

Mikel de la Fuente

Las propuestas de la Renta Básica Universal (RBU) han tenido y tienen un amplio desarrollo en diversas publicaciones de la izquierda alternativa en el Estado español y en numerosos foros de debate. Sin embargo, se ha dedicado muy escasa atención a la relación de la Renta Básica con las prestaciones de la Seguridad Social. Ello ha ocurrido a pesar de que en las propuestas de sus defensores y, en particular de la Red Renta Básica, se expone de forma clara y abierta que la Renta absorberá a todas las prestaciones económicas de la Seguridad Social, manteniéndose solo en lo que la cuantía de las mismas exceda a la Renta Básica. Este artículo tiene por objetivo realizar un breve análisis de esta cuestión.

La Renta Básica Universal y la Seguridad Social

En la generalidad de las propuestas de RBU, su instauración va acompañada de la disolución de los sistemas de Seguridad Social y de la desaparición de las cotizaciones sociales que financian a los regímenes de reparto de esos sistemas, tanto las que son a cargo de los empresarios como las que se descuentan de los salarios de las personas trabajadoras.

Esa supresión no considera el carácter de salario socializado de las cotizaciones sociales y de las prestaciones que se derivan de las mismas. Contrariamente al pensamiento económico neoliberal, la cotización social no es una tasa sobre el trabajo, que se debiera reducir o anular para aumentar la competitividad de las empresas, sino un elemento íntegro de los recursos de los trabajadores, ya que financia, a través de las prestaciones, el tiempo fuera de trabajo, en la jubilación, la enfermedad, la maternidad... De esta forma, cada grupo social de la clase asalariada recupera las cotizaciones de sus activos ocupados en forma de prestaciones. Los sistemas de seguridad social —de los que las pensiones constituyen un subsistema— son así un progreso gigantesco en la condición salarial. Decimos salario socializado y no diferido, como se formula frecuentemente, que da a entender que las pensiones recuperan lo cotizado durante la vida profesional, omitiendo que en la mayoría de los regímenes de reparto existen elementos redistributivos no solo entre generaciones sino también entre individuos y grupos sociales de una misma generación (Harribey, 2013, p. 1; el autor cita un informe de 2010 del Conseil d'Orientation des retraites, conforme al cual la redistribución alcanzaba el 20% del gasto en el sistema francés).

El salario socializado realiza una tutela desmercantilizadora de la condición de la fuerza de fuerza de trabajo, al contribuir a garantizar una adecuada

reproducción de la fuerza de trabajo, y, en ese sentido, es de alguna forma inherente al sistema del capitalismo maduro (Monereo Pérez, 1996, p. 38). La solidaridad salarial que se expresa en los regímenes de reparto basados en cotizaciones supone el reconocimiento de que son los trabajadores los productores de la riqueza y las cotizaciones una parte de ese trabajo de producción de la riqueza.

Esta socialización ha conducido a la elaboración de conceptos tales como el de deducciones obligatorias que engloban tanto a los impuestos como a las cotizaciones sociales y para los ideólogos empresariales representan una "carga indebida" que puede tener, además, consecuencias catastróficas para la actividad económica/1. Hay que recordar que, incluso cuando el coste de la Seguridad Social era mínimo, sus adversarios advertían sobre su "insostenibilidad", mientras que su participación en el PIB se ha multiplicado por más de quince/2. El concepto de "carga" no tiene la objetividad que pretenden tales ideólogos. De hecho en los ordenamientos jurídicos de Seguridad Social no aparece el concepto de "carga". Lo que designan con ese término responde a un salario indirecto que el asalariado no percibe directamente sino que es entregado a las instituciones que gestionan la Seguridad Social para que lo redistribuyan según las necesidades o según las cotizaciones. La pretensión de reducir las "cargas" equivale a la voluntad de reducir el salario indirecto, pero planteado con un lenguaje más sutil: es mucho más fácil plantear la reducción de las "cargas", a las que se intenta asociar la idea de que constituyen una inutilidad prescindible, que la reducción de los salarios.

Ese carácter de salario colectivo permite elementos solidarios tales como la instauración de edades de jubilación más tempranas para quienes hayan realizado trabajos peligrosos, insalubres y penosos, la fijación de pensiones mínimas y, correlativamente, topes máximos de pensiones, las transferencias de fondos desde los regímenes que mantienen una relación favorable entre activos y pensionistas hacia regímenes otros en los que esa relación es desfavorable como consecuencia de que la actividad correspondiente se encuentra en declive (minería del carbón por ejemplo), la atribución de cotizaciones por actividades de cuidado, etcétera. Siguiendo la doctrina instaurada en 1994 por el Banco Mundial, en su informe de 1994 Envejecimiento sin crisis, los sistemas públicos de reparto están siendo atacados por las contrarreformas que tratan de asignarles una función similar a la del seguro y las pensiones privadas basadas en la correspondencia estricta entre lo que

^{1/} Para ello se refieren al signo de la ofensiva ideológica neoliberal conocida con el nombre de "curva de Laffer", que representa los ingresos totales en ordenadas y la tasa de imposición en abscisas. Laffer afirmaba (sin aportar ninguna prueba empírica) que al haber sido ya sobrepasada la tasa máxima de imposición, la reducción de esa tasa aumentará los ingresos fiscales, al incitar a quienes las tasas de imposición demasiado elevadas habían desanimado a emprender —o intensificar— una actividad empresarial. Sin embargo, está probado que las menores cargas fiscales están asociadas a mayores concentraciones de la renta (como muestra, con abundantísima información, Piketty, 2014), e inferior proporción del gasto social sobre el PIB (Torres López, 2004).

^{2/} Algunos periódicos alemanes de inicios del siglo XX advertían sobre lo insoportable económicamente de las reformas sociales, cuando el coste de los seguros sociales apenas suponía el 1,4% del PIB.

"Esa supresión no considera el carácter de salario socializado de las cotizaciones sociales y de las prestaciones que se derivan de las mismas"

se da y lo que se recibe. Sin embargo, esa tarea no está de ninguna forma culminada, por lo que la mayoría social: defiende el mantenimiento y mejora de estos sistemas. Quizá por esa razón, la iniciativa de la RBU ha tenido un relativo éxito en Suiza, donde, tras un apoyo de más de 100.000 firmas, el gobierno tiene que convocar un referéndum antes de final del 2015, país en el que una parte importante de las pensiones se proporciona por la capitalización privada profesional e individual y en el que el sistema

público de reparto es débil/3.

Además de la cotización, hay otras dos modalidades de financiación de la protección social: el ahorro de actividad y la fiscalidad. La fiscalización de la protección social habría mostrado en el caso británico su incapacidad para impedir el estallido de la clase asalariada y habría permitido la multiplicación de la precariedad y la pobreza masiva. Su versión futurista combinaría el subsidio universal incondicional y los fondos de pensión. El estallido de la clase asalariada que institucionaliza abre la puerta a una sociedad dual, en la que los "in", agobiados por los impuestos, combaten por reducir el peso de la solidaridad y forzar al trabajo a los "out" /4.

Financiación de la RBU

Las propuestas de financiación de la RBU suelen basarse en la supresión de una parte sustancial de las prestaciones económicas de protección social. En Francia, René Passet proponía en el año 2000 una RBU equivalente, en términos anuales, al umbral de la pobreza, que se reducía al 50% de esa cantidad para los menores de 20 años. El coste total representaría el 25% del PIB, del que las tres cuartas partes se obtendrían mediante el reciclado de "los ahorros procedentes de la supresión de la parte del sistema de protección actual que se duplicará al garantizar el nuevo ingreso; básicamente, en la clasificación francesa, las prestaciones por maternidad-familia, empleo, vejez, aunque no las de salud-enfermedad que se mantendrían". La otra cuarta parte se financiaría posteriormente mediante la redistribución del nuevo valor creado por el crecimiento. En los términos de Michel Husson esa propuesta supondría una enorme transferencia de ingresos en detrimento de las personas jubiladas y paradas, cuyas prestaciones se situarían en el umbral de la pobreza. Las pensiones de jubilación se reducirían a la mitad y solo quienes percibiesen otros ingresos

^{3/} No ocurre algo similar en los países de la Unión Europea que disponen de regímenes de reparto: una iniciativa legislativa popular a escala de 21 países de la Unión Europea, que requería un millón de firmas y que fue lanzada en enero de 2013, solo obtuvo 285.042.

^{4/} El desarrollo de estas modalidades se encuentra en un trabajo colectivo sobre la situación de la financiación del empleo y la protección social en Europa (Friot, Clasquin, y Moncel, 2001).

distintos a su pensión dispondrían de un ingreso superior al umbral de pobreza. El autor precisa el importe de esa transferencia en perjuicio de los pensionistas: 100.000 millones de euros de la época (Husson, 2011, p. 13).

Las propuestas de la Red estatal de la RBU mejoran pero no eliminan los aspectos regresivos señalados. La generalidad de los escritos de la Red se refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, tanto contributivas como no contributivas, como "prestaciones públicas", al mismo título que las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas para situaciones de necesidad extrema. A continuación se indica una referencia pero hay otras muchas. En el escrito de los miembros de la Red que presenta un avance de un estudio sobre financiación de la renta básica en el conjunto del "reino de España" salvo la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra por quedar fuera del régimen fiscal común (Arcarons, Domènech, Raventós y Torrens, 2014a), se formula que la RBU "sustituye toda prestación pública monetaria de cantidad inferior" y que "deberá ser complementada cuando sea inferior a la prestación pública monetaria". Según este estudio, el ahorro en prestaciones monetarias por debajo de la Renta Básica ascendería a 80.163,5 millones de euros (referencias del 2010), computando las pensiones del sistema de Seguridad Social, las prestaciones por desempleo y las pensiones de Clases Pasivas del Estado y a 93.140,5 millones si se suman otras partidas tales como las prestaciones monetarias por familia, vivienda, exclusión social y otras, así como un ahorro estimado del 50% de la administración del gasto social/5. El coste fiscal neto de la implantación de la RBU se limitaría a 24.000 millones de euros, si bien en escritos posteriores le han elevado a 35.000 millones.

Esta incompatibilidad de la Renta Básica con las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con el alcance ya señalado, contrasta con la compatibilidad absoluta de los salarios, incluidos los muy elevados del personal directivo de las grandes empresas, y con las rentas de capital. Por poner algunos ejemplos. Una persona que percibiera un salario de 26.000 euros anuales brutos/6 percibiría al mismo tiempo los 7.500 euros anuales (625 euros mensuales por 12 pagas) del importe estimado de la Renta Básica. Una vez jubilada, su pensión de, por ejemplo, 20.000 euros anuales no se adicionaría a la RB sino que se reduciría a 12.500, de forma que sumada a las 7.500 de la RB sumara esa cifra de 20 000. Más llamativo aún es el caso de las prestaciones de desempleo. Esa misma persona cuyo salario sería de 2.160 euros/mes aproximadamente —que, repetimos, mientras se encontrara en situación de actividad, se complementaría con la cuantía de la Renta Básica—, si pasa a percibir la prestación de desempleo durante

^{5/} Cuando en otra parte del artículo (cuadro 2) se cuantifica el ahorro en prestaciones públicas asociado a la implantación de la RBU no se incluyen prestaciones de Seguridad Social tales como las de Incapacidad Temporal v Riesgo por Embarazo.

^{6/} Cifra próxima al salario medio bruto en el Estado Español durante 2013, que ascendía a 26.027 euros anuales.

seis meses, por un importe supuesto de 1.065 euros, cobraría, además de la Renta Básica, una cantidad complementaria de 440 euros, es decir, que además de la pérdida de ingresos que supone la prestación de desempleo en relación con el salario/7, perdería, en relación con la percepción en la situación de actividad profesional, el importe de la Renta Básica. Según mis cálculos, la cuantía global perdida por las prestaciones de la Seguridad Social comparativamente con otro tipo de rentas ascendería, con datos de la Seguridad Social del 2010 (2011 para el desempleo), a unos 23 mil millones de euros.

Por otra parte, la gestión de las relaciones entre RBU y pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social, que se mantendrían cuando su cuantía supere a la de la RBU (¿con que nombre y régimen jurídico?), cuestiona el argumento de la Red sobre la simplificación administrativa, la desburocratización y el consiguiente ahorro en los gastos de gestión que permitiría la RBU en relación con la situación actual. En el caso de las prestaciones de desempleo la gestión administrativa sería incluso más compleja que la actual por las frecuentes suspensiones e interrupciones de la prestación, especialmente en situaciones como la actual de desempleo muy elevado.

Cuando la Red de la Renta Básica defiende la RBU dada la dificultad del objetivo de un pleno empleo decente obvia que la dificultad derivada de la relación de fuerzas sociales y políticas para conseguir ese objetivo también existe para la modificación sustancial de la fiscalidad, en perjuicio de la gente de más ingresos y patrimonio, que exige la financiación de la Renta Básica. No hay más que ver la tendencia de las últimas décadas hacia una mayor regresividad fiscal puesta de manifiesto en la reducción de los tipos más altos en el impuesto sobre la renta, la reducción y las desgravaciones en el impuesto de sociedades, el establecimiento de tipos más reducidos para las rentas de capital en relación con los ingresos del trabajo, la proliferación de figuras como las SICAV, la fiscalidad más favorable para las grandes empresas transnacionales cuyo último episodio ha sido el "caso Juncker" en Luxemburgo, a lo que hay que agregar el fraude y los paraísos fiscales. En una entrevista los representantes de la Red constatan esta realidad, que concretan en que mientras que las rentas del trabajo representan el 85% de la renta declarada por el IRPF, los rendimientos empresariales y patrimoniales solo representan el 4,7% y el 5,9% respectivamente, el rendimiento empresarial medio es un 25% inferior al rendimiento del trabajo medio y la corrección a la

^{7/} La cuantía de la prestación de desempleo es la siguiente: durante los primeros seis meses, el 70% de la media de cotización de los seis anteriores a la situación de desempleo (equivalente al salario que percibiese); posteriormente y hasta los dos años que puede durar la prestación contributiva, el 50% de esa misma media (tras haberse reducido del anterior 60% en julio de 2012), que según la introducción del Real Decreto Ley 20/2012 tendría la finalidad de "impulsar la activación de los desempleados impulsando el pronto retorno a la ocupación". Pero las cuantías porcentualizadas no pueden sobrepasar determinados máximos: el 175% del "indicador público de rentas de efectos múltiples" (426 euros en el 2014), que pasa al 200% o 220% si la persona desempleada con acceso a la prestación tiene, respectivamente, uno o más hijos.

desigualdad, medida a través del índice de Gini, es solo del 4,5% (Arcarons, Domènech, Raventós y Torrens, 2014b). La diferencia entre ambas alternativas para asegurar un ingreso decente para todas las personas reside en la mayor legitimidad de la reducción del tiempo de trabajo que permite trabajar menos para trabajar todas y todos, que es la base de una sociedad igualitaria.

La garantía de ingresos

Mientras que no sea posible asegurar un empleo para todas las personas un principio elemental de justicia exige la atribución de un ingreso mínimo decente para todas las personas privadas de empleo, cuya cuantía se puede establecer conforme al criterio de que alcance, al menos, la del umbral de pobreza (en la Unión Europea el 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo), es decir, una cuantía similar a la que propone la Red para la RBU. En la actualidad, la implantación y gestión de las rentas mínimas garantizadas corresponde en el Estado español a las Comunidades Autónomas. Sus cuantías y nivel de cobertura son muy escasos, con las excepciones del País Vasco y Navarra. En el caso del País Vasco hay que precisar que, aunque la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -619 euros mensuales - es inferior a la del salario mínimo interprofesional, puede alcanzar los 880 euros si la persona beneficiaria tiene otras personas a cargo. Además, la RGI es compatible con la Prestación Complementaria de Vivienda (en el 2014 la percibían el 41% de los perceptores de RGI), para hacer frente a los gastos de alquiler, por importe de 250 euros/mes y de 320 en el caso de las unidades de convivencia con dos o más hijos a cargo. Las cuantías de la RGI son más elevadas cuando complementan los ingresos del trabajo y el salario no alcanza 985 euros mensuales para una sola persona y 1.215 para tres o más miembros en la unidad de convivencia. De estos datos se desprende que, aunque la cuantía de la RGI es insuficiente para superar la pobreza, cuando la unidad de convivencia incluye a dos o más personas se sitúa en niveles más elevados que el salario mínimo y que las propuestas de la Red para la RBU, si bien ésta queda exenta en el IRPF.

En los últimos años las rentas mínimas autonómicas han coexistido con subsidios concedidos por el Estado con carácter temporal a parte de las personas desempleadas que, entre otros requisitos, hayan agotado las prestaciones de desempleo (Planes Prepara), una versión de la cual se ha acordado por el gobierno, la CEOE y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en diciembre de 2014, a través del RD Ley 16/2004 que regula el programa "de Activación para el Empleo" y que va dar lugar a una prestación de 426 euros/mes durante seis meses para un número de personas desempleadas estimado entre 400.000 y 450.000. Esta norma permite — en empresas o entidades que no formen parte del sector público — compatibilizar durante un plazo máximo de cinco meses la ayuda con el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial y de duración indefinida o temporal, descontando del salario la cuantía de la ayuda. Por si faltaba poco para la arremetida contra la función social del salario, "Además de la cotización, hay otras dos modalidades de financiación de la protección social, el ahorro de actividad y la fiscalidad" esa compatibilidad se extiende a otras ayudas a la contratación, por ejemplo, con las existentes para el llamado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (art. 4 Ley 3/2012), pudiendo alcanzar hasta un 80% del coste salarial anual.

Es obvio que la protección otorgada por estas prestaciones, tanto las autonómicas —con las excepciones parciales de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra— como las estatales, es radi-

calmente insuficiente, por lo que se requiere un aumento sustancial de la cuantía de los "mínimos sociales" y una extensión a todas las personas sin empleo y a las que no puedan trabajar, que debe ir acompañada de un aumento sustancial del salario mínimo que evite los problemas de legitimidad social si sus cuantías son muy próximas/8. La Red de la RBU argumenta que la incondicionalidad de la Renta Básica permitirá evitar la estigmatización que acompaña a las rentas mínimas. Aunque es cierto que existe ese riesgo, el mismo no desaparece con la RBU: en este caso se centraría en aquellas personas que perciban la RBU sin realizar un trabajo, asalariado o no.

Alguna breve conclusión

En este artículo he apuntado alguno de los interrogantes que suscita la Renta Básica Incondicional/9. Quiero insistir en la gravedad que supondría para la Seguridad Social y, en particular para las pensiones y las prestaciones de desempleo, las propuestas de la Red estatal de la RBU, que reproducen en esta materia otras propuestas internacionales de los defensores de esta Renta. Se basan en un error teórico y político de envergadura: la asimilación de la Seguridad Social a una función asistencial del Estado, similar a las de las rentas de garantía de ingresos de las Comunidades Autónomas o las pensiones no contributivas, en lugar de una conquista histórica del movimiento obrero, de extensión del salario directo al salario indirecto socializado que proporciona prestaciones de continuidad y proporcionales al salario cuando las personas asalariadas no pueden trabajar por desempleo, enfermedad o accidente o alcanzar una determinada edad, la de jubilación.

Desde este ángulo su puesta en práctica supondría un debilitamiento sustancial del Estado social, que prolongaría y reforzaría los que están realizando los

^{8/} Sobre algunas cuestiones de la problemática de la relación entre salarios y pensiones mínimas y rentas garantizadas autonómicas, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, véase: De la Fuente, 2014. El movimiento a favor de los derechos sociales de Euskal Herria, Elkartzen, propone establecer el umbral de la pobreza y, con ello, el importe de lo que llama "salario social" — que entiendo sería una versión mejorada de la RGI —, en el 37,5% del PIB per cápita vasco, equivalente a 894 euros mes en el 2014. Para el salario mínimo propone una cuantía del 50% del citado PIB per cápita. No acepta el esquema de la Red de la RBU, por considerar que "supone un trasvase del dinero público", que debe limitarse a las personas en desempleo (Basterra, 2014).

9/ En un artículo posterior tengo previsto desarrollar la relación de la RBU con el empleo, con especial atención al análisis y propuestas de Albarracín (2014).

gobiernos a instancia de las instituciones internacionales neoliberales de entregar al capital financiero las pensiones y la asistencia sanitaria. Además de la pérdida comparativa de ingresos que experimentarían las personas pensionistas y desempleadas en relación no solo con los empresarios y rentistas sino también con las asalariadas en situación de actividad, la desaparición de ese salario socializado, que se muestra resistente a los ataques neoliberales, dejaría a los ingresos de la mayoría social dependientes de una Renta financiada por una fiscalidad que está conociendo una evolución regresiva, con el grave riesgo de que la disminución de ingresos públicos se utilice para justificar la reducción de la cuantía de la RBU cuando las prestaciones socializadas habrían desaparecido.

Mikel de la Fuente es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco-EHU.

Bibliografía citada

- Albarracín, D. (2014) "Hacia un esquema de trabajo libre y solidario en una sociedad emancipada". VIENTO SUR. Disponible en: http://www.vientosur.info/IMG/pdf/Sobre_rentas_basicas_y_ trabajado garantizado.pdf.
- Arcarons, J., Domènech, A., Raventós, D. y Torrens, Ll. (2014a) "Un modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto de España: sí, se puede y es racional". Sin Permiso, 7/12/2014
- Arcarons, J., Domènech, A., Raventós, D. y Torrens, Ll. (2014b) "Algunas aclaraciones sobre la financiación de la Renta Básica. Entrevista". Sin Permiso, 21-28/12/2014. Disponible en: http://www. sinpermiso.info/textos/index.php?id=7591.
- Basterra, J. (2014) "Elkartzen: 'Urge situar el umbral de la pobreza en el 37,5% del PIB vasco'". Gara, 1/6/2014.
- De la Fuente, M. (2014) "La Renta de Garantía de Ingresos y el empeoramiento de los salarios y derechos sociales". VIENTO SUR, 26/11/2014. Disponible en: www.vientosur.info/spip. php?article9606.
- Friot, B., Clasquin, B. y Moncel, N. (2001) "Salaire, fiscalité et épargne dans le financement de l'emploi et la protection sociale: l'exemple européen". Comunicación presentada en la Conferencia Internacional de Investigación en Seguridad Social "Año 2000". Helsinki, septiembre de 2001.
- Harribey, J.-M. (2013) "Autour de la protection sociale, de quoi parle-t-on?", Les Possibles (Revista editada a iniciativa del Consejo científico de ATTAC), N.º 01 Automne, 21/10/2013, 1-6.
- Husson, M. (2011) "Derecho al empleo o renta universal". VIENTO SUR. Disponible en: www.vientosur.info/documentos/Husson%20RB.pdf.
- Monereo Pérez, J. L. (1996) Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral. Madrid: CES.
- Piketty, T. (2014) El capital en el siglo XXI. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Torres López, J. (2004) "Fiscalidad vergonzante". Temas para el Debate, 19-11-2004. Disponible en: http://juantorreslopez.com/publicaciones/articulos-de-opinion-y-divulgacion/2004/fiscalidadvergonzante/.

Desmontando el TTIP: riesgos y amenazas del Tratado Trasatlántico

Lola Sánchez

La primera vez que oí hablar del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EE UU (TTIP, por sus siglas en inglés) fue un poco antes de las elecciones europeas, así que, cuando llegué al Parlamento Europeo, tenía clarísimo que alguno de los eurodiputados de Podemos debía estar en la comisión de Comercio Internacional, para dar la batalla contra esta monstruosidad, y sobre todo, para informar a la ciudadanía.

Porque lo primero que llama la atención de este tratado es el secretismo con el que se está llevando a cabo, la falta de debate político y público, su ausencia total en los medios. Esta falta de información no es casual y responde a una voluntad firme, por parte de la Comisión Europea, de *colarnos* este tratado por la puerta de atrás, de un día para otro y sin posibilidad de dar marcha atrás.

El TTIP es un tratado mastodóntico, cuyo principal objetivo es aumentar el comercio entre la UE y EE UU. Objetivo que en sí mismo no es censurable, aunque sí lo son los medios para conseguirlo, y ahí es donde radica el peligro de este tratado. Los aranceles comerciales ya son muy bajos, alrededor del 2-3% para la mayoría de los productos. Lo que se pretende es armonizar las normativas comerciales y de servicios, es decir, igualarlas, pero lo que se intuye es que esta armonización se haría a la baja, ya que son las multinacionales las que están redactando este tratado, y para ellas, nuestros derechos son sus obstáculos.

Las formas en las que se están llevando las negociaciones, con absoluta opacidad, son también una pista importante para creer que los mecanismos que están proponiendo no van a satisfacer a la ciudadanía sino a otra serie de intereses.

La negociación de este tratado comenzó en el año 2013 pero sus antecedentes se pueden remontar a los años en que Ronald Reagan y Margaret Thatcher gobernaban e implementaban una serie de medidas económicas de corte ultraliberal, expresando máximas como "El Estado no es la solución a los problemas, el Estado *es* el problema" (Reagan) o "La sociedad ya no existe, solo existe el individuo" (Thatcher). Ambos soñaban con un escenario como el que hoy dibuja el TTIP.

Durante los años 90 se van desarrollando ciertos marcos para el diálogo empresarial trasatlántico, es decir, grupos de presión empresariales que se reúnen periódicamente con altos funcionarios y cargos públicos de ambos lados del océano. Para los grandes negocios, las puertas de sus despachos están siempre abiertas.

Es en 2007 cuando Bush, Merkel y Durão Barroso (como presidente de la Comisión Europea) firman la creación del llamado Consejo Económico Trasatlántico, cuyo objetivo era la integración económica de las partes a través de la armonización de sus legislaciones. Pero, ¿quién forma parte de este consejo? Se sientan en la mesa representantes de más de 70 empresas multinacionales: BP, Exxon, Basf, Ford, Deutsche Bank, Philip Morris, IBM... Son ellos quienes asesoran a la Comisión y al gobierno de los EE UU, son ellos quienes tienen un asiento reservado en estas reuniones y no la sociedad civil, excluyendo así a 800 millones de ciudadanos, europeos y estadounidenses, de todo este proceso de armonización.

Seis años después, en febrero de 2013, Obama, Van Rompuy (como presidente del Consejo) y de nuevo Durao Barroso como presidente de la Comisión, firman un acuerdo para iniciar las negociaciones sobre el tratado de libre comercio más ambicioso de la historia: el TTIP.

Los sueños de las grandes transnacionales van tomando forma

Algunos días después, y antes de dejar la Secretaría de Estado, Hillary Clinton afirmó que el gran mercado trasatlántico "es una OTAN económica, y que como la OTAN, tendrá lugar bajo tutela americana". Toda una declaración de intenciones, aunque creo que no refleja del todo la realidad. Ella también intentaba vender este tratado a sus conciudadanos. Pero este tratado no es un ataque de EE UU hacia la UE sino de las grandes empresas y poderes económicos privados a las democracias occidentales.

Consecuencia de estas democracias imperfectas que sufrimos, el Parlamento Europeo vota y aprueba, en mayo de 2013, el lanzamiento del mandato para comenzar las negociaciones, sin conocer su contenido, pues será redactado tres semanas después, y no verá la luz pública hasta octubre de 2014. Un cheque en blanco que el Parlamento otorga a la Comisión y al Consejo para que redacten por su cuenta, sin consultar y sin informar a nadie, los pilares sobre los que se sustentará el futuro tratado. El nacimiento del TTIP ya es en sí mismo una afrenta a la democracia.

Este mandato, compuesto por 46 artículos, ha sido absolutamente secreto durante más de un año, y ni siquiera los eurodiputados tenían acceso a él. Fue filtrado hace meses, y así los ciudadanos pudimos conocer su contenido mucho antes de que la Comisión lo hiciera oficialmente público, el día 10 de octubre de 2014, precisamente el día antes de la movilización europea contra el TTIP, pretendiendo de esa forma dar una imagen de transparencia inexistente y de callar bocas a todos los que denunciamos esta insoportable opacidad.

De estos 46 artículos, voy a exponer algunos que considero significativos:

"La negociación de este tratado comenzó en el año 2013 pero sus antecedentes se pueden remontar a los años en que Ronald Reagan y Margaret Thatcher gobernaban" Artículo 4: "Las obligaciones del acuerdo afectarán a todos los niveles de gobierno".

De esta forma, las obligaciones emanadas del tratado no solo afectarán a los Estados miembros sino también, en el caso de España, a los ayuntamientos y comunidades autónomas, aunque en ninguna fase del proceso se les haya consultado o siquiera informado. Esto es especialmente grave en relación a la cláusula Inversor-State Dispute Settlement (ISDS), sobre arbitraje de controversias entre inversor y Estado, pues será aplicable a

la legislación municipal y autonómica.

Artículo 5: "[...] se asegurará un resultado equilibrado entre la eliminación de los derechos y la eliminación de los obstáculos reglamentarios inútiles al comercio [...]".

¿Y qué pueden ser estos obstáculos inútiles al comercio? Podemos pensar en las legislaciones sobre protección social, salarial, sanitaria, alimentaria, medioambiental, etcétera, que son las que obligan a los grandes inversores y compañías transnacionales a cumplir con ciertas medidas y normativas que, lógicamente, les molestan y les impiden obtener los beneficios deseados. Por ejemplo, la existencia de un salario mínimo interprofesional es el primer *fastidio* con el que se topan.

Artículo 22: "El objetivo de las negociaciones sobre la inversión será negociar disposiciones que apunten a la liberalización y la protección de las inversiones, [...]".

Esta idea es recogida en varios artículos del mandato, como una especie de mantra: liberalizar los mercados al máximo y proteger al inversor.

Artículo 24: "[...] El acuerdo apuntará a aumentar el acceso mutuo a los mercados públicos en todos los niveles administrativos (nacional, regional y local), y en el sector de los servicios públicos, [...] asegurando un tratamiento no menos favorable que el concedido a los proveedores establecidos localmente. El acuerdo debe también incluir reglas y disciplinas para superar los obstáculos, [...] incluyendo las exigencias de localización y de producción local, [...]".

Es decir, un ayuntamiento no podrá priorizar las empresas locales en los contratos de servicios o bienes, pues ese requisito sería el primer obstáculo con el que se encontrarían las transnacionales a la hora de hacerse con contratos públicos. Poco hay que añadir a esto: sus costes de producción son mucho menores y serán imbatibles a la hora de competir en precio con cualquier

pyme local. Sobre los problemas de desaparición de puestos de trabajo y empresas locales, más los problemas medioambientales, nada se dice. Para ellos serán daños colaterales sin importancia.

El mandato es toda una bomba de relojería preparada para estallar en el corazón de los estados de bienestar.

Pero el TTIP va mucho más allá. Afectará en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como la alimentación, los fármacos, la protección del medio ambiente, los servicios públicos, los financieros, la calidad de los productos o las condiciones laborales.

En cuanto a la alimentación, este tratado abre las puertas de par en par a los productos alimentarios norteamericanos, cuyos controles de calidad y exigencias sanitarias son infinitamente más bajos que en Europa. Los transgénicos se producen y comercializan sin apenas control, igual que la producción ganadera. Está permitido alimentar al ganado con hormonas de crecimiento (que fueron paulatinamente prohibidas, como el clembuterol, en los países de la UE durante los años 90 por su riesgo para los consumidores), y también está permitido algo que me resultó muy curioso: sumergir los pollos en cloro (lejía) para blanquear su piel antes de envasarlos. Todos estos procedimientos son algo común en los EE UU, pero aquí están prohibidos. El TTIP levantará todas esas limitaciones.

Es necesario añadir, en el campo de la alimentación, otro dato: el número y el tamaño de las explotaciones agrarias y ganaderas en los dos lados del Atlántico son totalmente diferentes. Mientras que en Europa hay muchas empresas y la mayoría son pequeñas y medianas (un gran porcentaje son pymes familiares), en EE UU hay muy pocas empresas pero tienen un tamaño descomunal. Pensemos en Monsanto o en la United Fruit Company. Cotizan en bolsa, mueven millones de dólares al día. Una vez más, sería imposible competir con ellas, incluso añadiendo los gastos de transporte para cruzar el océano. Sería la muerte de gran parte del campo en Europa, y de la vida rural que ya es casi una reliquia.

El etiquetado de los productos de alimentación no reflejará su procedencia exacta (para no perjudicar a los grandes productores de transgénicos o de carne con clembuterol), así que los consumidores no tendremos ni la opción de elegir lo que comemos. Comeremos lo que nos pongan en el súper.

En el campo del medio ambiente, se desregularizarán prácticas como el fracking para la extracción de gas, así como la comercialización de productos químicos que hasta ahora estaban prohibidos por su peligrosidad.

En cuanto a los fármacos, se prevé la extensión de la patente hasta los 20 años (actualmente son 10), de forma que tardaremos el doble de tiempo en poder elaborar medicamentos genéricos, con el consecuente aumento de gasto farmacéutico para las familias y para los sistemas de salud.

La brutal liberalización que acarreará el TTIP en los servicios públicos (es uno de sus principales objetivos) también se aplicará a los servicios financieros y a la movilidad de divisas. Lo que quiere decir que aquellas prácticas que provocaron esta crisis no solo no serán reguladas, sino que se profundizará en su *libre albedrío*. Con ello es más que probable que crisis y burbujas financieras como las vividas estos años se conviertan en recurrentes, algo que no preocupa en absoluto al gran capital, ya que con ellas sale ganando aún más.

Los servicios públicos europeos son un gran pastel para los inversores privados, especialmente para los norteamericanos, donde el mercado ya está copado y repartido. Europa y su Estado de Bienestar es una tierra llena de oportunidades de negocio para las grandes compañías (especialmente las aseguradoras), donde la salud, las pensiones, la educación y otros muchos servicios permanecen intactos (o casi) y listos para ser explotados.

¿Transparencia? No, gracias

Estas son solo algunas consecuencias de este tratado, por lo que se entiende mejor por qué lo están negociando en absoluto secreto: la opinión pública se opondría frontalmente. El mandato permaneció oculto durante más de un año y los documentos de la negociación solo han podido ser consultados por algunos eurodiputados, aquellos que son coordinadores en la comisión de comercio internacional, que son siete (somos 751 miembros del parlamento). Cuando uno de estos coordinadores solicita ver los documentos, es guiado hasta la *reading room* o sala de lectura, donde no puede entrar con papel, ni lápiz, ni móvil. Un funcionario le mostrará ciertos documentos que podrá leer y memorizar, pero no podrá difundir lo que allí ha leído.

Hace unas semanas, y en un nuevo alarde de transparencia, la comisaria de comercio internacional, la ultraliberal sueca Cecilia Malmström, anunció que, a partir de ahora, cualquier eurodiputado podrá acceder a la sala de lectura y consultar los documentos. Pero las condiciones son las mismas (confidencialidad), así que en el fondo nada ha cambiado. La ciudadanía sigue sin poder conocer ni opinar. Pura democracia.

La transparencia tampoco es plato de buen gusto para el jefe de negociadores europeo, el español Ignacio García Bercero, que en una carta que fue filtrada aseguró a su homólogo estadounidense que se mantendrían en secreto esos documentos hasta treinta años después de la ratificación del tratado. Treinta.

Todos estos esfuerzos por mantener ocultos los documentos de la negociación se entienden aún mejor cuando llegamos a la cláusula ISDS, que establece el sistema de arbitraje de disputas entre inversores y Estados, que es el verdadero caballo de Troya del TTIP, pues es por donde se vacía de soberanía al Estado. El simple planteamiento de tal situación ya es en sí mismo una ofensa

a la democracia: pone en pie de igualdad a inversores y Estados, como si la legitimidad en la actuación de unos y otros fuera similar.

Esta cláusula establece que el inversor podrá demandar a los Estados cuando la legislación de estos impida, o interrumpa, los beneficios esperados por parte del inversor. Los esperados, lo que significa que con un simple estudio o proyecto iniciado ya podrán demandar no solo a los Estados sino, como veíamos más arriba, también a los diferentes niveles de gobierno, como ayuntamientos, *landers*, provincias, autonomías, etcétera.

Pero no puede ser a la inversa: el Estado no puede demandar al inversor.

El sistema de arbitraje prevé, para cada caso en concreto, la creación ad hoc de una corte de árbitros. Tres abogados de empresas legales privadas que decidirán, a puerta cerrada, sin ningún tipo de legitimidad democrática ni independencia, el destino de todo un Estado. Si fallan a favor del inversor, cosa que ocurre en el 31% de los casos (el 27% de las veces se llega a un acuerdo), el Estado o el nivel de gobierno demandado deberá indemnizar a la compañía o al fondo de inversión con sumas millonarias, que pagará con dinero público, que pagaremos entre todos.

Ese 27% de casos en que se llega a un acuerdo, es porque el Estado ha acabado pagando grandes sumas al inversor para detener la demanda y/o acordando algún tipo de concesión.

Solo la defensa en este tipo de disputas alcanza cantidades enormes de dinero. Los árbitros que participan de estas disputas no cobran menos de 600 euros la hora de trabajo. Todo un negocio para los *lobbies* legales, que también tienen acceso preferencial en las negociaciones.

Pero las implicaciones del ISDS van más allá de los asuntos económicos. Cuando un inversor demanda a un Estado por legislar, está socavando su legitimidad, además de coartar su libertad y autonomía legislativa, ya que los distintos niveles de gobierno se cuidarán mucho de no incomodar a las grandes empresas antes de implementar una nueva ley. Tendremos dos opciones: legislar con mucho cuidado para no molestar su actividad y evitar una posible demanda, o tendremos que pagar entre todos el derecho a protegernos. Este es el más grande de los peligros que trae el TTIP: la cesión de soberanía de los Estados a los inversores.

Cuando doy una charla sobre el TTIP, siempre pongo un ejemplo muy significativo para explicar este mecanismo: imaginad a la Asociación Nacional del Rifle, el principal lobby norteamericano de las armas, demandando a España, o a cualquier otro Estado europeo, por nuestras restrictivas leyes sobre el uso y pertenencia de armas. Dichas leyes impiden a los fabricantes de armas vender lo que ellos desearían, así que las dos opciones que tendríamos serían o bien pagarles una enorme indemnización con dinero público, o modificar la ley y permitir la venta de armas al mismo nivel que en EE UU.

Pero no acaba ahí el golpe a la soberanía. Se prevé la creación de un Consejo de Cooperación Reguladora, donde se sentarán representantes de los negocios "Este mandato, compuesto por 46 artículos, ha sido absolutamente secreto durante más de un año, y ni siquiera los eurodiputados tenían acceso a él"

y estudiarán las legislaciones que están siendo tramitadas en los distintos niveles de gobierno. Es una especie de pre ISDS, de forma que cuando detecten que alguna institución está redactando una ley que les vaya a suponer una limitación a sus beneficios o a sus actividades, tengan el poder de detenerla y evitar que se apruebe. Aquellas leyes que se "escapen" a este consejo serán enviadas directamente a un tribunal de arbitraje por parte de los inversores.

¿Quién tendrá la soberanía entonces? Ninguna institución será libre de legislar y proteger a sus ciudadanos, y si lo hace deberemos pagar una multa por ello.

Es incomprensible para mí cómo los representantes europeos y americanos pueden estar impulsando esto, y debería ser entendido como un delito de alta traición. Venden la soberanía, venden a sus pueblos. Desmantelan la democracia.

¿Y cómo defienden ellos este tratado? Repitiendo hasta la saciedad unos supuestos beneficios económicos, de empleo, de aumento de actividad, de aumento del PIB, en toda la eurozona. Pero no hay un solo estudio de impacto que respalde estos datos.

La Comisión Europea ha encargado ya cuatro estudios, para un período de 10 a 20 años, y que en absoluto dibujan un escenario tan beneficioso:

- En cuanto al PIB, dichos estudios calculan un aumento del 0,3 al 1,3% (lo
 que supondría una media de 50\$ al año por persona, cuidado no lo gastemos
 todo de golpe...).
- Sobre el empleo permanente que crearía el TTIP, tres de los estudios dicen que no aumentará, y uno de ellos reconoce que habrá una eliminación de puestos de trabajo de hasta un millón durante los primeros diez años, a causa principalmente de la deslocalización.
- Las importaciones dentro de la UE se verán reducidas hasta un 30%.
- El descenso de ingresos de la UE en concepto de aranceles provocará una reducción del 2% en el presupuesto comunitario (eso son 2.600 millones de euros).
- Ninguno de los estudios analiza los costes sociales del cambio regulatorio que supondría el TTIP. Los ignoran por completo.

La mayoría de los datos extraídos de estos cuatro estudios no respaldan el enorme optimismo con el que la CE y gran parte del parlamento defienden este tratado, y eso que son estudios encargados por ellos.

En octubre de 2014 fue publicado un estudio independiente, elaborado por Jeronim Capaldo, de la Universidad Tufts (http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP.pdf), y que por primera vez aplica el modelo de las

Naciones Unidas de Política Global para simular el impacto del TTIP en la economía global, en un contexto real como el que vivimos, es decir, de prolongada austeridad y bajo crecimiento en la UE. Las conclusiones son reveladoras, y hasta sorprendentes, como que las economías del norte de Europa serían las más perjudicadas:

- Pérdidas netas en términos de exportaciones netas hasta 10 años después de ser aprobado.
- Pérdidas netas en términos de PIB (norte de Europa -0,50%, Francia -0.48%)
- Pérdidas en los ingresos de los trabajadores (Francia -5.500€ por trabajador al año, Norte -4.800€, Reino Unido -4.200€).
- Pérdida de puestos de trabajo, calcula que al menos 600.000, y una vez más, el norte sería el más perjudicado, seguido de Alemania con una pérdida de 134.000 empleos.
- Pérdida en los ingresos públicos de los Estados.
- Mayor inestabilidad financiera y acumulación de desequilibrios. Y con la desregulación financiera prevista, nos enfrentaríamos a una mayor vulnerabilidad para hacer frente a las posibles crisis que nos viniera de los EE UU.

¿Hacia la desintegración económica de la UE?

En conclusión, este estudio prevé que el TTIP (que no es solo una reforma económica, sino política, aunque no lo quieran reconocer), implica la desintegración económica de la UE. Toda una paradoja que la UE, nacida para impulsar su integración económica, ahora trabaje con tanto empeño en desintegrarse.

En febrero se va a desarrollar la octava ronda de negociaciones en Bruselas. La intención de la CE es tener redactado el texto del tratado antes de que acabe 2015, y presentarlo al Parlamento para su aprobación, en bloque, sin posibilidad de enmendarlo. Pero dudo mucho que les dé tiempo, más aún cuando algunos gobiernos, como el alemán o el francés, están empezando a mostrar grandes dudas, especialmente respecto a la cláusula ISDS o a la creación del Consejo Regulador. Muy curioso habiendo sido Merkel una de las grandes impulsoras de este tratado.

Este aún pequeño pero significativo viraje viene determinado por la movilización ciudadana que, especialmente en Alemania, se opone frontalmente al TTIP. Situación muy lejana a la que vivimos en nuestro país, donde no solo el debate público es inexistente, sino también la propia información. La ciudadanía no sabe qué es el TTIP, a la gran mayoría ni siquiera les suena el nombre. Una estrategia definida y desarrollada por la Comisión Europea y los grandes poderes económicos con la única finalidad de eludir dicho debate, pues saben muy bien lo que están poniendo en juego y que por tanto, la gente se opondría sin fisuras.

El TTIP es un intento de instauración de un nuevo orden mundial, no solo en el aspecto de la cesión de soberanía de los Estados a los poderes económicos, sino también por establecer un modelo comercial que abarcaría casi el 50% de los intercambios mundiales, obligando así al resto del globo a adoptar dicho modelo si no quieren quedarse fuera. El ascenso de los países BRICS es también un empujón a esta estrategia.

Estas son unas palabras que pronunció Salvador Allende ante la Asamblea General de la ONU, en el año 1972, y que, después de más de 40 años, cobran más relevancia que nunca:

Haremos frente a un conflicto frontal entre las empresas transnacionales y los Estados. Estos serán cortocircuitados en sus decisiones fundamentales por organismos globales que no dependen de ningún Estado, y donde las actividades no son controladas por ningún parlamento o institución representativa del interés colectivo. [...] Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas, apostados en los más variados lugares de influencia.

Todo un visionario.

Pero prefiero acabar con la teoría de Susan George, que llama al TTIP "el tratado vampiro", pues si le da la luz, morirá.

Hagamos lo posible por sacarlo a la luz y convirtámonos todos en portavoces contra este golpe mortal del capital a nuestras democracias, que aunque imperfectas, son mejores que lo que nos quieren imponer.

Lola Sánchez es eurodiputada de Podemos.

voces miradas

Nombres escritos en la corteza de los árboles

Ángel Rodríguez López (Jaén, 1982)

Ángel trabaja como logopeda en la asociación de daño cerebral sobrevenido Adacea de Jaén. Ha sido incluido en diversas antologías: Poetas de Jaén (2008), Voces del Extremo (2011), 65 Salvocheas (2011) y Negra flama: poesía antagonista en el estado español (2013). Ha colaborado en la revista La hamaca de lona y en el proyecto Genoma poético. En 2011 publica su primer poemario, Poesía para perdedores (Ediciones Monosabio), y en 2014 Nombres escritos en la corteza de los árboles (La isla de Siltolá, Sevilla).

25 poemas, 25 nombres propios, 25 vidas. Mujeres que dicen la infancia, la adolescencia, heridas por el dolor, las interminables horas de trabajo, el desprecio de los hombres, la miseria, los trabajos invisibles o iluminadas por el recuerdo o el amor compartido. Versos donde el ritmo, la musicalidad, las enumeraciones, el uso de la aliteración, las sorprendentes metáforas, crean una atmósfera, un espacio, donde se afirma la realidad del poema. La verdad que habita en los márgenes de la ciudad: en el campo, en los suburbios. Lo que queda es solo "tu nombre escrito en la corteza de este árbol"; la palabra inscrita en el poema para defender la necesaria vigencia del amor, lo que niega la muerte y afirma el común derecho a la felicidad. "Hay que defender este mundo: / tus ojos están dentro." A esta defensa nos convocan 25 mujeres, que como Marta, camina y "vomita resistencia a la derrota, / niega triunfos al fracaso". Hay que escribir estos nombres en la corteza de los árboles, hay que leerlos, hay que defender este mundo; por la razón más sencilla, más irrenunciable: porque "tus ojos están dentro".

Antonio Crespo Massieu

Marcela

Eras preciosa,
todos los niños corríamos bajo tu falda,
competíamos a la carrera
temprano para verte
con tu mochila y una felpa
de flores de oreja a oreja.
En tu puerta, a la vuelta de catequesis,
dábamos descanso a los gatos y las piedras,
a las viejas y a las piedras,
a las piedras y a los lagartos de la tapia
al resto de cabezas abolladas y pelonas del barrio,
a los pantalones cortos y a los calcetines sin goma que nos
apretaran.

Marcela, volvías sin prisa aplicada en el cortejo, sin querernos.

Nosotros hacíamos de tu día el nuestro, de tu tiempo el nuestro.

Incluso un día *El Raspas* robó la navaja de su padre y te escribió

en el chopo que riega, si viene bueno el invierno de agua, el río.

Pero de aquello sólo queda tu nombre escrito en la corteza de este árbol y un puñado de años con más pena que gloria.

María

María es liviana como la arena en un vendaval, cuando el sol se precipita triste entre los montes de la tierra yerma.

Marta

Marta siempre camina lenta, con prisa, pero lenta le cuesta trabajo no trabarse en el paso con esos pies suyos tan enormes. Por eso llega tarde y los besos le caducan entre los dientes y su lengua se reseca de respirar fatigada por la boca. Sus rodillas son torpes y se le encadena el muslo al gemelo haciendo un largo paseo de su camino. Sube, Marta, arrastrando los pies ya sin dedos, se hace su día largo, la calle enorme y su mundo pequeño. Pero camina, ella siempre camina, vomita resistencia a la derrota, niega triunfos al fracaso.

Silvia

Bien sabía que besar a Silvia era divertido como montar en bicicleta, y no por la matemática de piñones y platos que ruedan en pos de ruedas para avanzar sin miedo, sería que sus labios no se extrañaban con el paso de los años y las vueltas a vueltas del volver de la lengua cada vez parecían más rápidas, granizo que se deshace tras la tormenta.

Su saliva era aire que se llevaba sin moverte de su boca por una carretera a veces preñada de mordiscos, otras, los desniveles de vahos buscaban soluciones de lamidos huérfanos y canciones frente a la ventana, como si Audrey se hubiera mudado al barrio.

Lorena

A la salida del pueblo viejo, junto al descampado donde los muchachos fumaban base, han abierto un gimnasio que ya huele a cieno de guantes y suelas.

Lorena lo regenta, con su diente de oro y su silencio frío que sale, vomitado, por ese puro que chupa y chupa. Decían que su croché de izquierda tambaleaba el cielo y que Rocky Marciano suspiraba al verla doblar cabezas y saltar estómagos. Se hablaba de sus piernas, de cómo aparecían y desaparecían y estallaban en un cuerpo y el sudor era fuegos de artificio.

Un asalto y otro y otro más. Lorena aguanta que la muerdan y baja la defensa ya vencida de derecha y asume los golpes. Lorena aguanta todo por 40 euros, su culo es duro y por eso hay que follarla con ganas. Sienta su gesto en su cuna de rodillas, agarra con los labios el suplicio de saber que esta velada no acaba aún, que ya no hay rival a quien tumbar, ni brazo que subir, ni cinturón de hojalata dorada, ni gancho, ni derecho certero que sienta el oponente como un jarro de clavos sobre el orgullo.

Cuando los muchachos acaban y se limpia la pena de las comisuras, mira al saco y le avisa: "sigue ahí colgado, espérame una noche más, solo un poco, pues mañana serán mis pies los que vuelen sobre el suelo".

Yolanda

I

Yolanda, tu cuerpo menudo, espejo del día, suspiro que empujas al sol sobre la ventana.

II

Escucha, del día de hoy no es lo peor esta pérdida de tiempo, esta monotonía recostada en la esfera del reloj. No es que me duelan las manos del frío que hace apretar los dientes hoy que amenaza nieve y la chica del tiempo lucha contra alertas naranjas y una arruga se le anidaba junto al ojo.

Lo malo de este día es que suben potros azules por tu nuca, ríos de algas bajan tu espalda y un alimoche abre sus alas en tu boca. Ahora quizá claves letras en una pantalla que gasta tus ojos y los enturbia para no ver cómo hierven tus pestañas sobre el teclado. Yo te imagino lejos, eso es lo malo, Yolanda, al otro lado de la ciudad. El tráfico nos corta en dos.

Raquel

A mi otra Raquel. A la que quiero. La que me aguanta.

Hay que defender este mundo: tus ojos están dentro.

śubrayados subrayados

El POUM y el caso Nin. Una historia abierta

Pelai Pagès y Pepe Gutiérrez-Álvarez (drs.), Barcelona, Laertes, 2014, 303 pp., 19,50 €.

Como recuerdan los coordinadores de esta obra colectiva en sus respectivos prólogo y epílogo, "pocas veces la historia de un pequeño partido ha llenado tantas páginas". Así ha sido en sucesivos momentos, sobre todo desde los años 70 del pasado siglo, y no cabe atribuir esto únicamente al hecho de haber sido víctima de la represión estalinista: es su originalidad dentro de la pluralidad de organizaciones que se reclamaban del marxismo durante la Revolución y la Guerra Civil españolas la que hace de esa formación un referente para cualquier tarea de recuperación de nuestra memoria colectiva y de resignificación de la idea de socialismo en este siglo XXI.

Son muy variados los temas abordados en esta obra por Pelai Pagès, Pepe Gutiérrez-Álvarez, Wilebaldo Solano, Chris Ealham, Josep Antoni Pozo, Reiner Tosstorff, Marta Brancas, Javier Maestro, Miquel Berga, Alfonso Clavería, Andy Durgan, Miguel Romero y Jordi Torrent; todos ellos autores con un reconocimiento legítimamente ganado por sus contribuciones en anteriores trabajos historiográficos. La relación con el anarcosindicalismo, el papel tantas veces "olvidado" de las mujeres, las notables aportaciones teóricas y políticas (por ejemplo, sobre la cuestión nacional catalana) de Andreu Nin y Joaquim Maurín, los problemas y dilemas tácticos del POUM (incluidas sus diferencias con Trotsky), el tratamiento específico del crimen de Estado que supuso el "caso Nin", el recuerdo del recorrido vivido por Eric Blair, conocido luego como George Orwell, el debate suscitado por la película Tierra y libertad de Ken Loach, son algunas de las cuestiones tratadas a lo largo de sus páginas.

No falta tampoco la polémica con otras líneas de interpretación historiográfica (como la representada por Ángel Viñas o Antonio Elorza) y con otras corrientes políticas dentro del campo republicano en torno a lo que estaba en juego a partir de julio de 1936. Porque, como recuerda Jordi Torrent, el empeño de la mayoría de ellas en oponer la dinámica antifascista a la de la revolución social que irrumpe entonces no deja de chocar con "una realidad harto documentada: la de que para amplísimos sectores del movimiento antifascista la estrecha conjunción de las dos dinámicas — nada ilusoria en el desarrollo efectivo de los hechos— constituía la garantía más sólida para ganar finalmente la guerra" (p. 238); una toma de posición, la de esos historiadores pretendidamente objetivos, que obviamente no es ajena a su interés en hacer apología del papel del PCE o de Juan Negrín, descalificar al POUM y mostrar "comprensión" con la represión que este partido sufrió, simbolizada trágicamente en Andreu Nin.

Poco cabe echar en falta en este esfuerzo colectivo, resultado de un ya largo recorrido que esperemos siga teniendo en la Fundación Andreu Nin y en otros afines espacios de encuentro para continuar profundizando en las materias aquí tratadas.

Jaime Pastor

La economía franquista y su evolución. Los análisis económicos del Partido Comunista de España.

Enrique González de Andrés. Madrid, La Catarata, 2014, 326 pp., 20 €.

Bien puede decirse que la historia económica del franquismo es a día de hoy bastante bien conocida. De hecho comenzó a estudiarse mucho antes que aspectos como la represión. Es cierto que, por lo menos durante el primer decenio, las estadísticas oficiales eran muy deficientes o no existían, como pone de relieve el calamitoso Censo de la Población de 1940 o el hecho de que una encuesta sistemática de salarios no apareciese hasta 1963.

De todos modos, González de Andrés no ha pretendido hacer una nueva historia de la economía franquista, sino una historia de las ideas económicas. Y lo hace en un doble sentido. En primer lugar, se detiene en los muy amplios estudios que economistas e historiadores de la economía han realizado. En segundo lugar, sigue los análisis económicos del Partido Comunista de España. Ambas tareas las ha resuelto en el libro mediante la utilización masiva y minuciosa de bibliografía y documentación de primera mano.

Para González de Andrés la gran mayoría de estudios sobre la economía española durante el franquismo están realizados bajo el prisma de la economía política clásica. Así, tienden a indicar que las peculiaridades económicas de la época se deriva-

ron del tipo de intervención estatal. Una intervención que hacía de España un caso anómalo con respecto de las economías capitalistas de nuestro entorno. Con esta perspectiva, continúa González de Andrés, no puede comprenderse la economía franquista que, a la postre, no fue sino una economía capitalista. De todas maneras, nuestro autor conoce bien la existencia de otra serie de estudios realizados desde el punto de vista de la economía crítica, tal y como pone de manifiesto a lo largo de las páginas del libro. Por lo tanto, los déficits de comprensión y de conocimiento que señala me parecen un tanto exagerados.

Por lo que se refiere a la historia de los análisis económicos del PCE. se caracterizarían por su insistencia en el atraso, por cifrar la existencia de una minoría exigua —los terratenientes y más tarde los monopolios— que, frente a la gran mayoría de la población, se benefició ampliamente, y por reconocer a duras penas el crecimiento que tuvo lugar a partir de un determinado momento. Como muy bien señala González de Andrés este análisis resultaba funcional a la estrategia comunista. Una estrategia muy conocida y que se basaba en una alianza interclasista amplia, que incluía a la burguesía no monopolista, para derribar a Franco. Ello no podría generar sino contradicciones. De manera que para nuestro autor, más allá de la jerga, los análisis comunistas se compadecerían poco con el marxismo. Ahora bien, mucho me temo que estos desajustes doctrinales poco importaban, a menos que sirviesen para fustigar a la disidencia. Por otra parte, que el discurso económico del PCE estuviera al servicio de una alianza interclasista, cono sucedió desde la Unión Nacional de los años cuarenta hasta el eurocomunismo de los setenta, no representa sorpresa alguna, pues estamos hablando de un partido de orden desde 1935.

José Babiano

La lucha de clases. Una historia política y filosófica.

Domenico Losurdo, Barcelona, El Vieio Topo, 2014, 25 €.

Cuando parecía que los ideólogos del liberalismo y cierta socialdemocracia habían conseguido hacer creer a buena parte de la gente que eso de la lucha de clases era un viejo asunto del pasado que, si bien podía tener algún sentido a finales del siglo XIX o principios del XX, tras la Guerra Fría y la derrota del bloque soviético carecía ya por completo de sentido, ahora resulta que la realidad nos muestra con su habitual contundencia y tozudez que no, que no solo existen clases sociales, sino que su lucha se augura encarnizada. El profesor de la Università degli Studi di Urbino Domenico Losurdo suele hablar claro y, en no pocas ocasiones, puede provocar bastante polémica, como sucedió con su Stalin: historia y crítica de una leyenda negra (El Viejo Topo, 2011), pero no escribe banalidades ni perogrulladas. Al contrario, en La cultura de la no violencia: una historia alejada del mito (Península, 2011), Contrahistoria del liberalismo (El Viejo Topo, 2007) o El lenguaje del imperio: léxico de la ideología americana (Escolar y Mayo, 2008), lo que precisamente intenta es esclarecer muchas confusiones interesadas que han llegado a producir un considerable estado de ignorancia disfrazada de lugar común que es impres-

cindible desenmarañar. Cuando la propia izquierda parece haber estado haciendo el trabajo sucio que la derecha daba ya por sentado, en décadas de autoflagelación por los "errores" cometidos, por no haber sido lo que idealmente prometía ser, Losurdo se pone a trabajar y a estudiar: la historia del movimiento obrero v de las revoluciones, las obras de Marx, Engels, Lenin, Gramsci o Mao, el desarrollo de los movimientos de liberación nacional, la ideología dominante, etcétera, y armando los datos y la reflexiones en una obra documentada y potente, analiza la realidad y los problemas, históricos y teóricos, de la lucha de clases, o mejor, de las luchas de las clases, pues es necesario distinguir y, al tiempo, entrecruzar y contrastar las luchas proletarias, las de emancipación de la mujer o las de los países sometidos o colonizados por potencias extranjeras. Una tarea que no es en absoluto sencilla, que ha provocado encendidas polémicas en el seno del propio marxismo y en otros discursos alternativos, y que a la postre debiera conducir a lo que Rosa Luxemburg denominara una "realpolitik revolucionaria". En las páginas de Losurdo encontramos los textos de Marx o de Tocqueville, de Lincoln o Rhodes, de Constant o

Ferguson, y las políticas llevadas a cabo en la Revolución de octubre, en las guerras de descolonización o en China de la mano de Deng Xiaoping, un referente importante para el filósofo italiano en esta obra, para acabar con una crítica del tipo de "populismo" representado, según el autor, por Simone Weil o, en un orden distinto,

por el Negri de la trilogía de *Imperio*. Un libro denso, complejo, que por fin se despoja del cilicio que la izquierda parecía obligada a sufrir, como pidiendo perdón por no haber sido perfecta, y que invita a la reflexión y a la polémica. Como debe ser.

Antonio García Vila

Panfleto para seguir viviendo

Fernando Díaz. La Oveja Roja, Madrid, 2015. 134 pp. 15 €

Panfleto para seguir viviendo pone de manifiesto una concepción de la literatura como necesidad, como acontecimiento que contribuye a alimentar la insumisión; una expresión que, escrita por y desde abajo, sirve para mostrar la otra Historia al mismo tiempo que desborda los marcos normativos socialmente mayoritarios.

Esta obra está concebida como un relato autobiográfico en el que se incluyen numerosas reflexiones, y mediante el cual asistimos al eco de sucesos históricos en los cuales se inserta la peripecia del autor-protagonista-narrador (quien se esconde tras un pseudónimo). Volcada y envuelta como un relato de ficción, como una novela, el texto responde en verdad a una historia real. Porque el mundo que se plasma es nuestro mundo.

Se trata de un libro incómodo, agresivo, duro, que nos habla de una realidad que nos atraviesa, que hemos consentido ignorar o que directamente nos toca. Fernando Díaz nos lleva a un entorno de exclusión social, de familias desestructuradas golpeadas por la miseria del capitalismo. En ese retrato aparecen todos los conflictos y las contradicciones de nuestra vida, de la vida de los jóvenes de la periferia, de los barrios proletarios de las grandes urbes en las últimas décadas. En la narración del protagonista, se suman trapicheos con drogas, pre-

cariedad, explotación laboral, penuria económica, pasión por la lectura y asimismo la militancia política. Efectivamente, siguiendo parámetros de novela negra, el volumen aborda también la insurrección; la resistencia violenta y el ataque como respuestas ante la agresión de la desigualdad y de la marginalidad. Se trata de un libro escrito desde la rabia, narrado desde el hartazgo y la desesperanza, lo que dota a la obra de una gran frescura, pero con una estudiada conciencia de lenguaje. Al respecto, emplea un lenguaje áspero y seco, pero no parco, y que varía en tramos concretos de la novela, alternándose y dejando que las páginas se oxigenen. Con un ritmo muy fluido y elementos y pequeños motivos recurrentes que cohesionan la historia, el autor incorpora la reflexión al relato con soltura. En ese sentido, la trama desaparece en pasajes amplios del volumen bajo la sucesión de las reflexiones políticas y sociológicas del personaje, quien las expresa aun siendo consciente de las suspicacias que pueda crear su tono.

De este modo, *Panfleto para seguir viviendo* expone, sin pretender realizar un retrato generacional, con un registro coherente, las dificultades, la angustia y las aspiraciones de una parte de la juventud obrera.

Alberto García-Teresa



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

C/ Limón, 20. Bajo ext. dcha. • 28015 Madrid • Tel y Fax: 91 559 00 91 Correo electrónico: vientosur@vientosur.info

Apellidos		Nombre					
Calle		Nº	Escalera	Piso _	Puerta_		
Localidad			Provincia _	11.70	11114		
Región/Comunidad	C,P,P			País / Estad	do ob		
Teléfono	Móvil		Fax				
Correo electrónico		NIF					
Suscripción nueva 🗌 Susc	RIPCIÓN RENOVADA	Сор	IGO AÑO ANTERIO	R			
MODA	ALIDAD DE SUSCE	RIPCIÓN A	NUAL (6 NÚMEF	ros)	_		
ESTADO ESPAÑOL	ADO ESPAÑOL ☐ 40€			EXTRANJERO ☐ 70€			
SUSCRIPCIÓN DE APOYO 80€		1	3 1				
MODALIDAD DE ENVÍO		MODALIDAD DE PAGO					
ENTREGA EN MANO			TRANSFERENCIA (*)				
ENVÍO POR CORREO			DOMICILIACIÓN BANCARIA				
Banco Sant Número de cuenta: 0049 DOMICILIACIÓN BANC	CARIA - AUTORIZA	kari Agirre, 4006139 - ACIÓN DE	6. 48330 - Lemon IBAN: ES68 0049 PAGO (datos de	a (Bizkaia) 9 3498 2425 1 I titular de la	cuenta)		
Apellidos							
Calle		. 7 %		- 14			
Localidad Región/Comunidad							
ENTIDAD OFICINA _							
Fecha:		Firma	×				

Observaciones: (*) Comunicar los pagos por transferencia por medio de un correo a: vientosur@vientosur.info indicando oficina de origen, fecha y cantidad transferida.



Foto: A. Espinosa

"...un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de Volta con avispas ahogadas"